

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA

---

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
NICARAGUA,  
MANAGUA

UNAN-MANAGUA

**“Análisis de los presupuestos cautelares establecidos en el Código Procesal Civil Nicaragüense, y el cumplimiento de éstos en las solicitudes de embargo preventivo de bienes interpuestas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019”.**

Monografía presentada para optar al Título de  
**“Licenciado en Derecho”**

**Autores:**

1. Reynaldo Omar Villalobos Mendoza
2. Rolando Enrique Cordero Bravo
3. Russel Amarhu Lacayo

**Tutor:**

**Msc. Flavio José Chiong Arauz**

**Managua, Nicaragua**

**Marzo 2021**

**TEMA:**

“Análisis de los presupuestos cautelares establecidos en el Código Procesal Civil Nicaragüense, y el cumplimiento de éstos en las solicitudes de embargo preventivo de bienes interpuestas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019”

## **DEDICATORIA**

En primer lugar, a Dios que en su infinita gracia nos dotó de la inteligencia y sabiduría para asumir el reto de constituir un estudio monográfico para optar a la licenciatura que servirá a los alumnos de las nuevas generaciones.

También el presente estudio monográfico, está dedicado a la facultad de humanidades y ciencias jurídicas de la universidad UNAN – Managua, por la formación académica que nos brindó durante 5 años que, si bien pudieron ser pocos para el amplio estudio del derecho y su constante formación, nos encaminó en esta prestigiosa y noble profesión.

A nuestro tutor Dr. Flavio José Chiong Arauz, por compartir sus conocimientos no solo en el periodo de formación académica, sino también en la culminación de esta primera parte de nuestras vidas, porque el abogado nace por la práctica y la formación constante.

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradecimientos especiales a Dios sobre todas las cosas, a nuestras familias por apoyarnos y creer en nosotros pese a las dificultades del camino y a las contingencias involuntarias.

A la Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza y a la Dra. Adriana María Cristina Huete cuyos aportes fueron de gran ayuda para la realización del presente estudio.

Al cuerpo de docentes de la UNAN – Managua, que mostraron disposición en atender consultas y dudas relacionadas al tema y su desarrollo, destacando a la coordinadora de la facultad de Derecho Msc. Aura Rosa Doña Gutiérrez por su gran apoyo mostrado.



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
NICARAGUA,  
MANAGUA  
UNAN - MANAGUA

**FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS  
DEPARTAMENTO DE DERECHO**



*"2021: Año del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica"*

Managua, viernes, 06 de febrero del 2021

Maestra  
**Aura Rosa Doña Gutiérrez**  
Directora  
Departamento de Derecho  
Su despacho.

Estimada Maestra:

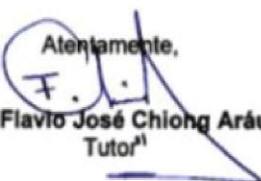
Con mucho agrado informo a Usted que he revisado el Informe Final del Trabajo de Monografía titulado: **"Análisis de los presupuestos cautelares establecidos en el Código Procesal Civil Nicaragüense (CPCN), y el cumplimiento de éstos en las solicitudes de embargos preventivos interpuesto en el Juzgado Primero de Distrito Civil de Managua durante los años 2018-2019"**

Autores: <b>Reynaldo Omar Villalobos Mendoza</b>	Carné: 15-02440-9
<b>Russel Amarhu Lacayo</b>	Carné: 15-02599-3
<b>Rolando Enrique Cordero Bravo</b>	Carné: 15-02818-2

Dicho trabajo reúne los requisitos académicos establecidos por esta Universidad, para optar al Título de Licenciado en Derecho. Razón por la que estimo pertinente manifestarle que los estudiantes se encuentran preparados para realizar la defensa de la misma, en la fecha y hora que su Autoridad así lo establezca.

Sin más a que hacer referencia, le saludo.

Atentamente,

  
**MSc. Flavio José Chiong Aráuz**  
Tutor<sup>1</sup>

CC: Interesado  
Archivo.

**¡A la Libertad por la Universidad!**

Tel. 22786764 y 69, Ext. 6050

E-mail: [derecho1@unan.edu.ni](mailto:derecho1@unan.edu.ni)

Ap. 663

## RESUMEN

En el presente trabajo investigativo tiene como tema *“Análisis de los presupuestos cautelares establecidos en el Código Procesal Civil Nicaragüense, y el cumplimiento de éstos en las solicitudes de embargo preventivo de bienes interpuestas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019”*.

Para su abordaje, se establecieron como objetivos: describir la regulación de las medidas cautelares y el embargo preventivo de bienes en el CPCN, analizar la acreditación y valoración de los presupuestos cautelares regulados en el CPCN, en las solicitudes de embargo preventivo de bienes a través del uso de doctrina, leyes y códigos procesales civiles de otros países, comprobar el cumplimiento de las disposiciones prescritas en el art.337 del CPCN en las solicitudes de embargo preventivo de bienes ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019.

Para dar respuestas a los objetivos planteados, se adoptó un enfoque cualitativo y descriptivo, se analizaron fuentes documentales contenidas en referencias bibliográficas. Así también, en la búsqueda de información se utilizaron métodos empíricos como la entrevista a profundidad que fue aplicada a tres excelentes profesionales como lo son la Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza, asesora de la sala civil de la CSJ, al Juez Décimo de Distrito Civil Dr. Roger Salvador Alfaro Cortez y a la Dra. Adriana María Cristina Huete Jueza del Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, además se realizó análisis de tres expedientes pertenecientes al Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua.

Con base en lo anterior, este trabajo de investigación se estructuró principalmente tomando en consideración los siguientes tres puntos:

**I- Generalidades de las medidas cautelares y el embargo preventivo:** en este apartado se abordó los antecedentes históricos de las medidas cautelares y del embargo preventivo de bienes, concepto, finalidad, naturaleza, presupuestos, caducidad, cancelación, características, tratamiento procesal, esto con el propósito de ubicar al lector en el tema de investigación.

**II- Acreditación y valoración de los presupuestos cautelares en las solicitudes de embargo preventivo:** esta sección parte de los aspectos generales de presupuestos cautelares, así como las definiciones de estos, los criterios o consideraciones para su acreditación y valoración, entre otros aspectos.

**III- Análisis de expedientes donde se puede observar si se cumplen con las disposiciones prescritas en el art.337 del CPCN:** en este acápite se hizo una valoración a través del análisis de expedientes de casos, de la forma en que se han acreditado y valorado los presupuestos cautelares en las solicitudes de embargo preventivo presentadas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019.

A través de la presente investigación, se comprobó que el proceso cautelar posee una muy buena regulación al igual que los presupuestos cautelares, se llegó a la conclusión que los abogados en las solicitudes de embargo preventivo presentadas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019, presentaron dificultades para cumplir con las disposiciones establecidas en el art. 337 del CPCN, además estos no cuentan con los conocimientos adecuados para acreditar de manera correcta los presupuestos cautelares.

Lo anteriormente planteado, se debe a muchos factores entre lo más destacados se encuentran los siguientes: la formación arraigada del Pr que viene siendo un resabio, el creer que de manera pura y simple aún pueden solicitar un embargo preventivo, la falta de dominio de los presupuestos de las medidas cautelares, a esto se le puede sumar el notorio desinterés por actualizar su formación en conocimiento con la nueva ley vigente; en el caso de los abogados es más evidente que en los judiciales.

## ÍNDICE

CAPÍTULO I.....	1
INTRODUCCIÓN.....	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	3
JUSTIFICACIÓN.....	5
OBJETIVOS .....	6
CAPÍTULO II.....	7
MARCO REFERENCIAL .....	7
MARCO TEÓRICO .....	10
GENERALIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y EL EMBARGO .....	10
1.Antecedentes históricos .....	10
2.Concepto .....	13
3.Finalidades de las medidas cautelares .....	15
4.Naturaleza jurídica .....	16
5.Regulación del embargo preventivo y la tutela cautelar en el CPCN.....	16
5.1 Tratamiento procesal de las medidas cautelares.....	17
5.2 Tipos de procesos cautelares .....	18
5.2.1 Proceso cautelar general o no urgente .....	18
5.2.2 El proceso cautelar urgente .....	18
5.3 ¿Qué se puede hacer en el caso de que se inadmita una solicitud?.....	19
5.4 Disposiciones generales aplicables al proceso cautelar.....	20
6.Característica de las medidas cautelares.....	22
6.1 Instrumentalidad .....	22
6.2 Temporalidad.....	23



6.3	Provisionalidad .....	24
6.4	Variabilidad.....	25
6.5	Jurisdiccionalidad .....	25
6.6	Proporcionalidad.....	26
7.	Caducidad de las medidas cautelares.....	27
8.	Cancelación de las medidas cautelares .....	28
9.	Acreditación y valoración de los presupuestos cautelares en las solicitudes de embargo .....	29
9.1	Fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho .....	31
9.1.1	Concepto del Fumus bonis iuris.....	31
9.1.2	¿Cómo se configura el fumus boni iuris en el derecho procesal civil nicaragüense?.....	32
9.1.3	¿Se puede prescindir de la acreditación del fumus boni iuris en la solicitud de embargo preventivo? .....	33
9.1.4	Acreditación del fumus boni iuris en la solicitud de embargo preventivo .....	33
9.1.5	Naturaleza del juicio judicial acerca del fumus boni iuris.....	34
9.2	Periculum in mora o peligro en la demora procesal .....	35
9.2.1	Concepto .....	35
9.2.2	¿Cómo se configura el peligro en la demora en el derecho procesal civil nicaragüense?.....	37
9.2.3	Acreditación y justificación del peligro a la demora en la solicitud de embargo preventivo.....	38
9.2.4	Naturaleza del criterio judicial sobre el periculum in mora .....	40
10.	Situación jurídica cautelable .....	41
11.	La caución o contracautela .....	43
	MARCO CONCEPTUAL .....	48
	MARCO LEGAL.....	52
	PREGUNTAS DIRECTRICES .....	54

CAPÍTULO III.....	55
DISEÑO METODOLÓGICO.....	55
12.Enfoque de la investigación: .....	55
12.1 Según el análisis y alcance de los resultados .....	55
12.2 Según sus objetivos y método .....	56
12.3 Tipo de investigación jurídica.....	56
12.4 Población.....	56
12.5 Muestra .....	57
12.6 Métodos, técnicas y procedimiento de la investigación: .....	58
12.7 Técnicas de recopilación de datos: .....	58
MATRIZ DE DESCRIPTORES .....	61
CAPÍTULO IV .....	65
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	65
13.Análisis de expedientes .....	65
14.Análisis y discusión de los resultados .....	74
CAPÍTULO V .....	78
CONCLUSIONES .....	78
RECOMENDACIONES.....	81
LISTA DE REFERENCIAS.....	82
ANEXOS.....	86
ANEXO 1 ENTREVISTAS APLICADAS.....	87
ANEXO 2 EXPEDIENTES ANALIZADOS .....	102

## **CAPÍTULO I**

### **INTRODUCCIÓN**

Uno de los más novedosos cambios que brinda Ley 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua (que en adelante se abreviará como CPCN), es la implementación de una mejor regulación en la institución jurídica de las medidas cautelares; pues a diferencia de su predecesor el actual y novedoso código, es más eficaz en cuanto la solicitud de una tutela cautelar.

Con el actual CPCN, ya no basta con solo mencionar en el escrito de solicitud cautelar la existe de un temor de peligro a la demora procesal; para que un órgano jurisdiccional otorgue la tutela correspondiente, el solicitante debe de ir más allá de eso; pues este debe de justificar de manera adecuada dos presupuestos (apariencia de buen derecho y peligro a la demora procesal) para que tal medida cautelar le sea otorgada (art.337 CPCN).

De igual manera, debido a la actualización del proceso civil nicaragüense los abogados en general deben someterse a rigurosos estudios y capacitaciones, para poder dar un excelente desempeño en la práctica, a raíz de esto el inconveniente que se presenta en la actualidad es que no todos los profesionales se someten a los procesos de capacitación, por al contrario se aferran a la práctica forense de los cuerpos normativos ya derogados, y es ahí donde recaen en un error, pues esa práctica en la actualidad no es válida.

Dicho lo anterior, para dar repuestas a los objetivos planteados, fue elemental analizar los presupuestos cautelares a través de criterios, y doctrinas de los más talentosos jurisconsultos del mundo, en este trabajo se abarca desde los antecedentes históricos de las medidas cautelares hasta sus características, naturaleza y tratamiento procesal.

El motivo más importante de esta investigación, es procurar que los lectores tengan un conocimiento amplio, centralizado y ordenado de que conlleva los presupuestos cautelares; y como deben de ser aplicados en la práctica forense.

A través de esta investigación, se determinó que los abogados solicitantes del embargo preventivo de bienes ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019, cometieron errores al momento de solicitar la medida cautelar, pues estos desconocen la técnica precisa de redacción y acreditación de los ya mencionados presupuestos.

Mediante la entrevista y análisis de expedientes judiciales, se logró desarrollar los objetivos planteados dentro de ésta investigación, y por consecuencia es de mucho interés para cualquier persona estudiosa del derecho, sobre todo a los abogados litigantes en el ámbito civil, además se podrá apreciar de primera mano la valoración realizada por parte de los judiciales.

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### a) Enunciado del problema

Una de las medidas cautelares más importante en la práctica es el embargo preventivo, esta medida cautelar busca asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que recayera (art.336 del CPCN), para su concesión y ejecución es necesario que al igual que todas las medidas cautelares cumpla con los siguientes presupuestos: la apariencia del derecho invocado (*fumus boni iuris*) y el peligro en la demora procesal (*periculum in mora*).

Dicho lo anterior, es en la solicitud de la medida cautelar que se debe justificar debidamente la concurrencia conjunta de los presupuestos legalmente exigidos (art. 372 CPCN), esto a su vez constituye una carga procesal para el litigante que desee instar la adopción judicial de una solicitud cautelar. Por otra parte, son las autoridades judiciales competentes quienes debe valorar si concurren o no los argumentos necesarios y si son acreditados correctamente los presupuestos cautelares.

Uno de los posibles inconvenientes actualmente, en cuanto a las solicitudes del embargo preventivo de bienes surge debido a la acreditación de los presupuestos legalmente exigidos, esto como consecuencia de la incorrecta argumentación y justificación por parte de los litigantes en sus solicitudes (y en los documentos o elementos probatorios que acompañen a la misma o que en ella se propongan). La incorrecta acreditación de los presupuestos cautelares tiene como consecuencia una probable inadmisión de la solicitud cautelar, que dificultaría el aseguramiento del futuro cumplimiento de una sentencia firme, por lo cual el demandante resultaría muy afectado.

Además, se debe tomar en consideración que el art. 337 del CPCN, únicamente menciona el deber de justificar los presupuestos cautelares debidamente, sin especificar la forma en que estos deben de ser acreditados; en este mismo sentido tampoco se especifica la forma de valorar dichos presupuestos cautelares, dejándolo a criterio discrecional por parte de los judiciales, el inconveniente que puede surgir a raíz

de una errónea valoración de los presupuestos es la incorrecta admisión o inadmisión de la solicitud.

Dicho lo anterior, esto puede traer consigo efectos negativos para ambas partes del proceso, es decir, que un demandante con derecho viable pueda verse afectado en cuanto al aseguramiento del resultado futuro del proceso en el apartado de obtener una resolución positiva.

Por otro lado, el demandado puede verse desprotegidos en cuanto sus derechos al momento de imponérsele una medida que no cumpla con los debidos requisitos y presupuestos, debe tomarse en consideración, que las medidas cautelares no únicamente generan efectos dentro del proceso como garantía del cumplimiento de la sentencia, sino también producen efectos fuera de él, es decir efectos extraprocesales, causando así la inmovilización de bienes e impedir la realización de determinados actos entre otros.

#### **b) Formulación del problema**

¿Están correctamente acreditados y valorados los presupuestos cautelares regulados en el CPCN, en las solicitudes de embargo preventivo de bienes presentadas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en el periodo 2018-2019?.

## **JUSTIFICACIÓN**

El nuevo Código Procesal Civil Nicaragüense Ley N°.902, produjo una serie de cambios positivos en nuestro ordenamiento jurídico, empezando con la derogación del antiguo Código de Procedimiento Civil (Pr), que presentaba un sin número de términos y formalismos innecesarios que entorpecían en gran medida el proceso civil.

La necesidad de actualización y de dar una nueva regulación al sistema procesal civil nicaragüense, trajo aparejada la obligación de estudiar e investigar algunas instituciones jurídicas establecidas en el cuerpo normativo del actual CPCN, principalmente figuras jurídicas que pueden llegar a carecer de un mejor tratamiento procesal o criterios precisos, es en virtud de esto y de los posibles problemas en la práctica, que surgió la idea de analizar los presupuestos cautelares regulados en la Ley N°. 902, pues de su justificación o acreditación en la solicitud cautelar depende en parte, que sean decretadas o no las medidas cautelares.

Partiendo de lo anterior, se hizo necesario realizar un análisis que permitió determinar elementos trascendentales desde su naturaleza jurídica, hasta su tratamiento procesal, en favor de garantizar una adecuada utilización y aplicación práctica de los presupuestos ya mencionados.

El presente trabajo, será de utilidad para estudiantes, abogados, asesores y de más estudiosos del derecho, que deseen afianzar sus conocimientos en cuanto a los presupuestos cautelares establecidos en el art.337 del CPCN, además de proporcionar a las personas que quieran solicitar el embargo preventivo de bienes la asesoría correspondiente en cuanto la acreditación de los presupuestos, permitiéndoles que dicha solicitud sea dirigida desde el primer momento de la mejor manera posible.

## **OBJETIVOS**

### **General:**

Analizar los presupuestos cautelares establecidos en el Código Procesal Civil Nicaragüense, para valorar el cumplimiento de estos en las solicitudes de embargo preventivo de bienes interpuestas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en el periodo 2018-2019.

### **Específicos:**

1. Describir la regulación de las medidas cautelares y el embargo preventivo de bienes en el CPCN.
2. Analizar la acreditación y valoración de los presupuestos cautelares regulados en el CPCN, en las solicitudes de embargo preventivo de bienes a través del uso de doctrina, leyes y códigos procesales civiles de otros países.
3. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones prescritas en el art.337 del CPCN en las solicitudes de embargo preventivo de bienes ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, a partir de tres expedientes seleccionados dentro de los periodos 2018-2019.



## CAPÍTULO II

### MARCO REFERENCIAL

Para poder profundizar en la figura jurídica de los presupuestos cautelares y como están regulados, es necesario tomar como referencia las generalidades de las medidas cautelares, considerando cuál es su principal finalidad y la transición que han tenido de la anterior ley Pr (código de procedimiento civil) a la actual Ley N°.902.

Las medidas cautelares, en Derecho Procesal Civil cumplen un propósito muy importante, ya sea en un proceso declarativo ordinario, sumario o bien un proceso de ejecución forzosa, han demostrado ser necesarias para asegurar las resultas de un juicio, por ende, como institución han sido ampliamente estudiadas por diversos autores, sin embargo, pocos le han dado importancia al desarrollo y estudio de los presupuestos cautelares.

Para soporte y referencia de la presente investigación se tomaron en consideración las siguientes investigaciones:

La investigación monográfica para optar a la licenciatura en Derecho en Nicaragua, titulada “**Medidas cautelares en el nuevo código procesal civil de Nicaragua**”, esta monografía fue elaborada por Tercero López, F. S., & Blanco Guido, E. E, en el año 2016. Es una investigación enmarcada en la realidad de nuestro país, tiene como objetivo esencial valorar la aplicación o reformas que sufrieron las medidas cautelares con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua (CPCN) de forma general y aplicada a cada medida cautelar tipificada.

Sus conclusiones en síntesis son:

- ✓ La implementación de una actualización al ordenamiento jurídico previo en materia de derecho procesal civil era necesaria y se reconoce un particular efecto en la institución de las medidas cautelares.
- ✓ La derogación del antiguo código de procedimiento civil produjo un impacto de doble vertiente, que afectó significativamente la realidad profesional del

estudioso del derecho por una parte y por el otro la adaptación de la población a un nuevo sistema.

Al ser un estudio ya enmarcado en el contexto de nuestro país no podía omitirse su relevancia al proyecto monográfico que se pretende lograr, además aborda las medidas cautelares de manera muy puntualizada. Contribuyendo así al desarrollo de los objetivos planteados.

Otro estudio utilizado sería la tesis monográfica para optar al título de maestría en derecho civil publicado por la universidad UNAN - León “**Medidas cautelares en el proceso civil**”, cuya investigación fue realizada por Ibarra Padilla M. R en el año 2015.

El enfoque de este estudio, es aplicado de manera muy puntualizada a los aspectos más relevantes del proceso cautelar y se enfoca en caracterizar cada una de las medidas cautelares señaladas por el Código de Procedimiento Civil, si bien no es un estudio elaborado según Ley N°.902 no se puede negar su importancia como antecedente para profundizar en la instauración de presupuestos cautelares vigentes en la actualidad.

Concluye lo siguiente:

- ✓ La caracterización de las medidas cautelares tenía una serie de pilares a seguir enmarcados a diversas situaciones que ameritan elementos de idoneidad para la instauración de una medida cautelar en concreto.
- ✓ Plantea un análisis muy metódico sobre la naturaleza y función de las medidas cautelares y desglosa las pautas que se habrían considerado como presupuestos procesales con el entonces Pr.

Por último, un referente de gran importancia utilizado como antecedente y como una guía para los objetivos planteados a desarrollar es la obra “**Las Medidas Cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Civil - Doctrina, jurisprudencia y formularios**” edición **No. 3** elaborada por el catedrático Dr. Garberí Llobregat J; magistrados y colaboradores profesores del derecho procesal publicado en España en el año 2012.

Su brillante ilustración metódica y sistemáticas de las medidas cautelares y el proceso cautelar en sí, son un referente para los estudiosos del derecho a nivel nacional e

internacional, habiendo contribuido destacadamente en incentivar el desarrollo de diversas obras académicas.

El análisis del régimen jurídico de las medidas cautelares con especial atención a sus presupuestos (*fumus boni iuris*, *periculum in mora*, caución) y características (jurisdiccionalidad, instrumentalidad, proporcionalidad entre otras) proporcionó las herramientas necesarias para desarrollar los objetivos planteados en el presente estudio monográfico para optar a la licenciatura. Además, cabe destacar que en su obra aborda, con detalle, cada una de las medidas cautelares señaladas por la ley de enjuiciamiento civil entre ellas el embargo y es un referente comparativo completo por las raíces españolas que adopta la Ley No. 902.

## MARCO TEÓRICO

### GENERALIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y EL EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES

#### 1. Antecedentes históricos

Es importante para comprender la presente investigación conocer cuál es el origen de las medidas cautelares y como ha venido evolucionando su regulación a largo de la historia, es por eso que a continuación se expondrá una breve reseña de sus antecedentes:

##### 1.1 Periodos históricos de la regulación de la tutela cautelar

Sin pretender un compendio exhaustivo de la regulación de la tutela cautelar, pueden distinguirse tres grandes épocas, cada una marcada por distintos mecanismos regulativos, estas tres épocas según Ramos (2006:4 7) son:

**1) La época de la marginalidad:** En una primera época, que se remonta a los tiempos del derecho romano y del derecho medieval, la tutela cautelar era una institución marginal para la litigiosidad y tenía una regulación parca y orientada a la protección de situaciones muy concretas.

**2) La época de la responsabilidad:** Las cosas empiezan a cambiar cuando la sanción de nulidad sobre la transmisión de los bienes litigiosos es derogada por no responder a la incipiente economía de mercado en el siglo XIX. A partir de entonces, la tutela cautelar empieza a cobrar mayor importancia práctica y tanto las leyes como la doctrina empiezan a tratarla en forma sistemática.

**3) La época del control judicial:** Durante el siglo XX vuelve a producirse una revolución copernicana en la regulación de la tutela cautelar, marcada por la delegación del legislador al juez de la determinación de las circunstancias en que una medida es óptima y por establecimiento de un control judicial intenso de las solicitudes de tutela cautelar.

En definitiva, la historia de la regulación de la tutela cautelar es la historia de la búsqueda de los mecanismos jurídicos para evitar la adopción de medidas que el sistema considera indeseables y permitir la adopción del resto, en función del

mejoramiento de las relaciones económicas y sociales de los que buscan que se cumpla un derecho o una obligación.

## **1.2 Antecedentes históricos de las medidas cautelares**

Por su parte, Falcón (2006:14 -16) en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial expone:

(...) las medidas cautelares, tal cual hoy las conocemos, aparecieron a fines del siglo XIX, en la doctrina alemana, como pertenecientes a la ejecución de sentencias o de juicios ejecutivos: El Código de Procedimiento Civil del Imperio Alemán de 1877, incluía el “Embargo preventivo” y las Medidas provisionales de seguridad. Posteriormente nacieron las distintas doctrinas que separaron a las medidas cautelares primero de la ejecución de sentencia y luego del proceso ejecutivo.

Desde el principio de las primeras formaciones de cuerpos normativos jurídicos, existió una figura de resguardo que protegía las relaciones nacientes entre particulares con la administración del poder imponente del Estado al momento de resolver una disputa, destacando cierta oficiosidad por encima de la disposición de las voluntades en conflicto. A medida que el tiempo avanzaba, se fueron ampliando dichos mecanismos de seguridad que la regulación de la época permitía un ejemplo claro sería el secuestro de determinado bien y cómo funcionaba esta acción.

Es debido al desarrollo de los roles de las partes o bien de su identificación clara en el proceso y las necesidades crecientes en un sentido económico-social y jurídico, que no mucho tiempo después se habla de las medidas cautelares aplicables a situaciones muy específicas. Para el siglo XIX y el siglo XX se alcanza un grado de madurez jurídica suficiente como para que la institución de las medidas cautelares sean algo empleado a nivel global con una similitud casi uniforme que dista esencialmente en las particularidades de cada legislación.

## **1.3 Antecedentes de las medidas cautelares en la legislación civil nicaragüense**

El 25 de enero de 1867 se sancionó el primer Código Civil (calco del Código Civil de Chile de 1855) y el 22 de mayo de 1871 el primer Código de Procedimientos Civiles. Este contenía mil ciento treinta y un artículos. Para facilitar la aplicación del segundo se

sancionó el 18 de marzo de 1875 un Código de Fórmulas Civiles, que contiene un formulario de actuaciones civiles y otro de cartulación, pues el Código de Procedimiento Civiles regulaba la materia de la cartulación. Fue redactado por el licenciado don Tomás Ayón (Chiong; 2006:1,2).

El Primer Código de Procedimientos Civiles, contenía las siguientes líneas: era un procedimiento escrito y dividido en etapas preclusivas, los juicios se dividían en extraordinarios y ordinarios, regían los principios de publicidad, dispositivo y la igualdad, contenía también los recursos ordinarios de apelación y de súplica, de igual manera se regula el recurso de hecho para el supuesto que se negara la apelación.

En cuanto a las medidas cautelares en la legislación nicaragüense, estas tuvieron un lugar con más énfasis en el Código de Procedimiento Civil de 1906 en las cuales se reglamentaban las siguientes medidas cautelares: 1) embargo preventivo y ejecutivo 2) Secuestro 3) de la Exhibición y depósitos de las cosas muebles 4) el aseguramiento de bienes litigiosos, dichas medidas cautelares estaban previstas en el Título VII, VIII y IX del Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua en los arts. 886 al 930. En el Pr no se presentaba el concepto normativo de las medidas cautelares. Sin embargo, se señalaban los diferentes tipos de medidas precautelares de forma aislada y sin ningún sentido unitario a cómo deben ser.

Con la entrada en vigencia del nuevo CPCN Ley No. 902, que fue aprobada el 4 de junio de 2015, publicado en La Gaceta No. 191 del 9 de octubre de 2015, quedó derogado el Código de Procedimiento Civil de 1906.

En el nuevo CPCN, las medidas cautelares poseen una regulación diferente a la que presentaba el Código de Procedimiento Civil (Pr). De manera resumida se puede decir que a diferencia del Pr; en el CPCN las medidas cautelares se encuentra las siguientes características:

- Se establece un régimen unitario y bastante completo de la competencia y de los procedimientos. Apertura del nuevo código a la adopción de medidas cautelares atípicas.

- Previsión de un procedimiento específico. Regulación más completa de las medidas cautelares específicas (más habituales).
- Definición de los presupuestos y finalidad de las medidas cautelares. Claridad en cuanto a las facultades del tribunal.
- Incorporación de medidas de garantía de los derechos del demandado.

De esta manera, las medidas cautelares empiezan a tener mayor relevancia en la actualidad jurídica del país. Para nuestra investigación se hace necesario describir la regulación de las medidas cautelares, debido a la estrecha relación existente entre las medidas cautelares y sus presupuestos.

## **2. Concepto**

Identificado el antecedente histórico de las medidas cautelares, es importante conceptualizar. El doctrinario Ramos (2013:3) define las medidas cautelares en su obra “Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil Español” del siguiente modo:

La medida cautelar es el remedio arbitrado por el derecho para obviar de alguna manera los riesgos de la duración temporal del juicio, en orden a su eficacia. Su mecanismo operativo es hasta cierto punto sencillo: el juicio eficaz es el que otorga una completa satisfacción jurídica a las partes. No se limita a la mera “declaración” del derecho, sino que se prolonga incluso en una eventual fase de ejecución para cumplir en todo su alcance el pronunciamiento jurisdiccional. Solamente cuando la sentencia ha sido cumplida por completo alcanza su plena eficacia. Como esta meta se vislumbra ciertamente lejana al inicio del juicio, la solución idónea estriba en anticiparla o al menos asegurarla de alguna manera. La medida cautelar anticipa provisionalmente la ejecución o asegura su éxito, desde el propio momento inicial del juicio.

Partiendo de lo expuesto, Martínez (1994:28) describe las medidas cautelares como un medio tendiente a asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando, antes de incoarse el proceso o durante su curso, una de las partes demuestra que su derecho es prima facie verosímil y que existe peligro de que la decisión jurisdiccional sea incumplida.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional Español en su sentencia 218/1994, de 18 de julio, rec. 2566/1991 destaca como principal objeto de las medidas cautelares, la preservación anticipada de una consecuencia previsible que debe realizarse en el

curso del proceso, todas las medidas precautorias participan, en principio, de las mismas características generales, responden a unos similares principios y sirven a unos fines comunes de aseguramiento del resultado futuro del proceso (Wolterskluwer,2020).

Es concluyente, que las medidas cautelares buscan adelantar ciertos efectos o todos de un fallo definitivo, al respecto Monroy (1987:42) conceptúa a la medida cautelar como “un instituto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una prueba”.

En este orden de ideas, las medidas cautelares en palabras más sencillas buscan que se cumpla la tutela judicial efectiva y que el demandante en caso de obtener una sentencia favorable pueda obtener plena satisfacción.

Al ser entonces las medidas cautelares un derecho que se solicita a instancia de partes, cabe preguntarse si en el proceso civil ¿encuentra su justificación expresa en la Carta Magna?

Al estudiar la Constitución Política de la República de Nicaragua en adelante (Cn), se observa que no existe artículo en el que se establezca de forma expresa el derecho a las medidas cautelares del proceso civil.

No obstante, Barahona (2016:2) considera lo siguiente:

La Justificación Constitucional de la tutela cautelar radica en la justicia que es un principio del sistema político democrático, también es un valor jurídico genérico y de él deriva la tutela judicial efectiva, derecho fundamental sustentado en los Arts. 5, 34.8 y 46 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, estos dos últimos en relación con el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así dicha tutela tramitado el proceso declarativo se integra además del fallo que concluye el proceso, también por la ejecución del mismo.

Lo antes dicho, deja claro el arraigo de las medidas cautelares en la Cn y la importancia de esta institución jurídica para nuestro sistema procesal.



### **3. Finalidades de las medidas cautelares**

Las medidas cautelares están destinadas más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra, Di Dorio (1985:80,90) explica que “su finalidad es asegurar el resultado práctico de la decisión final, para que la justicia no sea burlada haciéndola de imposible cumplimiento”. Por consiguiente, la tutela cautelar comprende tanto una finalidad preventiva como asegurativa.

#### **3.1 Finalidad preventiva:**

En principio, esta finalidad es preventiva, puesto que el órgano jurisdiccional prevé que el curso del proceso podría originar algunos daños, si bien es cierto, al inicio solamente se vislumbran como riesgos, pero estos pueden desembocar en daños una vez concluya el proceso principal. Entonces la tutela cautelar busca prevenir estos daños, puesto que el proceso jurisdiccional principal no es apto para eliminar, a causa de su duración y demora (Carnelutti, 1994:243).

#### **3.2 Finalidad asegurativa:**

La doble finalidad asimismo comprende una finalidad asegurativa, se debe tener presente que la finalidad de la tutela cautelar se encuentra estrechamente ligada con la efectividad de la sentencia que se expedirá en el proceso principal.

En este sentido, Rebollo (1993:372) considera que *“Una resolución judicial deviene inefectiva cuando no se ajusta lo en ella ordenado a lo realmente realizado, cuando no existe una coincidencia entre lo que esta dispone y lo que se hace o se omite en la realidad”*.

La finalidad asegurativa, no busca el reconocimiento de la pretensión solicitada en la demanda, sino la que se produce en un momento posterior y que tiene por resultado una total adecuación entre el contenido de la sentencia y lo que verdaderamente se ha recibido.

#### **4. Naturaleza jurídica**

Las características anteriores, llevan a considerar la naturaleza jurídica de las medidas cautelares que a diferenciarla de otras instituciones con cierta afinidad, la naturaleza de las medidas cautelares se encuentra en la salvaguarda provisional de un interés particular, el cual, si no fuese preventivamente protegido, pudiera tornar ilusoria o impracticable la decisión a la que arribe el tribunal.

Afirmando lo antes dicho, en palabras de Palacio (1998: 773,774.1):

La medida cautelar es aquella que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

Es decir, asegura en forma provisoria que el transcurso de tiempo demandada por la labor jurisdiccional no perjudique o agrave el menoscabo sufrido al derecho que le asiste a la parte, situación que de no resguardarse podría resultar en una sentencia ineficaz.

#### **5. Regulación del embargo preventivo y la tutela cautelar en el CPCN**

El Código Procesal Civil Nicaragüense, a diferencia de la anterior ley procesal civil contempla expresamente dentro de las clases de tutela jurisdiccional "la adopción de medidas cautelares", por lo tanto el CPCN dispone en su art.334 lo siguiente:

*En cualquier proceso, la parte demandante o reconviniente podrá solicitar las medidas cautelares necesarias y apropiadas, para asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que recayera.*

La ley procesal vigente, contempla el embargo preventivo como una concreta medida cautelar (nominada) junto a otras que también se enuncian o enumeran en el mismo precepto (por ejemplo, la anotación preventiva de demanda, la intervención o administración judicial de bienes productivos, la suspensión de acuerdos sociales impugnados, entre otras), a la que resultan aplicables las normas generales que la ley procesal reserva para las medidas cautelares.

El CPCN, no establece de manera expresa el concepto de embargo preventivo, lo más cercano a esto lo encontramos reflejado en los artículos. 347 al 354 del CPCN, a través del análisis de dichos artículos se deduce que el embargo preventivo es una medida cautelar que garantiza la ejecución de la sentencia que se dicte en el proceso, cuando esté persigue el pago de una cantidad de dinero. En estos casos la ejecución de la sentencia se realizará seleccionando los bienes del deudor y afectándolos, para transformarlos posteriormente en dinero mediante el procedimiento de apremio.

Para tener una visión panorámica del embargo preventivo de bienes, se deben de considerar todos los preceptos contemplados en los artículos 336 al 389 CPCN y más concretamente en el título I disposiciones generales (de las medidas cautelares) del libro III, el capítulo I (de las medidas cautelares: de la aplicación de las medidas cautelares); el capítulo II (clases de medidas cautelares); el capítulo III (embargo), título II (procedimiento para la adopción de medidas cautelares), el capítulo I (requisitos y competencias de las medidas cautelares); el capítulo II (de la caución en las medidas cautelares); el capítulo III (tramitación y audiencia de las medidas cautelares), el capítulo IV (modificación, mantenimiento y levantamiento de las medidas cautelares).

### **5.1 Tratamiento procesal de las medidas cautelares (art. 336-389 del CPCN)**

Toda persona interesada puede solicitar por escrito la adopción de una medida cautelar. La solicitud puede ser presentada, antes del inicio del proceso, con la demanda o bien una vez que ha iniciado el proceso. La persona interesada aun no siendo abogada o abogado, por sí misma, podrá solicitar la adopción de una medida cautelar siguiendo el trámite de urgencia (art. 336 CPCN).

De acuerdo con el art. 372 del CPCN en la solicitud se deberá justificar el peligro de lesión o frustración de su derecho, por la demora del futuro proceso; la existencia de apariencia de buen derecho que se disputará; se ofrecerá caución especificando su tipo y cuantía, pudiendo ser dinero en efectivo, cheque certificado, cheque de gerencia o garantía bancaria; se indicará la precisa determinación de la medida y su alcance y se acompañarán los documentos y otros medios de prueba que justifiquen la adopción de la medida cautelar.

## **5.2 Tipos de procesos cautelares**

La Ley N°. 902 CPCN, ofrece dos trámites procesales para la adopción de una medida cautelar, que se usarán según la urgencia del caso.

### **5.2.1 Proceso cautelar general o no urgente**

El proceso cautelar general o no urgente es el que una vez presentada la solicitud y admitida, se formará pieza separada sin suspensión del proceso principal y se convocará a una audiencia con carácter preferente que se celebrará dentro del quinto día hábil de su notificación (art.378 del CPCN).

En la audiencia se escucharán los alegatos de las partes, se practicará prueba y la autoridad judicial pronunciará su decisión al finalizar ésta o bien dentro de tres días. En su resolución la autoridad judicial, deberá fijar con precisión la medida o medidas cautelares que se acuerden y el régimen, forma, cuantía y tiempo en que deba prestarse la caución. El auto que deniegue la adopción de una medida cautelar es irrecurrible, pudiendo el interesado presentar nueva solicitud. El auto que adopta una medida cautelar puede ser objeto del recurso de apelación.

### **5.2.2 El proceso cautelar urgente**

El proceso cautelar urgente, se caracteriza porque se tramita y adopta la medida cautelar sin la participación de la parte contraria. La solicitud también se hace por escrito debiendo justificar las razones de urgencia para adoptar la medida cautelar solicitada sin intervención de la parte contraria. La autoridad judicial resolverá en el plazo de tres días desde la presentación de la solicitud, razonado sobre la concurrencia de los requisitos y las razones que tuvo para acordarla sin oír a la parte contraria. Contra el auto que se dicte no cabrá recurso alguno (art. 380 del CPCN).

Adoptada la medida cautelar, al momento de ejecutarla se hace entrega a la persona afectada del auto que la decreta y del escrito de solicitud, para que dentro de tres días ejerza su derecho de oposición. En el escrito de oposición se deberá justificar la improcedencia de la medida, proponiendo las pruebas que estime valederas (art. 381 CPCN).

Según el art. 382 del CPCN, se debe ofrecer contracautela para garantizar los eventuales perjuicios que puedan derivarse del levantamiento de la medida cautelar. La autoridad judicial decidirá sobre la forma y cuantía de la contracautela, aplicando los criterios establecidos para la caución.

Admitida a trámite la oposición, se convoca a una audiencia que se celebrará dentro en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación a las partes. Expuestos los alegatos y practicada la prueba en audiencia, la autoridad judicial deberá de resolver inmediatamente sobre el mantenimiento o levantamiento de la medida cautelar acordada (art.383 CPCN).

La práctica de la medida cautelar estará a cargo de la autoridad judicial de ejecución y embargo donde hubiere, para ello empleará los medios que fueran necesarios, pudiendo autorizarse la entrada en bienes inmuebles o apertura de bienes muebles, cuando el caso lo justifique, sin caer en excesos ni causar daños innecesarios (art.385 CPCN). Se levantará acta que deberá ser firmada por la autoridad judicial, los intervinientes y la secretaria o secretario y se dejará constancia de quienes se negaran a firmar. Cuando se trate la medida cautelar de anotaciones preventivas, se cumplirá conforme lo ordenado en las normas del Registro correspondiente.

### **5.3 ¿Qué se puede hacer en el caso de que se inadmita una solicitud cautelar?**

La respuesta a esta pregunta se encuentra señalada en el art. 379 del CPCN en su párrafo tercero cito textual:

*“contra el auto que deniegue la petición de medida cautelar no cabrá recurso alguno pero se podrá presentar nueva solicitud si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición”*

El anterior apartado, es bastante claro pues lo único que se puede realizar si una medida cautelar se inadmite, es volver a intentar con una nueva solicitud en el supuesto que cambian las circunstancias existentes.

Ahora bien, desde el otro extremo contra el auto que admita las medidas cautelares cabe recurso de apelación( art.379 CPCN), es importante recalcar que en el caso del la tramitación urgente contra el auto que se dicte no cabrá recurso alguno, no obstante se puede oponer alegando la improcedencia de la medida cautelar que se decretó sin previa citación; proponiendo pruebas para fundamentar la oposición (art. 380 CPCN).

#### **5.4 Disposiciones generales aplicables al proceso cautelar en general y al embargo preventivo de bienes en particular**

El proceso cautelar no tiene que solicitarse necesariamente en toda contienda, sino que todo actor, principal o reconvencional, podrá solicitar del tribunal (...) la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare (art. 336 CPCN).

Las medidas cautelares previstas en el Libro Tercero III Título I y entre ellas el embargo preventivo de bienes, no podrán en ningún caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo que se disponga para los procesos especiales. Tampoco podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas (art. 336 CPCN).

Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal (art. 373 CPCN).

Si bien, será competente para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal se solicita en relación con un proceso la competencia corresponderá al juzgado del lugar donde se deba ejecutar la sentencia arbitral, o donde deban surtir efecto las medidas, salvo que dispongan cosa distinta los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Nicaragua (art. 373.2 CPCN).

El artículo 340 del CPCN, establece que quien acredite ser parte en un proceso jurisdiccional seguido en otro Estado, podrá solicitar a través del auxilio judicial

internacional, de conformidad con los instrumentos internacionales aprobados y ratificados en Nicaragua, la adopción de medidas cautelares respecto de bienes situados o actos que se estén realizando en el país.

En torno a la solicitud de embargo preventivo, el artículo 347 del CPCN menciona de manera tácita lo siguiente: *“se podrá solicitar el embargo preventivo, la persona acreedora de deuda en dinero, frutos, rentas y cosas fungibles, convertibles en dinero aplicando precios ciertos”*.

Con este apartado, podemos deducir que la obligación por excelencia para solicitar una medida cautelar de embargo preventivo es la deuda líquida. Sin perjuicio de otras obligaciones siempre y cuando sean convertibles en dinero “cosas fungibles”

Anudado a lo anteriormente relacionado, el mismo art. 347 del CPCN establece los supuestos en los que cabe solicitar el embargo preventivo.

1. Cuando la persona deudora no tenga domicilio en la república;
2. Cuando la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado;
3. Cuando la existencia del crédito conste en contrato bilateral, siempre que la persona acreedora haya cumplido con su parte de su obligación fuere a plazo:
4. Cuando aun estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite que la persona deudora trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique que, por cualquier causa, ha disminuido apreciablemente la solvencia de la persona deudora después de contraída la población; y
5. Cuando se demande por daños y perjuicios derivados de eventos dañosos, siempre que se acredite el daño y la parte demandada no contara con seguro de responsabilidad; o cuando contando con dicho seguro, este sea insuficiente o la aseguradora se encontrara en proceso de liquidación al momento del inicio del proceso, o en forma sobrevenida.

Debemos tener en cuenta, que no todo bien es sujeto de embargo preventivo; pues para ello la ley determina en su art. 345 del CPCN que bienes están exentos de ser embargados.

## **6. Característica de las medidas cautelares**

Como cualquier medida cautelar, el embargo preventivo posee las siguientes características:

### **6.1 Instrumentalidad**

En cuanto a la instrumentalidad, podríamos decir que es una de las características más importantes de la tutela cautelar, pues determina la naturaleza cautelar de la misma y además se encuentra relacionada con su finalidad, objeto y función.

La tutela cautelar es un instrumento del proceso judicial preordenada a la decisión que se dictará finalmente, a pesar de que la tutela cautelar cuenta con un carácter estructural, científica y legislativamente independiente, su finalidad es la eficacia de la resolución pendiente, normalmente una sentencia de condena, aún todavía no dictada (Gutiérrez, 1974:398). El doctrinario de Diego Díez (2008:18) considera:

Las medidas cautelares tienen como objetivo «asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia» que recaiga en el proceso principal art. 350.1 del Código Procesal Civil Hondureño (CPCH) si se prefiere, son conducentes a «asegurar la efectividad de la protección jurisdiccional pretendida» en el proceso principal (art. 356 del CPCH).

Por consiguiente, la tutela cautelar no constituye una finalidad en sí misma, sino que se halla necesariamente vinculada a la sentencia que pueda dictarse en el proceso principal (y a este mismo proceso), cuya efectividad práctica tiende a asegurar.

Al respecto, Di Dorio (2001: 91,105) refiere “la tutela cautelar no tiene un fin en sí misma, sino que constituye un accesorio del proceso principal, del cual depende y a la vez asegura el cumplimiento de la sentencia que vaya a dictarse”. En razón de lo anterior, expresa Calamandrei (1997:137-139):

La instrumentalidad es la característica más importante de las medidas cautelares puesto su función típica e inconfundible: anticipar, en todo o en parte, los efectos tanto decisorios como



ejecutorios de la resolución definitiva del proceso principal, incluso muchas veces hace interinamente las veces de resolución final, mientras se espera la emanación de la misma.

En el sistema procesal civil vigente en Nicaragua, esta característica está contenida en los artículos 336, 338 y 344 del CPCN, estos artículos hacen referencia de la solicitud de la medida cautelar y el cumplimiento de su objetivo, que es asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia.

En palabras más sencillas, las medidas cautelares son un instrumento garantista; no obstante, se tiene que obtener una sentencia de condena a favor del solicitante para que ésta entre en todo su esplendor y eficacia de la resolución judicial que se dictará a futuro. De tener una sentencia en contra de la solicitante está perdería todo su sentido pues no se materializa por sí sola.

## **6.2 Temporalidad**

Las medidas cautelares no pueden durar más allá que la tramitación o resolución final del proceso principal, según Peláez, B. Mariano (2008:21,22) la razón de ser de las medidas cautelares está en poner fin al peligro en la demora y pueden desaparecer, entre otros, por los siguientes motivos:

- Cambio de las circunstancias que en su momento justificaron su dictado
- Por la conclusión del proceso principal
- Por estar supeditadas legalmente a un plazo determinado
- Por agotamiento del tiempo fijado para la vigencia de la medida, esto es, por su caducidad
- Por incumplimiento de cargas procesales

Esta institución, está pensada para cubrir el lapso de tiempo que tarda el juicio en llegar a su fin. La medida no dura más de lo que dura el juicio principal, del cual son dependientes, existen eventualmente durante el proceso, estas no tienen una vocación de perpetuidad. Esta característica permite asimismo la modificación de la medida a lo largo del juicio por variación de sus presupuestos (Ramos, 2013:4).

Aclarando lo anterior, las medidas cautelares no aspira a ser una solución definitiva. Así pues, las medidas cautelares se extinguirán cuando el proceso principal termine por sentencia, o incluso antes, por aplicación del instituto de la caducidad.

Es importante mencionar, en cuanto a la duración de la medida cautelar, lo establecido en el art. 388 del CPCN debido a que en él se encuentra la forma de proceder en el supuesto en donde la sentencia desestimatoria de la demanda no estuviera firme.

### **6.3 Provisionalidad**

En cuanto a la cualidad provisoria dada a las medidas cautelares, refiere Perera, Carlos A, (2010:108) “los efectos jurídicos de la medida cautelar no sólo tienen duración temporal, sino que tienen duración limitada a aquel periodo de tiempo que debe transcurrir entre el dictado de la medida cautelar y el pronunciamiento de la sentencia definitiva”.

El carácter provisionalidad de la medida cautelar “se refleja en el hecho de que ésta sólo subsistirá mientras duren las circunstancias que la determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir el levantamiento de la medida adoptada” (Di Dorio, 1985:105).

Por su parte, Ibarra (2009:216,217) citando a Calamandrei (1945:60) expresa:

La tutela cautelar no puede aspirar a convertirse ella misma en definitiva, sino que y siempre estará supeditada al momento en que se expida la decisión final del proceso principal, a la llegada de la cual los efectos provisorios de la tutela cautelar están destinados a caer totalmente, porque aun cuando la decisión principal reproduzca sustancialmente, y haga suyas las disposiciones de la cautela, funciona siempre como decisión ex novo del conflicto, y no como convalidación de la tutela cautelar adoptada.

En relación a la provisionalidad, los arts.388 y 389 del CPCN señalan la forma en cómo se debe proceder cuando se estima o desestima una demanda a través de la sentencia.

## **6.4 Variabilidad**

Al respecto, Ledesma N, Marianella (2008:67) explica “la medida cautelar es variable porque, ello implica que la medida dictada puede ser modificada para lograr simetría entre ella y la naturaleza, magnitud o extensión de la tutela ordenada”. Según lo expresado por de Diego Díez (2008:18):

Una consecuencia directa de la instrumentalidad de las medidas es su variabilidad en función de las circunstancias concurrentes. Las medidas cautelares son susceptibles de «modificación, sustitución o cese». Quiere ello decir que pueden variarse, de conformidad con el principio *rebus sic stantibus*, cuando se alteren los presupuestos o motivos que sirvieron de soporte para su adopción. De este modo, las medidas inicialmente denegadas pueden reproducirse si cambian las circunstancias existentes en el momento de la adopción, y las ya adoptadas pueden ser sustituidas por otras modificadas o levantadas.

En términos prácticos, la variabilidad se manifiesta en las modificaciones que se producen en los componentes objetivos o subjetivos de la medida cautelar: en el primer caso el cambio puede estar referido a la contra cautela (naturaleza, especie, monto, entre otros) o a la medida cautelar misma (naturaleza, especie, número, monto...); en el segundo, el cambio puede estar referido al órgano de auxilio judicial (sustitución, número de personas, naturaleza).

Con respecto a la variabilidad de las medidas cautelares, los artículos. 386 y 387 del CPCN acentúan específicamente la modificación, levantamiento y caducidad de las medidas cautelares a través de ellos se explica en qué casos o supuestos tienen cabida dichos fundamentos jurídicos.

## **6.5 Jurisdiccionalidad**

Para Peláez, B. Mariano (2008)“las medidas cautelares son de naturaleza procesal y, por ello mismo, de naturaleza jurisdiccional. No obedecen ni pueden tener su origen en la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales”. (p.21)

En este mismo sentido, de Diego Díez (2008:18) establece en su obra “Las Medidas Cautelares en el Nuevo Código Procesal Civil Hondureño”:

La jurisdicción (potestad jurisdiccional) es un monopolio estatal que se reside en los órganos jurisdiccionales (encarnados por jueces y magistrados independientes) con carácter exclusivo y excluyente art. 303 y 304 de la Constitución Política Hondureña. Se constitucionaliza así el principio de exclusividad en sentido positivo, de manera que solo a los órganos jurisdiccionales les corresponden no sólo las funciones de juzgar y ejecutar lo juzgado, sino también la función cautelar que, como vimos, es una manifestación más de la función jurisdiccional dirigida, precisamente, a garantizar la efectividad de las otras dos.

Por tanto, son los judiciales y tribunales de justicia competentes los responsables de manejar la función cautelar, esta característica, tiene su base constitucional en los artículos 34 y 159 de la Constitución Política Nicaragüense (Cn), “en el que se estipula las garantías mínimas que tiene todo procesado y la estructura, organización, presupuesto que tienen los tribunales de justicia como un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia.

En resumen, las medidas cautelares en materia civil son únicamente de carácter jurisdiccional y exclusivamente deben de ser otorgadas por una autoridad judicial.

## **6.6 Proporcionalidad**

El principio de proporcionalidad, impone que únicamente debe de adoptarse aquellas medidas cautelares que resulten adecuadas y proporcionales para el fin que persiguen, salvaguardando el pronunciamiento futuro, en correspondencia con esto Ibarra (2009:220) sostiene que “ debe existir correspondencia entre el medio y la finalidad que persigue, es decir, que haya una adecuación entre la medida cautelar específica y la finalidad de proteger la efectividad de la sentencia”.

Para de Diego Díez (2008:22):

Desde la perspectiva del solicitante, la medida ha de ser necesaria y adecuada a los fines pretendidos en el caso concreto; esto es, debe haber conexión entre lo pedido y lo que se pretende garantizar. Y, respecto del afectado por la medida, la proporcionalidad exige que la injerencia producida en su patrimonio no sea de tal entidad que acabe por ser inasumible. En suma, la adopción de la medida cautelar requiere un previo juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y de las circunstancias concurrentes, e implica examinar el estado en que se encontraría el sujeto pasivo de la medida tras la ejecución de la misma.

Las medidas que se acuerden deben guardar la debida proporcionalidad en relación mediata con la pretensión deducida, de forma que no se conviertan en un modo de sancionar infracciones anteriores al momento en que se solicitan, sino un medio de evitar el mantenimiento de una actividad infractora (Fernández, 2001:720).

De acuerdo con el art. 344 del CPCN, la proporcionalidad busca que la medida cautelar sea adecuada a su alcance y forma de cumplimiento, a fin de evitar la mayor gravedad u onerosidad para la parte demandada, según las circunstancias del caso y siempre que se garantice la pretensión de la persona solicitante.

Que, “cuando los fines buscados con la adopción de la medida cautelar, puedan ser conseguidos a través de medidas alternativas manifiestamente menos gravosas, ha de imponerse la utilización de estas últimas” (Llobregat, 2003:90,91).

## **7. Caducidad de las medidas cautelares**

Se produce la caducidad de la medida cautelar, cuando por el transcurso del tiempo establecido se deja sin efecto la resolución que decidió adoptarla, y asimismo se eliminan los actos de ejecución cautelar realizados hasta ese momento. Existen algunos casos en los que la medida cautelar caduca; pero también la medida cautelar termina por otras razones a las cuales no se les puede denominar caducidad, sin embargo, es necesario analizarlos.

**En primer lugar, desarrollaremos los casos de caducidad que pueden presentarse:**

- 1) Cuando se haya solicitado la medida cautelar antes de interponer la demanda, y esta no se presentase dentro del plazo de veinte días, siguientes a su adopción. En este caso el juez de oficio acordará que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que se hubieran realizado, condenará al solicitante por las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya ocasionado. Esto se encuentra establecido en el artículo 730. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España (LEC).

En la legislación nicaragüense dicho precepto se establece en el artículo 338 CPCN *“las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se presentara la demanda dentro de los treinta días de practicadas”*. Al igual que el art. 339 CPCN cuando se adopta la medida cautelar mediando acuerdo arbitral.

- 2) Cuando el proceso se ha paralizado por causa imputable al solicitante, durante un plazo mayor a seis meses, así lo establece el segundo párrafo del artículo 731. 1 LEC, siempre y cuando se deba a una causa imputable al solicitante de la medida cautelar.

Según Ibarra Valdivia C. (2009) este tipo de caducidad se encuentra relacionada con la caducidad de la instancia principal, es decir que cuando caduca el proceso principal, como es obvio, también caduca la medida cautelar. Esta figura equivale a la caducidad de la instancia establecida en el art. 237 LEC.

- 3) Cuando termina el proceso sin sentencia, en los supuestos de desistimiento y caducidad de la instancia, en consecuencia, se producirá asimismo la extinción de la medida cautelar, que deberá decretarse en la misma resolución declarando terminado el proceso.

Con relación a lo anterior, una situación similar se contempla en la norma nicaragüense en el artículo 387 del CPCN, cuando el proceso principal haya terminado por cualquier causa se levantarán las medidas cautelares adoptadas, además no se mantendrá una medida cautelar si el proceso quedará en suspenso por más de seis meses por causa imputable a la persona solicitante y posteriormente en el mismo artículo especifica que toda medida cautelar caduca a los dos años desde la fecha de su ejecución.

## **8. Cancelación de las medidas cautelares**

La cancelación de una medida cautelar se encuentra relacionado con supuestos que prefiguran la extinción de la medida cautelar o bien la caducidad y transformación de la misma.

Por otra parte, señalaremos los casos en los cuales se extingue la medida cautelar, sin que sea una caducidad strictu sensu, esto se encuentra relacionado con la característica de provisionalidad de las medidas cautelares, puesto que esta se

produce cuando el proceso principal haya concluido, existiendo las siguientes posibilidades:

La primera se materializa cuando la sentencia desestima la pretensión principal, entonces es evidente que la medida cautelar termina, puesto que desaparece, o por lo menos se modifica radicalmente los presupuestos de la medida cautelar, sobre todo el *fumus boni juris*, así lo establece la primera parte del artículo 744.1 LEC si se trata de sentencia no firme; y el artículo 745 LEC si se trata de sentencia firme, esto no es más que una manifestación de la instrumentalidad de la medida.

En igual orden, Ibarra Valdivia C. (2009) señala expresamente lo siguiente: “si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido impugnada. Sin embargo, a pedido del solicitante el Juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se ofrezca contracautela de naturaleza real o fianza solidaria.”

La figura de la cancelación de la medida cautelar en el CPCN como tal no se encuentra descrita directamente, pero por consecuencia de una actuación procesal puede considerarse presente, este es el caso de la sustitución de una medida cautelar, pues si esta no guarda relación jurídica con su predecesora a raíz de que cambia la situación cautelable, se puede decir que primero se cancela la medida cautelar vigente antes de implementar o ejecutar una nueva.

## **9. Acreditación y valoración de los presupuestos cautelares en las solicitudes de embargo preventivo**

Si bien es cierto, los presupuestos cautelares son parte de las generalidades de las medidas cautelares, se evitó hablar de ellas en el anterior apartado puesto, que consideramos conveniente abordarlas de manera más específica debido a la relevancia de estas intuiciones jurídicas para el tema en cuestión a continuación detallamos.

En concordancia con lo anterior, el art. 337 del CPCN especifican los siguiente “para decretar las medidas cautelares, será necesario:

*1) Que la persona solicitante justifique debidamente que son indispensables para la protección de su derecho, siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo, por la demora del proceso antes de la resolución definitiva, de modo que sin la inmediata adopción de la medida, la sentencia estimatoria de la pretensión sería de imposible o difícil ejecución.*

*2) La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración por demora deberán justificarse en la solicitud, de manera que sin prejuzgar el fondo, permita a la autoridad judicial considerar que la pretensión tiene fundamento.*

De modo que, no pueda faltar ninguno de ellos de otra manera dicha medida cautelar resultaría improcedente, esto debido a la naturaleza de los presupuestos condicionantes de la pretensión de la tutela judicial cautelar. Debe entenderse que la concurrencia conjunta de los indicados presupuestos materiales constituye una carga para los solicitantes que insta a la adicción judicial de la medida cautelar.

Cómo se ha puesto de manifiesto, el embargo preventivo es una medida cautelar específica cuyo presupuesto (situación cautelable) es el aseguramiento de una eventual sentencia condenatoria a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos (art. 347 CPCN). Fuera de esos supuestos, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado.

Por consiguiente, sin perder de vista que el embargo preventivo va encaminado en la totalidad de los casos a asegurar las resultas de una eventual sentencia declarativa de condena al pago de una determinada cantidad económica, los presupuestos del embargo preventivo, como del resto de medidas cautelares que se contemplan en la ley procesal, son los siguientes: la apariencia de buen derecho ("fumus boni iuris"), el peligro por la mora procesal ("periculum in mora").

En este orden de ideas, se detallarán a continuación los conceptos doctrinales de los presupuestos cautelares legalmente establecidos, de la misma manera se especificará la forma en que los solicitantes deben acreditar o justificar dichos presupuestos en la



solicitud de embargo preventivo, además de aspectos de total relevancia en lo que se refiere a la valoración judicial.

## **9.1 Fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho**

Siempre que se ejerce una determinada pretensión se afirma la existencia de un derecho, pero no basta con decirlo en el escrito incidental de solicitud de medidas cautelares para que el judicial conceda una medida en concreto, para que esto suceda se necesita que el derecho pedido se vea como jurídicamente probable, que haya una gran probabilidad de existir en la vida jurídica, es decir a lo que se refiere es que el actor acredite ante el órgano jurisdiccional un juicio de probabilidades que la sentencia recaerá a su favor.

Cabe destacar, que no es necesario acreditar de manera incuestionable la existencia del derecho pedido. Eso se acreditará en la plena práctica de las pruebas (juicio) viéndose reflejado en la sentencia definitiva, y no en la solicitud de medidas cautelar, por tanto, se trata de acreditar lo que la doctrina ha denominado “zona intermedia” entre la simple afirmación de un derecho y la plena convicción de su existencia.

### **9.1.1 Concepto del Fumus bonis iuris**

Una de las mejores definiciones acerca del fumus bonis iuris es brindada por Llobregat (2012:62) en su obra “Las Medidas Cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Civil Doctrina, Jurisprudencia y Formularios 3 Edición”.

El fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho consiste en la valoración por parte del órgano jurisdiccional al que se solicita la adopción de alguna de estas medidas, de los indicios, elementos o circunstancia que sustentan la fundamentación de la propia pretensión principal, dotándola de una apariencia probable de legitimidad; u apariencia que es, precisamente la única razón capaz de justificar el que pueda llevarse a efecto la puesta en práctica de una medida por naturaleza perjudicial o restrictiva para una de las partes en litigio sobre la que aún no ha recaído condena judicial alguna. (Perjudicial o restrictiva, como lo demuestra el hecho de que el legislador haya previsto que el beneficiario de la cautela haya de prestar caución para afrontar los daños y perjuicios que su ejecución pudiera deparar al patrimonio del demandado).

Sobre este mismo tema, Calamandrei (1945:77) considera:

La cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud, en este declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que esa existencia del derecho aparezca verosímil, sea para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal, declara el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar.

No se trata de obtener una declaración de certeza de la probada existencia de los intereses sustanciales o procesales; la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud.

En síntesis, la adopción de las medidas cautelares exigirá del órgano judicial, en primeros términos, la comprobación de la existencia de un indicio o un principio de prueba de que la pretensión de quien solicita la medida cautelar se encuentre aparentemente bien fundada en derecho, es decir, que la misma no resulte a primera vista ni descabellada, ni arbitraria, ni razonablemente fundamentada.

### **9.1.2 ¿Cómo se configura el *fumus boni iuris* en el derecho procesal civil nicaragüense?**

El CPCN, en su art.337 inciso 2 impone como regla general *“la obligación de justificar debidamente en la solicitud el peligro de la demora, de manera que, sin prejuzgar el fondo, permita a la autoridad judicial considerar que la pretensión tiene fundamento”*.

Esta exigencia tiene que ser entendida en un doble sentido:

- En primer término, no se requiere plena prueba sino un grado inferior de convicción: presunción grave del derecho reclamado. Esto implica que el juez para decretar una medida cautelar no debe estar plenamente convencido de que el derecho reclamado es cierto, debiendo conformarse con un grado menor de convicción. Lo que se requiere es que el juez llegue a considerar muy probable el reconocimiento del derecho en la sentencia definitiva, de ahí que exija que de los comprobantes emane una “presunción grave”.

- En segundo lugar, en cuanto a la forma de acreditar el *fumus* la expresión “justificarse” que emplea el art. 337 debe entenderse que para acreditar este presupuesto no solo pueden ser utilizados únicamente documentos sino cualquier medio de prueba. Esta postura ha sido asumida y aceptada por la jurisprudencia, en el sentido de aceptar cualquier medio de prueba para acreditar la apariencia de buen derecho, no limitándose exclusivamente a la prueba documental. Además, no requiere varias pruebas, basta una prueba con tal que sea capaz de formar la presunción grave de la existencia del derecho reclamado (Acevedo, 2020).

En resumen, no basta la simple afirmación de la existencia de un derecho para autorizar al juez a decretar una medida cautelar, tampoco exige una prueba absoluta de la existencia del derecho o de su certeza.

### **9.1.3 ¿Se puede prescindir de la acreditación del *fumus boni iuris* en la solicitud de embargo preventivo?**

El Código Procesal Civil Nicaragüense, deja claro la existencia de la apariencia de buen derecho como un presupuesto y la importancia de su justificación para acceder a una medida cautelar, por ende, no es posible sostener que en algún evento sea legítimo prescindir. Este requisito constituye una garantía para el demandado en el sentido que su patrimonio se verá afectado si y solamente si el derecho que se reclama aparece como posible y probable.

### **9.1.4 Acreditación del *fumus boni iuris* en la solicitud de embargo preventivo**

En relación a esto, el CPCN en su art.337 solo establece el deber de justificar la apariencia de buen derecho en la solicitud de la medida cautelar, sin dejar en claro específicamente cómo puede ser acreditado. En este orden de ideas, Llobregat (2012:62) reza:

La mejor forma de que el solicitante de la medida acredite la concurrencia del presente presupuesto es aportando elementos bastos que permitan de entrada comprobar la existencia verosímil de ese derecho, y acreditar esto último en el sentido de aportar pruebas proporcionadas, para que el órgano de instancia pueda presumir al menos la realidad de la

pretensión inicial, de manera que la persona que interesa las medidas no solo ha de presentar los datos y argumentos, si no los justificantes documentales que conduzcan al juicio de provisionalidad tan deseado.

Dicho lo anterior, la denominada apariencia de buen derecho" consiste, según el artículo 728.2 LEC, en la presencia de "datos, argumentos, y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión".

Por otra parte, en defecto de dicha acreditación documental del derecho o interés litigiosa, la jurisprudencia española ha permitido que el *fumus* quede justificado por el mero relato en que se justifique la demanda, aunque no debe ser cualquier relato de hecho para que pueda adoptarse tales medidas dado que, de seguir una interpretación laxa, todas las medidas cautelares tendrían que ser admitidas, sino una interpretación racional y coherente que conduzca a la creencia fundada del previsible éxito de la pretensión (Llobregat,2012).

Según lo antes dicho, el presupuesto del *fumus boni iuris* suele quedar reconocido, mayoritariamente en la existencia de un documento más o menos fiable en el que conste el derecho pretendido por el demandante. En el supuesto de no poderse justificar documentalmente, la apariencia de buen derecho podrá ofrecerse por otro medio de prueba o a través de argumentos sólidos coherentes y racionales.

#### **9.1.5 Naturaleza del juicio judicial acerca del *fumus boni iuris***

Tomando en cuenta que en cualquier proceso la parte demandante o reconviniente podrá solicitar las medidas cautelares necesarias y apropiadas, para asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que recayera (art.336 CPCN) la correspondiente solicitud de tutela cautelar debe ser formulada con claridad y precisión justificando la concurrencia y presupuestos legalmente exigidos para su adopción dado que al órgano judicial les resulta sumamente complicado saber cuál será el destino de la futura sentencia.

Por lo tanto, a la hora de completar el presupuesto de *fumus boni iuris*, en punto de adoptar o rechazar la medida cautelar. El órgano judicial tendrá que conformarse con la

mera probabilidad, que la pretensión del interesado resulte indiciaria tanto como en elementos subjetivos de legitimación de la invocada, así como el objetivo de la fundamentación (Llobregat, 2012:64).

En razón de lo anterior, Llobregat (2012:64) también expresa lo siguiente:

El derecho litigioso, que esgrime quien insta la medida cautelar, ha de representarse en apariencia bien fundamentada, toda idea de utilización del proceso y de aquella medida como un punto de instrumento de precisión en contra de quien haya de soportar su perjuicio y gravosas consecuencias. Por lo tanto, el juez o tribunal, no le es exigible, que alcance una certeza absoluta, y total acerca de la existencia y fundamento del derecho invocado por lo que se impone la necesidad de fundamentar la resolución judicial sobre las medidas cautelares en atención, a una simple apariencia o probabilidad sobre el mismo, toda base que la obtención de la certeza (que se obtiene con contradicción más actividad probatoria).

La apariencia de buen derecho, directamente se rige con la justificación del porqué tiene que ser, el minucioso examen judicial sobre los hechos aportados por el solicitante, aseguran que su decisión se formule con claridad y precisión justificando la concurrencia y presupuestos legalmente exigidos para su adopción, ceñirse a exigir lo señalado por ley aprueba un mejor alcance de la tutela judicial efectiva.

Es decir, la valoración judicial sobre los términos del litigio y sobre el fundamento de la pretensión esgrimida por el solicitante de la medida cautelar no puede ser equiparado ni mucho menos al enjuiciamiento.

## **9.2 Periculum in mora o peligro en la demora procesal**

### **9.2.1 Concepto**

Lo más cercano al concepto de peligro en la demora procesal en la legislación nicaragüense, se establece en el art. 337 del CPCN en los siguientes términos: “solo se podrá acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que existe peligro de lesión o frustración del mismo, por la demora del proceso antes de la resolución definitiva...”

En materia de los presupuestos cautelares, afirma Uriol (2012:163):

El peligro de mora procesal constituye la causa de las medidas cautelares debiendo entenderse por tal el riesgo de que, como consecuencia de la duración de un proceso o procedimiento, se produzcan hechos o circunstancias que impidan o dificulten gravemente la efectividad de la resolución que puede recaer.

La idea central de la tutela cautelar, es hacer frente al necesario tiempo que significa desarrollar un proceso con todas las garantías. Este tiempo, sin embargo, puede producir que el peligro de daño en el derecho e interés objeto de la controversia se convierta en un daño efectivo, por la existencia de algún evento natural, humano, voluntario o involuntario que haga imposible o limite su satisfacción por la sentencia judicial, es por eso que las medidas cautelares para ser concedida requieren la existencia de una situación de peligro, esto es, un peligro inminente de daño jurídico.

Este peligro en la demora, toma distintas características según sea la finalidad de la medida de que se trate; así se habla de peligro de infructuosidad y peligro en la tardanza o retardo.

- a) Peligro en la infructuosidad de la sentencia:** en este caso el sujeto activo está dispuesto a soportar el largo y tedioso camino a la tutela ordinaria, pero quiere tener la certeza que de obtener una sentencia favorable exista un patrimonio donde cumplirla, o que el bien objeto de la demanda no desaparezca o se deteriore. En relación a esto la medida cautelar asegura la existencia de bienes o la cosa objeto de la demanda.
- b) Peligro en la tardanza o retardo:** al contrario del peligro anterior, el sujeto activo de la medida no está dispuesto ni en condiciones de aceptar el largo tránsito a la sentencia, por ende, la sola espera del desarrollo del procedimiento es la que puede ocasionar el daño jurídico. Con este tipo de medidas cautelares se busca anticipar provisoriamente la satisfacción de la pretensión porque de esperarse el completo desarrollo de la tutela jurisdiccional pueden ocasionarse perjuicios irreparables para el demandante (Acevedo, 2020).

### **9.2.2 ¿Cómo se configura el peligro en la demora en el derecho procesal civil nicaragüense?**

Para hablar del peligro en la demora, se deben tener en cuenta una serie de aspectos, en cuanto al aseguramiento de los bienes necesarios de tal modo que la sentencia pueda ejecutarse. No solo el transcurso del tiempo puede ser un enemigo del actor, sino también ciertas actitudes que puede adoptar el demandado con relación a sus bienes; este podría dispersar sus bienes enajenándolos o deteriorar la cosa objeto de la demanda.

El CPCN, únicamente determina en los arts. 337 y 372 del CPCN en relación con el peligro en la demora el deber de justificar su existencia debidamente, para decretar las medidas cautelares. Aunque no especifica de manera clara la forma en que debe ser justificado este presupuesto y ni las situaciones donde se puede generar un peligro para los derechos del autor.

Como se mencionó anteriormente, el CPCN no plantea en su cuerpo normativo de manera textual la situación de peligro, a diferencia de otras legislaciones, un ejemplo de ello es la legislación Chilena que en su Código Procesal Civil art.290 determina dos causas donde se puede llegar a generar un peligro para los derechos del actor, por un lado, el peligro que deriva de una posible situación de insolvencia del deudor como causa directa de la frustración de la sentencia, y por el otro, el peligro que se deriva de cierta actitud que puede asumir el demandado respecto a los bienes objeto de la tutela, como una causa de esa frustración.

Las dos situaciones de peligros, reguladas en el Código Procesal Civil Chileno también aplican en las medidas cautelares nicaragüenses. Estas clases de peligro están presentes en cada una de las medidas cautelares que consagra el art. 343 del CPCN, ejemplo:

- Respecto de la retención de bienes que no son materia del juicio es necesario que las facultades del demandado no ofrezcan suficiente garantía o haya motivo racional para creer que procurará ocultar sus bienes (arts. 348 y 349 CPCN)

- Cuando se trata del secuestro y se reivindica una cosa corporal mueble se exige que hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor (art. 335 CPCN).
- Respecto del nombramiento de interventor judicial es procedente cuando hubiere justo motivo de temer el deterioro de la cosa o que las facultades del demandado no ofrezcan suficiente garantía (art.360 CPCN).

En cuanto a la solicitud de embargo preventivo de bienes, el peligro que se trata de evitar es que el demandado se convierta en insolvente mientras se tramita y resuelve el proceso principal debido a esto el CPCN en su art. 347 establece las situaciones de riesgo.

Por otro lado, de acuerdo con lo referido por Ortells, Calderón (1996:14) la doctrina española prefiere clasificar las situaciones de riesgo en:

- Riesgo que afectan la posibilidad de ejecución considerada en absoluto, por ejemplo, el riesgo de insolvencia del demandado que puede frustrar la ejecución genérica.
- Riesgo que amenazan la posibilidad práctica de una ejecución en forma específica
- Riesgo que amenazan la utilidad práctica de los efectos no ejecutivos de la sentencia (por ejemplo, la estimación de una pretensión declarativa de dominio deviene inútil, porque en el ínterin del proceso, el titular registral ha vendido el inmueble a un tercero de buena fe, que lo ha inscrito a su favor).
- Riesgos de ineffectividad que derivan del mero retraso del momento en que pueden producirse los efectos de la sentencia en cuanto a la naturaleza de la situación jurídica a la que la sentencia ha de referirse; este retraso supone por sí mismo una lesión irreversible de tal situación.

En la doctrina se toman como elementos de ponderación los que reglamentan los ordenamientos procesales, de forma tal que el peligro en la demora se pueda confundir con los motivos que la ley impone, y es por esto que algunas legislaciones se ven la clasificación de las situaciones de peligro con el propósito de evitar dichas confusiones.

### **9.2.3 Acreditación y justificación del peligro a la demora en la solicitud de embargo preventivo**

Recogido lo establecido en el artículo 337 del CPCN: “para decretar las medidas cautelares, será necesario que el solicitante justifique debidamente que son



indispensables para la protección de su derecho, siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo, por la demora del proceso”.

El CPCN, no establece en su articulado la forma en que debe ser justificado o acreditado dicho presupuesto. Al respecto, (Llobregat, 2012:76) considera:

La justificación no debe ser entendida en un sentido estricto y riguroso, como necesidad de que se aporte una prueba cierta y demostrativa de que los demandados van a procurar la frustración de la ejecución del futuro pronunciamiento, sino que debe ser interpretado de una forma más abierta y flexible. Para que el solicitante acredite este presupuesto es necesario evidencie la situación de riesgo durante la pendencia del proceso, por lo que razonablemente pudiera quedar amenazada la efectividad de una futura sentencia condenatoria, de modo que el juez no deba exigir la existencia de un peligro concreto de insolvencia, que sería de hecho difícil o imposible de acreditar en general, sino un cierto riesgo futuro y meramente previsible racionalmente.

Aunque, la acreditación o justificación del peligro a la demora no se debe entender en un sentido estricto y riguroso como se dijo anteriormente, esta flexibilidad no significa que se puede llegar al extremo y considerar válida la simple reproducción en el escrito en donde se solicita la medida cautelar.

A diferencia del presupuesto de *fumus boni iuris*, este presupuesto tal y como afirma Calamandrei (2007) “no puede limitarse a operar con simples probabilidades o realizar meros juicios de intenciones acerca de la producción hipotética o efectiva de esos daños o perjuicios derivados de la duración del proceso” (p. 60).

En igual sentido, haciendo referencia a exigencia de prueba existe cuando se pretende cualquier medida cautelar (Auto Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 26 de octubre de 2015) expresa:

Las audiencias han insistido en que, por ejemplo en el embargo preventivo, no es suficiente que el solicitante alegue el temor de que el demandado (o recurrido) pueda enajenar sus bienes deviniendo insolvente, sino que es preciso aportar prueba que permita atribuir al sujeto pasivo de la medida solicitada una conducta acreditativa de su propósito de colocarse en una situación de insolvencia; o con carácter general para cualquier medida cautelar, porque así lo exige el artículo 728.1 LEC, en que «la parte actora deberá justificar en su solicitud que concurre una coyuntura de la que estaría en condiciones de valerse la demandada para menoscabar los efectos de una hipotética resolución favorable a aquella», y ello «exige concretar, ante las específicas

circunstancias que concurran en cada caso, cuál sería la situación que, durante el desarrollo del litigio, habría de conjurarse con la medida interesada. No bastará, a este respecto, con recurrir a argumentaciones genéricas».

Por último, en aquellos casos en la que se inste una medida cautelar en donde haya una pluralidad de demandados, el presupuesto de peligro por la demora tendrá que justificarse únicamente con respecto aquel o aquellos demandados frente a los que se insta dicha medida y no así a los otros demandados (Llobregat,2012).

#### **9.2.4 Naturaleza del criterio judicial sobre el periculum in mora**

Al respecto, de la naturaleza del criterio judicial sobre el periculum in mora (Llobregat, 2012:56) señala:

La emisión de un pronunciamiento cautelar ha de ir precedido, cuando menos, de un examen judicial provisional o indiciario sobre el fundamento de la pretensión esgrimida por quien insta en su favor la tutela judicial cautelar (el Fumus Boni iuris), y de un segundo examen judicial acerca de la existencia o no de riesgos de producción de daños y perjuicios capaces de generarse, de no ser adoptada puntualmente la medida cautelar, durante el tiempo necesario para tramitar el proceso (el periculum in mora). Sin embargo, este segundo juicio judicial, a diferencia del primero anteriormente relacionado que es provisional o indiciario, no puede limitarse a operar con simples amabilidades o realizar meros juicios de la efectividad de esos daños o perjuicios derivados de la duración del proceso.

El juicio sobre el periculum in mora, ha de serlo de certeza o de concreción o constatación sobre la base de elementos de juicio real y específico, de acuerdo con (Calamandrei, 2010:9) esto esencialmente por dos razones:

- De un lado porque la adopción de una medida cautelar compone siempre un menoscabo en la esfera jurídica del sujeto frente quien la misma se dirige.
- Por otro lado ese juicio sobre el periculum in mora juicio que a propósito del fumus boni iuris sólo podrá ser provisional o indiciario por carácter aún el juzgador de los elementos de juicio imprescindibles para manifestarse de forma definitiva sobre el derecho litigioso del peticionario. Puede perfectamente erigirse en un juicio de certeza, toda vez que para determinar la existencia de ese riesgo o peligro el juzgador, o cuanta ya en ese momento inicial del proceso todos los elementos de juicio imprescindibles para emitir un pronunciamiento adecuado, o ya no cabe esperar que los obtenga con posterioridad.

Por ende, deben concurrir suficientes condiciones y requisito para que la medida cautelar sea decretada, hay que añadir, que la necesidad de que el actor justifique ante el tribunal la existencia del periculum in mora, hará que este aporte cuantos elementos argumentales y probatoria disponga, de manera que, si no consigue justificar la existencia de ese periculum, la medida cautelar no podrá ser adoptada.

El periculum in mora, presenta una doble característica derivada de la perspectiva con que se contemple, que habrá de ser valorada por el tribunal ante quien se solicite la medida cautelar:

**a) Carácter objetivo.** Esta condición deriva de la finalidad que persigue la adopción de la medida cautelar, tendente a la conservación de los bienes del deudor hasta la finalización del asunto y la posible efectividad de la condena sobre los mismos.

**b) Sentido subjetivo.** Y, por otro lado, la apreciación de ese fin aseguratorio habrá de conectarse con la situación personal del solicitante orientado a conseguir el propósito de que un retardo en la ejecución forzosa resulte infructuosa por la desaparición de los bienes sobre los que pudo haberse realizado (Work Club, 2019).

Su objetivo inmediato, es procurar que los bienes jurídicos cualquiera que sea su clase o naturaleza que pertenecen al acervo patrimonial del sujeto pasivo permanezcan integrados en él, para que desaparezca el riesgo de que se difumina la efectividad de una eventual resolución favorable al instante de la medida.

## **10. Situación jurídica cautelable**

Por su parte, Llobregat (2012:60) conceptualiza la situación jurídica cautelable de la siguiente forma:

La situación jurídica cautelable es el estado de cosas donde quepa cuestionar, si efectivamente, es adecuado o no lo es la adopción jurisdiccional de una medida cautelar solicitada por la parte procesal o por quien vaya a hacerlo en el inmediato futuro. De lo contrario de no darse dicha elemental premisa, es evidente que, pese a la petición de parte se tutele judicial cautelar, lo único procedente será el rechazo de la misma sin entrar a examinar si concurre o no los presupuestos cautelares.

Para que se produzca dicha situación jurídica cautelable, que de paso al cuestionamiento sobre la concurrencia o no de los posibles cuestionamientos, son necesaria, al menos las siguientes condiciones:

- a) En primer término, la existencia de una petición presente o futuras (en este último caso de las medidas cautelares, susceptibles de adopción con anterioridad a la interposición de la demanda) que se solicite formalmente de la autoridad judicial.
- b) En segundo lugar, la existencia de una pretensión formal o informalmente deducida de carácter declarativa a cuyo aseguramiento o anticipación provisional se encamine a aquella medida cautelar.
- c) El tercer y último término, no basta con la pretensión esgrimida por el litigante que insta la medida cautelar pertenezca al género declarativo a que se refiere el art. 5 LECiv. Es necesario, además, que dicha pretensión declarativa sea de condena, es decir, dirigida a la obtención de un mandato judicial firme de dar, hacer o no hacer frente al demandado (Llobregat, 2012:60).

Ahora bien, para Barona (2015:24,25) “la situación jurídica cautelable vendrá delimitada en cada una de las medidas cautelares con carácter específico”. Un ejemplo claro la podemos encontrar en las siguientes medidas cautelares:

- Anotación preventiva (art. 371 CPCN), la situación jurídica cautelable vendrá determinada por la pretensión constitutiva de un derecho real sobre bienes inmuebles o muebles registrables;
- El embargo (art. 347 CPCN), se determina la situación jurídica cautelable referida a una pretensión que vaya a poder ejercitarse sobre deuda en dinero, o en frutos, rentas y cosas fungibles convertibles en dinero, esto es, una pretensión de condena dineraria. Es decir, vendrá referida a la pretensión que se ejercite.

El embargo preventivo es una medida cautelar específica, cuya situación cautelable es el aseguramiento de una eventual sentencia condenatoria a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos (art.347 CPCN). Fuera de esos supuestos, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado.

## **11. La caución o contracautela**

### **11.1 Concepto**

La legislación nicaragüense, en cuanto al procesal civil no define a la caución. Lo más cercano a ello lo encontramos en el art. 375 CPCN cuando indica *“como regla general, la persona solicitante de la medida cautelar deberá ofrecer caución suficiente, para garantizar el pago de las costas causadas en el incidente, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandada, por su adopción y cumplimiento ...”*.

La caución funciona en calidad de cautela, o como se ha dicho autorizadamente, de contracautela. Así, *“se asegura al actor un derecho aún no actuado y al demandado la efectividad del resarcimiento de los daños, si aquel derecho no existiera o no llegará a actualizarse”* (Vallefin, 2002:20). La exigencia de caución tiene como finalidad hacer efectiva la responsabilidad del solicitante de una medida cautelar, en caso de que su pretensión sea desestimada y la solicitud haya producido perjuicios en el demandante.

En virtud de lo anterior, Taramona (1996:96) define a la caución como *“...La garantía que deben aportar aquellos que solicitan alguna medida cautelar, para asegurar la reparación de los eventuales daños y perjuicios que se pudieran generar por la traba de ellas en el supuesto de haber sido decretadas indebidamente...”* La contracautela supone una garantía por la realización de un acto jurídico procesal injusto.

### **11.2 La caución: ¿presupuesto o requisito de cumplimiento, de acuerdo a Ley No. 902?**

En relación con si la caución es un presupuesto o requisito de cumplimiento, se encuentra un extenso debate, debido a que no hay un consenso en torno a la categoría jurídica de esta figura, si bien en un primer momento se la consideraba un presupuesto para la procedencia del dictado de una medida cautelar, algunos juristas, sostienen que no se trataría de un presupuesto de las medidas cautelares propiamente dicho, sino que, por el contrario, debe ser considerada como una condición de ejecutoriada.

Con respeto a lo anterior, De Diego Díez (2008:27) sostiene lo siguiente:

Para decretar las medidas cautelares es necesario que el solicitante justifique la concurrencia de los dos elementos clásicos en los que se funda toda tutela cautelar: el peligro de mora procesal (*periculum in mora*) y la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*). También debe calificarse como presupuesto, pero no de la adopción, sino de la ejecución de la medida cautelar, la prestación de la caución en la forma, cuantía y tiempo que, en su caso, acuerde el órgano judicial.

Partiendo de lo expuesto, la caución es un requisito necesario para la ejecución de la medida cautelar, pero que no existe hasta que se ha tomado la decisión sobre la concesión de la medida solicitada. Se incorpora al proceso cuando ya se ha resuelto la cuestión esencial que se debate en la solicitud de medidas cautelares y se convierte en presupuesto necesario de su ejecución, pero hasta entonces carece de viabilidad (Wolters kluwer, 2020).

En cambio, Ortells (1996) refiere *“la caución, por regla general, también es presupuesto de las medidas cautelares. Sin embargo, agrega que debe atenderse al régimen de cada medida cautelar para precisar si este presupuesto es de la concesión de la medida o de su ejecución”*. (p.289)

En concordancia con el ordenamiento procesal civil nicaragüense, se considere a la caución como un requisito de admisibilidad y como un presupuesto de la ejecución de las medidas cautelares, a pesar de que el art. 337 CPCN en marca como presupuestos para su concesión y ejecución únicamente: “la apariencia del derecho invocado” (*fumus boni iuris*), “el peligro en la demora” (*periculum in mora*).

Dentro del contexto normativo nicaragüense, la caución pasa por la receptividad en cuanto el pertinente ordenamiento legal, es a partir de esto que se fija la caución como requisito expreso para conceder una medida cautelar, esto es que la considere como una exigencia de procedibilidad, la base jurídica la encontramos en los artículos 372,2 y 375.1 del CPCN.

Dicho lo anterior, la caución es un requisitos de la solicitud cautelar, pero no se puede negar que en dependencia al caso la caución funge como un presupuesto de la ejecución de las medidas cautelares, el art. 385.1 CPCN establece “acordada la medida cautelar y prestada la caución, se procederá de oficio a su cumplimiento

empleando...”. Con relación a esto también podemos tomar lo señalado en el art.375.2 del CPCN.

Ante ello, la caución en el sistema normativo legal procesal civil nicaragüense es tanto un requisito de procedibilidad de las medidas cautelares, como también en un presupuesto de la ejecución cautelar esto en dependencia a cada caso.

### **11.3 Exigencia de caución como regla general**

**a) Exigencia de prestar caución:** el art.374 del CPCN establece como regla general la exigencia prestar caución al señalar que “la prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar acordada”.

#### **b) Excepciones (Art. 377 CPCN):**

1) Quien tenga reconocido el beneficio de asistencia jurídica (Art. 34.4 de la Constitución Política de Nicaragua (Cn), 211 al 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 110 a 120 de su reglamento, y 377.2 CPCN)

2) Decisión judicial: En caso de desequilibrio entre las capacidades económicas de los litigantes, especialmente en procesos en que la pretensión individual se acumuló a la de intereses generales, colectivos o difusos, como los de consumidores o protección del medio ambiente, art. 60 Cn “los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable” y art. 377.2 y 492 CPCN.

3) El Estado y las municipalidades en los casos de cobros de impuestos, tasas o servicios (art.377 CPCN).

4) En los demás casos previstos por la ley, o sea, se dejó abierta la posibilidad de que una norma o ley especial establezca la excepción (377.4 CPCN).

### **11.4 El monto de la caución**

Como sabemos, la exigencia de caución tiene como finalidad hacer efectiva la responsabilidad del solicitante de una medida cautelar, en caso de que su pretensión sea desestimada y la solicitud haya producido perjuicios en el demandante. Uno de los

problemas que esto representa, es que aún no conocemos cuál será el monto de ese perjuicio a indemnizar, por lo tanto, determinar el monto de la caución se dificulta.

En correspondencia al monto de la caución, el artículo 341.5 CPCN determina que el Juez puede “determinar la forma de la caución, su cuantía y tiempo en que deba prestarse”, en concordancia con esto el art. 376 del mismo cuerpo normativo en su segundo párrafo encuadra que “la autoridad judicial podrá aceptar la caución ofrecida, graduarla, modificarla o incluso, cambiarla por la que considere pertinente, siempre respetando la proporcionalidad en relación con el monto de la pretensión deducida, y la capacidad patrimonial de la parte solicitante” (arts. 341.5, 337.2 CPCN).

El problema existente, es que el tratamiento que la Ley No. 902 dispensa a la caución es insuficiente, en cuanto la falta de un criterio bien establecido que permita fijar de manera proporcional el monto adecuado de la caución.

Ahora bien, la ausencia de parámetros o un criterio preciso para su cuantificación y regulación puede llegar a aumentar en gran medida el riesgo para ambas partes del proceso, es decir que un demandante con derecho viable puede verse imposibilitado para otorgar una caución fijada por el juez en un monto excesivamente elevado o desproporcionado. Por otro lado, el demandado puede verse desprotegido con una caución menor al daño que potencialmente puede sufrir con la ejecución de la medida, es en correlación a esto se vuelve una figura de más complicada exégesis que otras que sí cuentan con una mejor sustanciación y regulación.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de España, en su art.728.3 establece los criterios para determinar el monto de la caución, el tribunal determinará el monto de la caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice.

Los criterios son: 1) la naturaleza y contenido de la pretensión; 2) la valoración que se realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la medida. A estos criterios debe, sin duda, añadirse un tercero: la previsión de los daños y perjuicios que la medida cautelar pudiera causar en el patrimonio del demandado. Garantizar la indemnización de los mismos es el fin de la caución (art. 728.3, párrafo



primero, LEC), de modo que su cumplimiento impone la toma en consideración de este aspecto.

Dicho lo anterior, la legislación nicaragüense establece como parámetros para la cuantificación de la caución lo establecido en art.376 inciso 2 del CPCN *“la autoridad judicial podrá aceptar la caución ofrecida, graduarla, modificarla o incluso, cambiarla por la que considere pertinente, siempre respetando la proporcionalidad en relación con el monto de la pretensión deducida, y la capacidad patrimonial de la parte solicitante”*.

## MARCO CONCEPTUAL

La comprensión de un trabajo monográfico investigativo, depende en gran parte de la claridad y coherencia de los conceptos desarrollados y cómo estos aportan al progreso del mismo, sin entrar en conflicto entre sí, pues se pretende lograr la mayor fluidez de las ideas obtenidas mediante las definiciones hechas por diversos autores jurídicos expertos en la materia y contrastar aquellos fragmentos que pueden considerarse significativos.

Con el propósito antes mencionado, se van a explicar ciertos conceptos claves que se mencionan repetidamente a lo extendido del trabajo monográfico tales como: 1) Medida Cautelar, 2) Proceso Cautelar, 3) Presupuestos Cautelares, 4) presupuestos procesales, 5) Función Jurisdiccional y 6) Tutela judicial efectiva.

### 1. Medida cautelar:

Para el Dr. *Raúl Botos M. (2001)* *“las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante derivada de la duración del mismo”*.(p.50)

Igualmente, las medidas cautelares son un instrumento procesal contemplado por la ley para prevenir ante pruebas, la actuación fraudulenta o maliciosa que menoscabe el derecho de las partes a fin de lograr asegurar sus pretensiones y las resultas de estas.

### 2. Proceso cautelar:

El Dr. *Montero Aroca J. (2015)* en su obra *Derecho Jurisdiccional II Proceso Civil*, señala los siguientes elementos del proceso cautelar:

- ✓ La delimitación subjetiva de la tutela cautelar se efectúa atendiendo al tribunal y a los sujetos demandante y demandado de las mismas.
- ✓ Solo es posible adoptar la tutela cautelar a instancia de parte, bajo ninguna circunstancia el tribunal lo puede hacer de oficio.

- ✓ El objeto de este proceso es la pretensión cautelar, consistente en la petición de adopción de medidas necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare.

De igual importancia, Llobregat (2012) refiere lo siguiente:

la instauración del proceso cautelar o bien medidas cautelares, se debe entender como aquellos mecanismos procesales tendentes a garantizar o pre ordenar la viabilidad o efectividad de los efectos de la cosa juzgada que haya de producir la resolución judicial que se pronuncie de manera definitiva sobre el objeto del proceso.

Un proceso cautelar, es entonces aquel que inicia de previo a la interposición de demanda o durante esta misma, con el fin de instaurar una medida cautelar adecuada a los hechos, que por solicitud de una de las partes atentan contra el aseguramiento de la futura sentencia.

### **3. Presupuestos cautelares:**

Son elementos necesarios exigidos por la ley para la adopción de una medida cautelar (art. 337 CPCN) estos son:

- a) Apariencia de buen derecho (Fumus boni iuris)
- b) Peligro por la mora procesal (Periculum in Mora)

### **4. Presupuestos procesales:**

El Dr. Escobar Fornos I. (2016:67) cataloga a los presupuestos procesales como “requisitos formales que necesariamente deben concurrir para poder constituir válidamente un determinado proceso y que el Juez pueda dictar una sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto”. Cuando se aprecie, en cualquier momento, la ausencia de un presupuesto procesal que resulte insubsanable, se dictará resolución que impedirá continuar con el procedimiento, sin que se entre a conocer sobre el fondo del asunto. Los presupuestos procesales son condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento favorable o desfavorable sobre la demanda.

## **5. Función jurisdiccional:**

En opinión del procesalista italiano Dr.Chiovenda G. (1940) la función jurisdiccional tiene como propósito *“la actuación de la voluntad concreta de la ley, como función de Estado, mediante la sustitución, por la actividad de los particulares o de otros órganos públicos ya sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley o al hacerla prácticamente efectiva”*.

Conforme a criterio, la función jurisdiccional es la potestad que emana de la soberanía estatal que a su vez la obtiene de la soberanía del pueblo y que es ejercida exclusivamente por Tribunales Independientes y predeterminados.

La norma nicaragüense señala la jurisdicción y competencia como presupuestos del órgano jurisdiccional (art. 26 CPCN).

## **6. Tutela cautelar:**

Es la potestad que emana directamente de la tutela judicial efectiva y se traduce al proceso cautelar, si bien la tutela judicial efectiva se consagra generalmente como un principio del proceso, esta es de carácter ordinario, en cambio la tutela cautelar se limita a la efectividad de la medida cautelar en las diversas etapas que transcurren previo a su implementación y estando una vez ejecutada.

De acuerdo con el Dr. Ragone (2001) en la obra *Diversos significados de la tutela cautelar en el proceso civil*, define la tutela cautelar como aquella *“tutela accesoria e instrumental, que fundada en cognición de probabilidad tiende a amparar a cautelar o a salvaguardar, un resultado útil de eventual contenido en una sentencia de mérito futura”*.(p.23)

De este modo, el proceso cautelar se coloca como una vía autónoma y diversa a las funciones de declarar y ejecutar el derecho, completando así el cuadro de las funciones de la Jurisdicción: declarativa, ejecutiva y cautelar.

La relación directa de las definiciones abordadas anteriormente, con el presente trabajo monográfico recae en el hecho innegable de que para estudiar la figura jurídica de los

presupuestos cautelares y como están regulados, es necesario profundizar de previo en la institución de las medidas cautelares.

## MARCO LEGAL

La presente investigación jurídica, consta de un marco legal muy completo consistente esencialmente en 4 elementos que serían: 1) La Constitución Política, 2) Código Procesal Civil de Nicaragua Ley 902, 3) Doctrina y Jurisprudencia.

**1. Constitución Política de la República de Nicaragua** con sus reformas incorporadas, aprobada el 10 de marzo de 2014, publicada en La Gaceta Diario Oficial número 32 del 18 de febrero de 2014.

Como parte del marco legal de la presente investigación se considera importante destacar el art. 34 del título IV “Derechos deberes y garantías del pueblo nicaragüense” de la Cn. Párrafo primero, que señala la tutela judicial efectiva como parte de las garantías mínimas a las que tiene derecho todo ciudadano, esto guarda relación directa con los principios consagrados en el CPCN, pues facultan y obligan al judicial a salvaguardar en todo momento el debido proceso y respetando los intereses de las partes aplicando en todo momento los derechos que estas accionen hasta la efectiva sentencia definitiva y esto guarda relación directa con la potestad o tutela cautelar.

Evidentemente al hablar de las facultades del judicial, se infiere en el Título VIII De la Organización del Estado, Capítulo V sobre el Poder Judicial; enfatizando algunos artículos como el art. 158 “La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los Tribunales de Justicia que establezca la ley”. O bien el artículo. 160 párrafo primero “La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos, y garantiza el acceso a la justicia mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia”.

**2. Ley No. 902 Código Procesal Civil de Nicaragua**, aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua el cuatro de junio del dos mil quince y publicado en la Gaceta Diario Oficial No.191 del nueve de octubre del mismo año. Nicaragua.

Su importancia radica, en que la investigación planteada tiene su base principal en esta norma legal, ya que en ella se regula en el Libro Tercero del arts. 336 al 389 la institución jurídica de la medida cautelar y más específicamente en su Capítulo II nos

hace un señalamiento des del arts.375 al 377 sobre los presupuestos regulados en las medidas cautelares, que es la figura jurídica en la que se basa la presente investigación.

**3. Doctrina y Jurisprudencia:** un elemento indispensable para integrar toda investigación jurídica, es la doctrina de diversos autores, pues son los criterios ampliamente desarrollados que guardan relación con determinado tema, en este caso la investigación monográfica es aplicada al estudio del derecho y utiliza la herramienta de la doctrina para dotar de fuerza todo lo que se pretende abordar.

En un sentido literal, la doctrina hace referencia a los estudios llevados a cabo por los juristas a fin de comprender los temas relacionados con el Derecho como las normas, el orden jurídico y las instituciones.

Se conoce como jurisprudencia (Iuris Prudentia), al conjunto de sentencias que los tribunales y a la doctrina contienen. El término también puede utilizarse para hacer referencia al criterio sobre un problema jurídico que fue establecido por sentencias previas y a la ciencia del derecho en general; en un carácter investigativo documental constituye un instrumento de suma importancia para analizar los diversos criterios legales sobre determinada situación.

## **PREGUNTAS DIRECTRICES**

1. ¿Cómo están reguladas las medidas cautelares y en particular el embargo preventivo de bienes en el Código Procesal Civil Nicaragüense?
2. ¿Cómo están conceptualizados en la doctrina los presupuestos cautelares?
3. ¿Qué consideraciones o criterios deben ser tomados en cuenta para la acreditación y valoración de los presupuestos cautelares en la solicitud de embargo preventivo?
4. ¿Se está cumpliendo con las disposiciones prescritas en el art. 337 del CPCN, en las solicitudes de embargo preventivo de bienes presentadas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua durante los periodos 2018-2019?



### CAPÍTULO III

#### DISEÑO METODOLÓGICO

##### 12. Enfoque de la investigación:

Según Hernández (2014) *“el enfoque cualitativo recolecta contenidos o datos sin ninguna medición numérica para descubrir o perfilar las preguntas de investigación en todo el desarrollo de su interpretación del proyecto”*(p.7). Esto quiere decir que la indagación a tratar explorará y reconocerá conceptos o contenidos, además generará posturas o proyecciones teóricas.

En virtud de lo anterior, esta investigación es de tipo cualitativa, pues se utilizó un método inductivo que permitió el análisis de elementos particulares como el origen, definición y naturaleza jurídica de los presupuestos cautelares que es la institución en estudio, así como elementos generales, tales como su tratamiento procesal y sus efectos.

En el presente trabajo, las técnicas utilizadas se basaron en revisión técnica documental de leyes, análisis de expedientes del Juzgado Primero de Distrito Civil de Managua, durante los años 2018-2019 y fuentes secundarias. Así como entrevistas a profundidad estructurada a la **Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza, Asesora de la Sala Civil de la CSJ, al Juez Décimo de Distrito Civil de Managua, Dr. Roger Salvador Alfaro Cortez y a la Dra. Adriana María Cristina Huete Jueza del Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua**, con la finalidad de obtener información significativa en el estudio de este fenómeno.

##### 12.1 Según el análisis y alcance de los resultados

Esta investigación, según su nivel de profundidad es de tipo descriptiva, a través de las técnicas de recolección utilizada se logró describir la regulación establecida de las medidas cautelares en el CPCN y específicamente la descripción de embargo preventivo de bienes, así mismo se caracterizó los presupuestos cautelares en los que se produce el embargo preventivo.

Además, se logró comprobar cómo están siendo aplicadas las disposiciones establecidas en el art.337 del CPCN, en las solicitudes de embargo preventivo de bienes presentadas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019, las técnicas planteadas nos dieron los datos de relevancia del problema en mercado.

## **12.2 Según sus objetivos y método**

Esta investigación, es de tipo documental y práctica, pues se analizó la información que sobre el tema existe, tanto en los textos, como en los Códigos Procesales de otros países, además de esto, también se implementó un instrumento de investigación que permitió obtener respuestas a las interrogantes expuestas en el planteamiento del problema, sumado a esto se obtuvo una mejor perspectiva de la práctica aplicada, tanto por los jueces, como por los abogados litigantes.

## **12.3 Tipo de investigación jurídica**

Esta investigación es de tipo jurídica-doctrinal, pues en el presente trabajo se utilizó la doctrina jurídica relacionada con los presupuestos cautelares, para de esta manera dar respuesta al problema planteado. Se efectuó una actividad ordenada dentro de la investigación jurídica, encaminada al estudio de la doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), tomando como referencia a los más destacados juristas nacionales e internacionales.

Además, se utiliza la investigación socio-jurídica, ya que, entre las principales líneas de investigaciones por su envergadura, resaltan los estudios de casos que consistió en analizar a detalle expedientes casos de manera puntual, el cual, evidentemente reunieron ciertas características.

## **12.4 Población**

Según Lepkowski (2008) citado por Hernández (2014: 174) “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”.

La población o universo correspondió a los Jueces de Distritos Civil y abogados de la ciudad de Managua, especialistas en el tema de estudio. Es importante mencionar, que desde el periodo correspondiente al año 2018-2019 fueron presentadas 6 solicitudes de embargo preventivo ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, por lo tanto, el universo correspondiente al análisis de expedientes es equivalente a 6 expedientes casos, a los cuales se logró tener acceso.

## **12.5 Muestra**

El tipo de muestra elegida fue la no probabilística, cuyo estudio de elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del estudio (Johnson, 2014, Hernández Sampieri et al., 2013 y Batlaglia, 2008b).

Aquí, el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Sampieri, 2014: 176).

### **12.5.1 Descripción de la muestra**

#### **a) La muestra de expertos:**

En la presente investigación, fue necesaria la opinión de expertos en el tema de los presupuestos de las medidas cautelares reguladas en el CPCN, por lo tanto, se entrevistó a la Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza, Asesora de Magistrado de CSJ, al Juez Décimo de Distrito Civil Dr. Roger Salvador Alfaro Cortez y a la Dra. Adriana María Cristina Huete Jueza del Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, todos expertos en Derecho Procesal Civil con reconocimiento profesional y experiencia.

Según Hernández, R. (2014) “Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionamientos”. (p.387)

## **b) La muestra de caso tipo:**

Desde el año 2018 hasta el año 2019, se presentaron 6 solicitudes de medidas cautelares de embargo preventivo ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, de los cuales se tomaron como referencia 3 expedientes casos que equivalen el 50% del universo seleccionado, de dichos expedientes se analizó principalmente la solicitud y el auto de admisión o inadmisión de la medida cautelar. El análisis se enfocó en torno a la acreditación y valoración de los presupuestos cautelares regulados en el art. 337 del CPCN, además de la naturaleza y tipo de medida cautelar, los expedientes fueron de gran utilidad para el desarrollo de la investigación.

Cabe señalar, que no se analizaron expedientes del año 2020, debido a que estos aún se encontraban en pleno trámite, por lo tanto no podían ser objeto de nuestro estudio.

## **12.6 Métodos, técnicas y procedimiento de la investigación:**

El estudio en cuestión, está basado en la información adquirida mediante los métodos empíricos como el análisis documental la entrevista y análisis de expedientes casos, los métodos teóricos apoyándose básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción, para realizar el análisis e interpretación de los resultados.

## **12.7 Técnicas de recopilación de datos:**

Para la recolección de la información, se requirió del uso de métodos que permitieron facilitar el acceso a la información requerida para el estudio del fenómeno y poder lograr los objetivos propuestos en la presente investigación.

### **12.7.1 Técnicas de investigación:**

En el desarrollo de esta investigación se emplearon las técnicas de recolección de datos propios de una investigación con enfoque cualitativo, entre los cuales se tomaron en cuenta.

#### **a) La entrevista:**

Esta técnica es una confrontación interpersonal, en la cual una persona el entrevistador formula a otra las preguntas correspondientes, cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación (Ramírez, 2011:9). En tal sentido, mediante esta técnica se reunió información a través de realizar preguntas a profesionales y especialistas en la materia.

#### **b) Análisis del registro documental:**

Esta técnica de recolección de datos nos permitió analizar las teorías, casos y antecedentes, en torno al tema materia de investigación, para estos efectos se realizó la búsqueda en la base de datos de bibliotecas físicas y virtuales.

#### **c) Descripción de instrumentos:**

- **Ficha de análisis de registro documental:** tuvo por finalidad analizar la acreditación y valoración de los presupuestos de las medidas cautelares reguladas CPCN, de forma esquemática que incluyendo la información doctrinaria, casos resueltos, un análisis crítico y la respectiva conclusión.
- **Guía de entrevistas:** se elaboraron preguntas de manera abierta (no estructurada), con el objeto de que el entrevistado responda con libertad respecto al tema.

### **12.8 Procedimiento de Investigación:**

Específica los pasos para la obtención de la información en el desarrollo del tema objeto de estudio, es decir, en este punto se explicaron las diferentes fases secuenciales que se han venido utilizando para desarrollar la investigación, desde la búsqueda de los elementos teóricos, la definición del contexto de estudio, hasta la construcción del corpus de reflexiones teóricas que sustentarán la investigación.

La presente investigación está basada en información obtenida mediante métodos empíricos como la entrevista a profundidad a la muestra seleccionada, el estudio de diferentes cuerpos normativos que contienen las instituciones jurídicas en estudios, así como la revisión y análisis de documental, entre otras fuentes secundarias que

contenía información sobre el tema en cuestión. Además, también nos basamos especialmente en el análisis de expedientes casos el cual nos sirvió para evidenciar las formas en que se aplican y valoran las disposiciones reguladas en el art. 337 del CPCN en la práctica forense.

## MATRIZ DE DESCRIPTORES

OBJETIVOS	PREGUNTAS	FUENTES	TÉCNICAS
<p><b>Primero:</b></p> <p>Describir la regulación de las medidas cautelares y el embargo preventivo de bienes en el CPCN.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Qué son las medidas cautelares?</li> <li>2. ¿Cuál es la regulación de las medidas cautelares establecidas en el CPCN?</li> <li>3. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del embargo preventivo?</li> </ol>	<p>-Ley 902 “Código Procesal Civil de la República de Nicaragua”.</p> <p>-Doctrina.</p> <p>-Bibliografía.</p> <p>-Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza asesora de magistrado.</p> <p>-Juez Roger Salvador Alfaro Cortez, Juez Noveno de Distrito Civil de Managua</p> <p>- Dra. Adriana María Cristina Huete Jueza del Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción</p>	<p>Entrevista a profundidad</p> <p>Análisis del Registro Documental.</p>

		Managua.	
<p><b>Segundo:</b></p> <p>Analizar la acreditación y valoración de los presupuestos cautelares regulados en el CPCN, en las solicitudes de embargo preventivo de bienes a través del uso de doctrina, leyes y códigos procesales civiles de otros países.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Según el art. 337 del CPCN son presupuestos cautelares el peligro de la demora y la apariencia de buen derecho, ¿cuál es su importancia y cómo conceptualizaría cada uno de ellos?</li> <li>2. ¿Cuáles son los presupuestos cautelares en los que se produce el embargo preventivo y como deben ser acreditados y valorados?</li> <li>3. ¿Según su opinión la caución es un requisito o un presupuesto cautelar? ¿Por qué?</li> <li>4. ¿Qué criterios toma como</li> </ol>	<p>-Ley 902 “Código Procesal Civil de la República de Nicaragua”.</p> <p>-Doctrina.</p> <p>-Bibliografía.</p> <p>-Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza asesora de magistrado.</p> <p>-Msc. Roger Salvador Alfaro Cortez, Juez Noveno de</p>	<p>Entrevista a profundidad</p> <p>Análisis del Registro Documental (análisis de casos de expedientes)</p>



	<p>referencia a la hora de cuantificar la caución en la solicitud de embargo preventivo?</p> <p>5. ¿Cree usted que el CPCN brinda un buen tratamiento procesal a los presupuestos cautelares?</p>	<p>Distrito Civil.</p> <p>-Dra. Adriana María Cristina Huete Jueza del Juzgado Primero de Distrito Civil de Managua</p>	
<p><b>Tercero:</b></p> <p>Comprobar el cumplimiento de las disposiciones prescritas en el art.337 del CPCN en las solicitudes de embargo preventivo de bienes ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, a partir de tres expedientes seleccionados dentro de los periodos 2018-2019.</p>	<p>1. ¿ Cuáles son los principales errores que llegan a cometer los abogados al momento de acreditar los presupuestos cautelares?</p> <p>2. ¿Cuáles son los principales errores que llegan a cometer los Jueces al momento de la valoración de los presupuestos cautelares?</p> <p>3. ¿Cuáles serían las consecuencias de la inadmisión de la medida cautelar de embargo preventivo cuando se acrediten correctamente todos los presupuestos y requisitos o de su adopción errónea?</p>	<p>-Ley 902 “Código Procesal Civil de la República de Nicaragua”.</p> <p>-Doctrina.</p> <p>-Bibliografía.</p> <p>-Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza asesora de magistrado.</p> <p>-Msc. Roger Salvador Alfaro Cortez, Juez Noveno de Distrito Civil de Managua</p> <p>-Dra. Dra. Adriana María Cristina Huete Jueza del Juzgado Primero</p>	<p>Entrevista a profundidad.</p> <p>Análisis del Registro Documental (análisis de casos de expedientes)</p>

		de Distrito Civil de Managua.	
--	--	----------------------------------	--

## **CAPÍTULO IV**

### **ANÁLISIS DE RESULTADOS**

#### **13. Análisis de expedientes**

El interés de realizar un estudio monográfico, cuya problemática está enfocada a la praxis de las medidas cautelares y en concreto a los presupuestos señalados por el art. 337 del CPCN, evidenció la necesidad de utilizar como instrumento metódico el análisis de expediente, cuya fortaleza brinda de manera aplicada la posibilidad de comprobar información en un corto periodo de tiempo.

Siguiendo esta línea investigativa, se procedió con el análisis de 3 expedientes de solicitudes cautelares de embargo preventivo interpuestas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019, la guía a seguir fue analizar como elementos relevantes la fundamentación jurídica, el escrito de solicitud (la forma de acreditación de los presupuestos) y el auto de admisión o inadmisión de dicha solicitud (la valoración judicial y él por tanto).

Centrados en este propósito, cada expediente analizado seguirá una estructura lineal describiendo de manera concisa las partes, la acreditación de los presupuestos conforme el caso, la resolución del judicial sobre la admisión o inadmisión de la solicitud cautelar, fundamentación jurídica y una conclusión general.

#### **13.1 Análisis del expediente número 007711-ORM4-2019-CO**

##### **13.1.1 Solicitud de embargo preventivo**

A las diez y doce minutos de la mañana del veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve, fue solicitada la medida cautelar por la Lic. Karla Ninoska Arroyo Sánchez, mayor de edad, soltera abogada y notaria pública del domicilio de Managua, actúa en su propio nombre, en contra de la ciudadana Lilyam Romero Urroz.

##### **a) Fundamento de la solicitud, basándose en los siguientes hechos**

**Primero:** En el mes de abril del año dos mil dieciocho, la señora Urroz fue acusada de un delito de hurto, expediente identificado con el número de asunto: 014119-ORM4-

2018-PN, la acusada recurre a mis servicios para que la represente como defensa técnica dentro del proceso, sin más trámites se procedió a llegar a un acuerdo sobre la tasa de mis honorarios por prestaciones de servicios profesionales, en donde ella sin ningún problema aceptó y lo que consta en correo electrónico con el que demostraré mis extremos al momento de llegar a la demanda ordinaria

**Segundo:** En julio de este año dos mil diecinueve, la señora Lilyam Romero Urroz sin consultarme previamente revocó el Poder General Judicial en donde era su representante y nombra a nuevos apoderados.

**Tercero:** Dentro de lo acordado procedí a cobrar mis honorarios por prestaciones, remitiendo correo electrónico con los cobros, descontando los honorarios que correspondían a la asistencia de la audiencia, en el mes de septiembre le hice requerimientos de pago en donde su respuesta fue negativa porque aseguraba que no tenía para pagar.

#### **b) Fundamentación jurídica**

El solicitante únicamente fundamenta su solicitud cautelar en el art.347 del CPCN inciso 4 que enmarca lo siguiente *“cuando un estado la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite que la persona deudora trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes comprometidos la garantía, o siempre que se justifique que, por cualquier causa, ha disminuido apreciablemente la solvencia de la persona deudora después de contraída la obligación”*.

#### **c) Apreensión de la solicitud cautelar**

El solicitante de la medida cautelar, en general no ha estructurado correctamente la solicitud cautelar, puesto que la redacción de su solicitud carece de claridad, cohesión y precisión, además, presenta una pobre fundamentación jurídica, es en este sentido que dicha solicitud no cumple con los requisitos y presupuestos cautelares exigidos por el CPCN, se debe tomar en cuenta que el CPCN art. 337 impone como regla general *“la obligación de justificar debidamente en la solicitud los presupuestos cautelares”*.

En primer lugar, en cuanto al presupuesto de la apariencia de buen derecho si bien es cierto conlleva a la acreditación sin juzgar el fondo de la probabilidad o verosimilitud del derecho de quien solicita la medida cautelar, en el caso en concreto dicha acreditación carece de fundamento y justificación, esto es en parte a la pruebas presentada por él solicita que carecen de base legal.

Por otro lado, el peligro de mora, se debe justificar debido a la inevitable dilación temporal (mora) del proceso hasta alcanzar la sentencia que conceda aquella tutela procesal reclamada por el actor. Con relación a este caso es difícil detectar la acreditación, mínima e indiciaria, de los hechos concretos en que se fundamenta la solicitud.

Es en concordancia con lo anterior que resulta evidente que la solicitud cautelar no cumple tampoco con lo establecido en el art. art.347 del CPCN inciso 4 *“cuando un estado la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite que la persona deudora trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique...”*.

Otros aspectos importantes a hacer notar es la falta de acreditación por parte del solicitante de las razones de urgencia, al no alegar los motivos del porqué la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, debido a esto tampoco cumple con lo señalado en el art. 380 CPCN. Este presupuesto busca salvaguardar la posición del demandante frente a previsibles actuaciones de los futuros demandados tendentes a asegurar la ineffectividad de la medida.

En lo particular, creemos que el solicitante puede fundamentar jurídicamente mejor su solicitud y ser más específico en cuanto a su petición, si bien cada abogado posee su propio estilo y características en cuanto la redacción, siempre se debe tomar en cuenta la claridad, el orden y la precisión.

### **13.1.2 Auto que declara la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud cautelar**

Mediante resolución de fecha cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, a las nueve y treinta de la mañana, se inadmite a trámite la solicitud de medida cautelar realizada

por la Lic. Karla Ninoska Arroyo Sánchez, que actúa en su propio nombre, en contra de la ciudadana Lilyam Romero Urroz. Por cuanto la misma no cumple con los requisitos del art. 347 CPCN.

**a) Aprehensión del auto que declara la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud cautelar**

Que, corresponde al juzgado verificar la concurrencia de los requisitos y presupuestos que deben de cumplir todas las solicitudes cautelares, y que en el presente caso el solicitante no ha cumplido con la correcta justificación de los presupuestos cautelares y lo señalado en el art. 347 CPCN, por lo que dicha solicitud debe ser inadmitida.

**13.2 Análisis del expediente número 006013-ORM4-2019-CO**

**13.2.1 Solicitud de embargo preventivo con carácter de urgencia**

A las ocho y veinticuatro de la mañana del treinta de agosto del año dos mil diecinueve, fue solicitada la medida cautelar por el Lic. Javier Ramón Alonso Álvarez, mayor de edad, soltero, abogado del domicilio de la ciudad de Managua en representación del señor Manuel Rigüero Torres, en contra del ciudadano Jacinto Rafael Mendoza Taleno.

**a) Fundamentó la solicitud, basándose en los siguientes hechos**

**Primero:** El demandante es acreedor del señor Jacinto, según escritura pública de compra venta de bien inmueble suscrito el veinte de noviembre del 2017, dicho bien tenía un valor considerable por ende el deudor dio un anticipo monetario quedando un saldo restante que se cancelaría el treinta de diciembre del año 2020, pero después de los primeros pagos el deudor eludía su responsabilidad a pesar de los reiterados requerimientos de cobros y llamadas.

**Segundo:** Se acumularon 8 meses más intereses y el deudor se negaba a llegar a un acuerdo de pago extrajudicial y el deudor teniendo posesión del inmueble tenía intenciones de vender sin haber cancelado su deuda.

**Tercero:** Según los hechos descritos se planteó que la medida cautelar idónea era el embargo e inclusive se sostuvo que la solicitud era de carácter de urgencia por la intención de vender del deudor.

#### **b) Fundamentación jurídica**

El solicitante únicamente fundamenta su solicitud cautelar en los siguientes artículos. 64, 66, 85, 90, 347 inciso 3, 342 inciso 3, 348, 372, 337, 380 375, 376 del CPCN.

#### **c) Aprehensión de la solicitud cautelar**

El solicitante de la medida cautelar, en general ha estructurado correctamente la solicitud cautelar y expone las razones por las que a su juicio peligro por la demora como presupuesto para decretar la medida solicitada, señala si la misma impide o dificulta la efectividad de la tutela judicial que solicita una eventual sentencia condenatoria y acredita el presupuesto de apariencia de buen derecho.

Por otra parte, a nuestro juicio la solicitud no cumple con otros aspectos importantes de la solicitud cautelar como el ofrecimiento de la prueba, falta orden en cuanto a la redacción, claridad, entre otros aspectos.

#### **13.2.2 Auto que declara la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud cautelar**

Mediante resolución de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, a las diez y treinta y tres minutos de la mañana, se inadmite a trámite la solicitud de medida cautelar realizada por la Lic. Javier Ramón Alonso Álvarez, en representación del señor Manuel Rigüero Torres, en contra del ciudadano Jacinto Rafael Mendoza Taleno. Por cuanto la misma no cumple con los requisitos del art. 375 CPCN.

#### **a) Aprehensión del auto que declara la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud cautelar**

En el auto el judicial expresa que la caución propuesta “corresponde a un 6 por ciento de la cantidad a embargar, la cual no están en proporción en relación con el monto de la pretensión deducida”.

El CPCN, en su artículo 376.2 no establece como parámetro para determinar la cuantía de la caución a ofrecer, a un valor porcentual de la presentación que se ejerza, sino más bien, debe considerarse que, entre mayor grado de certidumbre se deduzca del *fumus boni iuris* y *periculum in mora* impuesto y acreditado por el solicitante, menores daños se consideran al sujeto pasivo de la demanda, en consecuencia, menor debe de ser la cuantía de la caución.

Si bien, la caución ofrecida debe de ser suficiente para cubrir los eventuales daños y perjuicio que podría ocasionar con la adopción de la medida, es también es cierto que entre más verosímil y acreditable sea el derecho del solicitante menos perjuicio podrá resultar de la medida, al determinar la cuantía de la caución se debe de valorar la proporcionalidad respecto a la capacidad económica del solicitante art. 376.2 del CPCN.

Toda medida cautelar, debe cumplir con el ofrecimiento de caución, que constituye un requisito a fin de responder por los eventuales daños y perjuicios que ocasione la medida (art. 375 CPCN), de otra manera si la autoridad judicial considera que la caución ofrecida no es suficiente para responder a los eventuales perjuicios, según el art. 376.2 CPCN corresponde a dicha autoridad judicial determinar la forma y la cuantía de la caución que deberá rendir el solicitante.

En este mismo sentido, el art. 341 numeral 5 CPCN, nos expresa “correspondería a la autoridad judicial (...) 5) Determinar la forma de la caución, su cuantía y tiempo en que debe presentarse”

En virtud de las normas antes citadas, es el judicial el que le corresponde indicar la forma y cuantía de la caución ofrecida por esta representación. El establecimiento de la caución debe obedecer a los siguientes criterios:

- 1) Naturaleza y contenido de la presentación que se pretende asegurar con la medida cautelar. Es decir, el judicial debe considerar si la pretensión es una obligación de dar hacer o no hacer. En el caso de autos, la presentación que se pretenda asegurar es una obligación de dar (dineraria).



- 2) Valoración de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) del que solicita la medida cautelar. La autoridad judicial debe considerar la solidez y el fundamento del fumus boni iuris. El cual se valora en grado de verosimilitud (credibilidad), no en grado de certeza. En el caso de autos, mi mandante ha acreditado que es acreedor de plazo vencido de los sujetos procesales contra quienes se solicita la medida cautelar.
- 3) Se debe valorar la capacidad económica del solicitante de la medida cautelar. Este aspecto debe ser valorado atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.

### **13.3 Análisis del expediente número 002507-ORM4-2018-CO**

#### **13.3.1 Solicitud de embargo preventivo**

Mediante escrito presentado ante ORDICE del Complejo Judicial Central Managua; a la una de la tarde del veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho, por la licenciada María Mayorga Rayit, quien se identifica con carné de la CSJ 23150; en la cual solicitó Medida cautelar de Embargo Preventivo; en la que actuaba en calidad de representante legal del señor Oscar Domingo Medal Espinoza, quien demandaba a Haliel Antonio Benavidez García.

##### **a) Fundamentó la solicitud, basándonos en los siguientes hechos**

El señor Oscar Domingo Medal Espinoza, en calidad de gerente general de servicio UNO Batahola ubicada en el Km 4 carretera sur, manifestó que solicita la medida cautelar de embargo preventivo de bienes del Sr. Haliel Antonio Benavidez García; hasta por la cantidad de novecientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y ocho córdobas con cincuenta y siete centavo de córdobas (C\$ 925,498.57) que es en deber a plazo vencido en concepto de crédito de gasolina.

##### **b) Fundamentación jurídica**

El solicitante únicamente fundamenta su solicitud cautelar en el art. 347 del CPCN inciso 4 que enmarca lo siguiente *“cuando un estado la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite que la persona deudora trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique que, por cualquier*

*causa, ha disminuido apreciablemente la solvencia de la persona deudora después de contraída la obligación”.*

### **c) Aprehensión de la solicitud cautelar**

El solicitante de la medida cautelar, en general no ha estructurado correctamente la solicitud cautelar, puesto que la redacción de su solicitud carece de claridad, cohesión, elocuencia, no es circunstanciada y tampoco precisa.

Además, presenta una pobre fundamentación jurídica, es en este sentido que dicha solicitud no cumple con los requisitos y presupuestos cautelares exigidos por el CPCN, se debe tomar en cuenta que art. 337 del CPCN impone como regla general “la obligación de justificar debidamente en la solicitud los presupuestos cautelares”.

En primer lugar, en cuanto al presupuesto de la apariencia de buen derecho el solicitante probablemente haya acreditado este presupuesto, con las pruebas documentales que adjunto a su escrito; tales como la carta donde el señor Haliel Antonio Benavidez García solicitaba el crédito a Oscar Domingo Meda Espinoza propietario de la GASOLINERA UNO- servicios; así como con facturas, que no había sido canceladas, no obstante en el caso en concreto dicha acreditación carece de fundamento y justificación, esto se debe en parte a las pruebas presentadas sin ningún fundamento jurídico o base legal.

Por otro lado, el peligro de la demora procesal, se debe justificar debido a la inevitable dilación temporal (mora) del proceso hasta alcanzar la sentencia que conceda aquella tutela procesal reclamada por el actor. En este caso es difícil detectar la acreditación, mínima e indiciaria, de los hechos concretos en que se fundamenta la solicitud.

Es en concordancia con lo anterior, que resulta evidente que la solicitud cautelar no cumple tampoco con lo establecido en el art. art.347 del CPCN inciso 4 *“cuando un estado la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite que la persona deudora trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique...”*.

Otros de los aspectos importantes a hacer notar, es que el solicitante tampoco acredita las razones de urgencia o alega que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, debido a esto tampoco cumple con lo señalado en el art. 380 CPCN. Este requisito busca salvaguardar la posición del demandante frente a previsibles actuaciones de los futuros demandados tendientes a asegurar la ineffectividad de la medida.

En lo particular, creemos que el solicitante pudo fundamentar jurídicamente mejor su solicitud y ser más específico en cuanto a su petición, independientemente del estilo y característica presentadas por cada abogado en la manera de redacción, siempre se debe tomar en cuenta la claridad, el orden y la precisión.

### **13.3.2 Auto que declara la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud cautelar**

Mediante resolución (auto) dictado por la Jueza Primero Distrito Civil Oral de Managua en fecha veinticinco de mayo del dos mil dieciocho a las nueve y dieciséis minutos de la mañana, se inadmite a trámite la solicitud de medida cautelar realizada por la Lic. Lidia Mari Mayorga Raytt, que actuaba como apoderada general Judicial del Sr. Oscar Domingo Medal Espinoza, Por cuanto la misma no cumple con los requisitos del art. 347 CPCN.

#### **a) Aprehensión del auto que declara la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud cautelar**

Que, corresponde al juzgado verificar la concurrencia de los requisitos y presupuestos que deben de cumplir todas las solicitudes cautelares, y que en el presente caso el solicitante no ha cumplido con la correcta justificación de los presupuestos cautelares y lo señalado en el art. 347 CPCN, por lo que dicha solicitud debe ser inadmitida.

### **Conclusiones del análisis de expedientes**

Luego de haber analizado los casos a los cuales nos fue posible tener acceso, se puede afirmar que los abogados solicitantes de embargo preventivo ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019, presentan una serie de dificultades al momento de realizar la acreditación de los

presupuestos necesarios para la obtener la tutela cautelar del embargo preventivo de bienes, partiendo desde la descripción de los elementos fácticos, careciendo de un orden entendible en las ideas, aunque cada abogado tendrá un estilo muy propio de redacción hay elementos mínimos a tomar en cuenta, como la secuencia lógica y la separación de las ideas, además de la claridad y coherencia.

A raíz de este análisis, pudimos comprobar las debilidades por parte de los abogados solicitante, en cuanto la falta de comprensión de los presupuestos cautelares y la forma en cómo deben ser acreditados y fundamentados en la solicitud.

Uno de los principales problemas que señalaba el judicial, en todas las solicitudes cautelares analizadas, fue la falta de elementos probatorios fundamentales para la acreditación de los presupuestos cautelares, es en esta forma que el CPCN, se diferencias de su predecesor el Pr, al dejar en claro la necesidad de fundamentar la solicitud cautelar.

#### **14. Análisis y discusión de los resultados**

A partir de los resultados obtenidos, a través de la entrevista a profundidad realizada tanto a abogados como a jueces de la ciudad de Managua y del análisis de expedientes de casos seleccionados del Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019, se obtuvieron los siguientes resultados:

##### **Objetivo específico número uno:**

- Describir la regulación de las medidas cautelares y el embargo preventivo de bienes en el CPCN.

Para dar respuesta a nuestro primer objetivo, el método utilizado fue la revisión documental, en donde del material bibliográfico analizado sirvió para describir los diferentes aspectos fundamentales del proceso cautelar y en particular del embargo preventivo establecido en el CPCN, además, se abordó: definición, naturaleza jurídica, características, fundamento procesal, personas legitimadas, plazo y forma de

interposición de la solicitud cautelar, condiciones de admisibilidad y tramitación entre otros aspectos.

Es importante resaltar, que una de las principales fuentes de información para el desarrollo de la presente investigación, fue la entrevista a profundidad realizada en especial a la Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza asesora de la sala civil de la CSJ, al Juez Décimo de Distrito Civil de Managua Dr. Roger Salvador Alfaro Cortez y la Dra. Adriana María Cristina Huete, Jueza del Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua.

Ellos en sus opiniones expresaban, que actualmente la Ley No.902, regula realmente lo que es un proceso cautelar, donde hay partes, sujetos, figuras jurídicas y etapas procesales, convirtiéndose en comparación a su predecesor una ley garantista, asegurando su efectividad en el embargo preventivo, proporcionándoles de este modo a las partes seguridad jurídica y una tutela judicial efectiva. Las guías de entrevista a profundidad utilizadas se encuentran en los anexos.

#### **Objetivo específico número dos:**

- Analizar la acreditación y valoración de los presupuestos cautelares regulados en el CPCN, en las solicitudes de embargo preventivo de bienes a través del uso de doctrina, leyes y códigos procesales civiles de otros países.

En cuanto a este objetivo, fue abordado de manera profunda en la presente investigación, se realizó un análisis partiendo de la definición de cada uno de los presupuestos cautelares, su acreditación y valoración, además de su regulación en el CPCN.

De acuerdo con la opinión de los entrevistados, la mejor forma de acreditar los presupuestos cautelares es aportando pruebas, datos, argumentos y justificantes documentales que conduzcan al juicio de provisionalidad tan deseado. La doctrina también señala que, en el caso de no ser aportadas pruebas documentales del derecho o interés litigioso, este presupuesto puede ser justificado por el mero relato en que se justifique la demanda, claro está, que este relato debe ser racional y coherente.

Con respecto a acreditación de los presupuestos cautelares, en la solicitud de embargo preventivo de bienes es necesario que el solicitante "justifique" los presupuestos a través de elementos probatorios, estos pueden ser mínimos e indiciarios, de los hechos en que se concretan, en cuanto la apariencia de buen derecho este queda mayormente reconocida en un documento más o menos fiable. En lo referente, al peligro de la demora procesal debe justificarse en cualquier caso, un peligro concreto que podrían producirse durante la pendency del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas.

Por otra parte, en la valoración judicial para admitir o rechazar una solicitud de embargo preventivo de bienes el juez obligatoriamente debe evaluar la concurrencia de los presupuestos establecidos en el art. 337 del CPCN, tanto para su concesión como para su ejecución.

Por lo tanto, la valoración judicial sobre los términos del litigio y sobre el fundamento de la pretensión esgrimida por el solicitante de la medida cautelar no puede ser equiparado ni mucho menos al enjuiciamiento. Al juez o tribunal, no le es exigible, que alcance una certeza absoluta, y total acerca de la existencia y fundamento del derecho invocado por lo que se impone la necesidad de fundamentar la resolución judicial sobre las medidas cautelares en atención, a una simple apariencia o probabilidad sobre el mismo.

#### **Objetivo específico número tres:**

- Comprobar el cumplimiento de las disposiciones prescritas en el art.337 del CPCN en las solicitudes de embargo preventivo de bienes ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, a partir de tres expedientes seleccionados dentro de los periodos 2018-2019.

En relación con el tercer objetivo, se utilizó el análisis de expediente y entrevista a profundidad como instrumentos para comprobar si las solicitudes de embargo preventivo de bienes presentadas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil de Managua durante el periodo 2018- 2019, cumplen con las disposiciones prescritas en el art. 337 del CPCN.

Por consiguiente, es importante señalar que se analizaron tres expedientes en los cuales únicamente nos enfocamos exclusivamente en la solicitud cautelar y el auto de admisión o inadmisión, a través de esto se pudo deducir principalmente que existe el desconocimiento en cuanto la forma requerida para acreditar los presupuestos cautelares, los escritos analizados presentaron muchas debilidades con relación a la redacción y la fundamentación jurídica, asimismo es mínimo el orden, coherencia y cohesión presentes en la solicitud. Esto nos indica el desinterés por parte de los abogados en actualizar su formación en concordancia con la nueva ley vigente.

De la entrevista a profundidad aplicada a los expertos, se obtuvo como resultado el apreciar de primera mano, las muchas dificultades existentes en la práctica al momento de cumplir con las disposiciones prescritas en el art. 337 del CPCN, estas dificultades se debe a muchos factores entre los más destacados se encuentran los siguientes: la formación arraigada del Pr, que viene siendo un resabio, es decir el creer que de manera pura y simple aún pueden solicitar un embargo preventivo, la falta de dominio de los presupuestos de las medidas cautelares.

Otro elemento de gran dificultad para los abogados al momento de acreditar la solicitud, es el carácter de urgencia en el caso que lo sea, presenta una gran complejidad porque se convierte en un requisito para su ejecución.

A esto se le puede sumar, el notorio desinterés por actualizar su formación con la nueva ley vigente, en el caso de los abogados es más evidente que en los judiciales. Ignorar lo que explícitamente exige la norma no es justificación para su incumplimiento.

Mediante análisis de expedientes y entrevistas a profundidad, se pudo determinar que los abogados solicitantes, aparte de su mal estilo de redacción, el cual para los judiciales carece de verosimilitud y coherencia; pasan por alto la debida aportación de medios de pruebas para dar por justificados y acreditados los presupuestos legalmente exigidos.

## **CAPÍTULO V**

### **CONCLUSIONES**

Una vez analizado y obtenido los resultados del presente estudio se concluyó lo siguiente:

1. En el nuevo CPCN, las medidas cautelares poseen una regulación diferente a la que presentaba el Código de Procedimiento Civil (Pr), empezando porque en él CPCN se establece un régimen unitario y bastante completo de la competencia y de los procedimientos, en cuanto al embargo preventivo este se encuentra regulado en los artículos. 336 al 389 del CPCN, dicha medida cautelar posee una regulación muy completa.
2. El art.337 del CPCN, establece como únicos presupuestos de las medida cautelares la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora procesal, siguiendo esta directriz la doctrina conceptualiza a la apariencia de buen derecho como un juicio de verosimilitud o de probabilidad, provisional e indiciario, que se encuentra situado entre la certeza de obtener la pretensión solicitada y la incertidumbre basada al inicio del proceso.
3. La manera más precisa que el solicitante de la medida cautelar, acredite la concurrencia del *fumus boni iuris* es aportando elementos bastos que permitan de entrada comprobar la existencia verosímil de ese derecho, y acreditar esto último en el sentido de aportar pruebas proporcionadas. Por lo general, este presupuesto suele quedar reconocido, mayoritariamente en la existencia de un documento más o menos fiable en el que conste el derecho pretendido por el solicitante.
4. En cuanto a la valoración del *fumus boni iuris*, al juez no le es exigible que alcance una certeza absoluta, y total acerca de la existencia y fundamento del derecho invocado por lo que se impone la necesidad de fundamentar la resolución judicial sobre las medidas cautelares en atención a una simple apariencia o probabilidad sobre el mismo, toda base que la obtención de la certeza (que se obtiene con contradicción más actividad probatoria).
5. El peligro de la demora procesal, es el hecho mismo que se debe describir desde que se inicia una demanda o antes de que el proceso nazca, que pueda impedir el



cumplimiento de la tutela judicial efectiva siendo que no basta con llegar a una sentencia, sino que esta se materialice.

6. Para la acreditación del peligro de la demora procesal, el solicitante debe justificar en cualquier caso, que podrían producirse durante la pendency del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. En cuanto a la prueba ofrecida no necesariamente tiene que ser plena, bastando que sea de la suficiente solidez para sustentar la adopción de la medida cautelar.

Por lo tanto, es necesario acreditar la existencia de un riesgo que amenace la efectividad del proceso y la sentencia, pero no un temor abstracto a que el eventual fallo estimatorio pueda en su día resulta ineficaz por circunstancias causales o derivadas del transcurso del tiempo, sino un peligro concreto por las circunstancias tanto objetivas como subjetivas que rodean la situación material controvertida.

7. En lo referente a la valoración del peligro de la demora procesal, en las solicitudes cautelares el juez no deba exigir la existencia de un peligro concreto de insolvencia, que sería de hecho difícil o imposible de acreditar en general, sino un cierto riesgo futuro y meramente previsible, el juez tiene que tomar en cuenta tanto la finalidad que persigue la adopción de la medida cautelar, como la apreciación de ese fin aseguratorio.

8. Se comprobó que las solicitudes de embargo preventivo de bienes, presentadas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil de Managua durante el periodo 2018-2019, en su mayor parte no cumplen con las disposiciones prescritas en el art. 337 del CPCN, en dichas solicitudes se refleja que los abogados no poseen una técnica precisa para acreditar los presupuestos cautelares, no plantean una buena teoría del caso, no tienen un dominio vasto del proceso civil, así como tampoco tienen conocimiento del derecho civil sustantivo.

Asimismo, los abogados solicitantes arrastran los preceptos y prácticas del código de procedimiento civil (Pr), todos estos elementos concatenados hacen que no se cumplan con las disposiciones antes mencionadas, a esto también se le debe agregar, el notorio desinterés por actualizar su formación en concordancia con la nueva ley vigente, en el caso de los abogados es más evidente que en los

judiciales, otro elemento de gran dificultad al momento de acreditar la solicitud es el carácter de urgencia en el caso que lo sea, pues presenta una gran complejidad porque se convierte en un requisito para su ejecución.

9. Al momento de la valoración de los presupuestos cautelares, los judiciales comparten como criterio que el solicitante de la tutela cautelar necesariamente debe presentar pruebas proporcionadas; de igual forma, se determinó que no existe uniformidad de criterios en cuanto la forma correcta de acreditación y valoración de los presupuestos establecidos en el art. 337 del CPCN, por cuanto cada uno de los judiciales realiza la valoración según sus propios criterios y conocimientos sobre la materia.

## RECOMENDACIONES

Para garantizar la utilidad práctica y efectividad de la acreditación y valoración de los presupuestos cautelares, en los procesos cautelares se recomienda:

- Los abogados y jueces deben actualizarse en forma periódica con respecto a lo establecido por el CPCN y las diferentes doctrinas, en cuanto la forma de acreditación y valoración de los presupuestos cautelares.
- Es necesario la difusión de todo lo relativo a los presupuestos cautelares para la correcta acreditación y valoración de las solicitudes presentadas ante los órganos competentes, de acuerdo a la realidad imperante y como resultado su aplicación sea más eficaz y práctica, considerando también hacia donde se dirige la protección o el aseguramiento y cumplir así justamente con la finalidad para la cual fueron creadas.
- Que las universidades y centros de educación superior promuevan cursos de formación y actualización en el tema de los presupuestos cautelares y en general del proceso cautelar.
- Las medidas cautelares casi siempre son de urgencia, por lo cual, es necesario crear un mecanismo más práctico y efectivo de revisión de los presupuestos de su otorgamiento, para que el resultado sea la satisfacción de dicha pretensión.
- Es importante que en el plano nacional, exista la unificación de los criterios de los jueces, con relación a los presupuestos para dictar las providencias cautelares atendiendo a su clasificación, en vista de que la razón de ser de estas normas es facilitar soluciones posibles e inmediatas, según el caso, para no frustrar el derecho.

## LISTA DE REFERENCIAS

- Acevedo, T. (s. f.). Medida cautelares proceso civil chileno. Scribd. Recuperado de diciembre de 2020, de <https://es.scribd.com/document/351226533/Medida-Cautelares-Proceso-Civil-Chileno>.
- Botos, M, R. (2001). Medidas cautelares. Buenos Aires: Editorial Universidad.
- Barahona, M. (2016). Medidas cautelares en el ante proyecto del Código Procesal. Scribd. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/310974999/Medidas-Cautelares-Marco-Tulio-Barahona>.
- Carnelutti, F. (1959). Instituciones del proceso civil. Buenos Aires: Ejea. Traducción Santiago Sentís Melendo. Tomo I.
- Calamandrei, P. (1997). Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Edit. "El Foro", Buenos Aires.
- Chiovenda G. "Instituciones de Derecho Procesal Civil" Vol. II, Edit. Revista de Derecho privado, Madrid, 1940, Pérez Ríos, Carlos Antonio: Tesis: "El remate y la adjudicación como acto de exportación jurisdiccional".
- Chiong, Flavio. (2006). Los principios procesales en el sistema oral civil. I jornada de derecho procesal civil Dr. Roberto. Recuperada de <https://studylib.es/doc/6580999/i-jornada-de-derecho-procesal-civil-%E2%80%99Cdr.-roberto>.
- Carnelutti, F. (1994). Sistema de derecho procesal civil, Vol. I, Uteha. Buenos Aires: kk.
- Constitución Política de la República de Nicaragua con sus reformas incorporadas, aprobada el 10 de marzo de 2014. Publicada en la Gaceta Diario Oficial número 32 del 18 de febrero del 2014.
- Código Procesal Civil Ley N°. 902, Aprobado el 4 de junio de 2015, Publicado en La Gaceta No. 191 del 9 de octubre de 2015. Nicaragua.

Correa P. Ruth S; Suarez H. Daniel y Bermúdez M. Martin, (1996) El Secuestro de la posesión de los vehículos automotores. Recuperada de. file:///C:/Users/marximex/Downloads/235-1042-1-PB.pdf.

Di Dorio, A. (1985). Temas de Derecho Procesal. Buenos Aires: Edit. De Palma.

Diego Díez, L. A. (2008). Las medidas cautelares en el nuevo Código Procesal Civil Hondureño. Tegucigalpa Santa Rosa de Copán Recuperado: <https://mx.123dok.com/document/8yd80o1q-las-medidas-cautelares-en-el-nuevo-codigo-procesal-civil-hondureno-consultor-internacional-luis-alfredo-de-diego-diez.html>.

Escobar, I. (2016). Manual Do Procesal Civil Estudio de Ley 902. huum.info. Recuperado de: <https://huum.info/doc-viewer>

Falcón, E. (2006). Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo IV, “Sistemas Cautelares”, Editorial Rubinzal-Culzoni.

Garberí Llobregat J. (2012). Las medidas cautelares en la ley de enjuiciamiento civil – doctrina, jurisprudencia y formularios (edición N° 3), España: Editorial Thomson Reuters.

Guerra, J. (2016). Sistema de protección cautelar. Editora Instituto Pacifico SAC. Biblioteca Nacional del Perú. Hinostroza.

Roberto Hernández - Sampieri. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill Education.

Ibarra, C. (2009). Medidas cautelares en el proceso de derechos de autor (tesis doctoral). Universidad de salamanca, Salamanca, España.

Ibarra Padilla M. R (2015) Medidas cautelares en el proceso civil. UNAN – León.

Ledesma Narváez, Marianella. (2008). Comentarios al código procesal civil, (Exp. N° 26578-98, Sala de Procesos Ejecutivos, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 509-51), Tomo III, Ed. Gaceta Jurídica.

Monroy, G. (1987). Temas de derecho procesal civil. Lima-Perú: Ediciones librería Studium.

Montero Aroca J. (2015). derecho jurisdiccional ii proceso civil (edición N° 23), Valencia España: Editorial Tirant Lo Blanche.

Ortells Ramos, Manuel y Calderón Cuadrado, María Pía. (1996). La tutela judicial cautelar en el Derecho Español. Granada: Editorial Comares.

Palacio, Lino E. (1998).Manual de derecho procesal civil, 14° ed, Buenos Aires, Abeledo Perrot.

Peláez, B. Mariano. (2008). Medidas cautelares en el proceso civil. Editora Jurídica Grijley E.I.R.L. Biblioteca Nacional del Perú.

Ramírez, A. (2011). Metodología de la investigación científica. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <http://lawiuris.com/2008/11/20/la-interdiccio-civil/>.

Ramos, M. (2013). Las medidas cautelares. En Las medidas cautelares en el proceso civil español. España: edit. Atelier.

Ragona, A. (2000). Concepto estructural y funcional de la tutela anticipatoria. Proceso Cautelar. España. Revista de Derecho Procesal Dirigida a Iberoamérica.

Ramos, F. (2016). Las medidas cautelares civiles. Análisis jurídico-económico, Barcelona España, Atelier Libros Jurídicos.

Rebollo Puig. (1993). Medidas provisionales en el procedimiento administrativo. La protección jurídica del ciudadano (Procedimiento administrativo y garantía constitucional). Civitas.

Tercero López, F. S., & Blanco Guido, E. (2016). Medidas cautelares en el nuevo código procesal civil de Nicaragua

Taramona, J. (1996). Procesos de ejecución y procesos cautelares teórico – práctico. Lima: Editorial Huallaga.

Vallefín, C. (2002). Protección cautelar frente al Estado. Buenos aires. Edit Lexis Nexis Abeledo Perrot. Si

Wolter Skluwer. (s. f.). Medidas cautelares en derecho procesal. wolters kluwer. Recuperado 4 de diciembre de 2020, de <https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAA KE>.

Wolter Skluwer. (s. f.). Periculum in mora. Wolter Skluwer. Recuperado 12-02-08, de [https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAA AEAMtMSbF1jTAAAUNjUzNDtbLUouLM\\_DxblwMDCwNzAwuQQGZapUt-](https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAA AEAMtMSbF1jTAAAUNjUzNDtbLUouLM_DxblwMDCwNzAwuQQGZapUt-)

# **ANEXOS**



## ANEXO 1 ENTREVISTAS APLICADAS

### GUÍA DE ENTREVISTA

**Nombre del entrevistado:** Msc. Alioska Saudara Álvarez Soza, asesora de la sala civil de la CSJ

**Fecha de entrevista:** 21-01-21

**Hora:** 10:00 a.m.

**Vía de la entrevista:** llamada telefónica por Whatsapp.

Estimada entrevistada somos estudiantes del último año de la carrera de Derecho de la UNAN-Managua. Estamos realizando un estudio investigativo que tiene como objetivo general *“Analizar los presupuestos cautelares establecidos en el Código Procesal Civil Nicaragüense, para valorar el cumplimiento de éstos en las solicitudes de embargos preventivos interpuestas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019”*, para ello requerimos que nos suministre información, la cual utilizaremos para nuestro estudio. Gracias por su apoyo.

#### **Cuestionario:**

**1. ¿Considera usted qué el CPCN brinda una buena regulación a la tutela cautelar y en particular al embargo preventivo? ¿por qué?**

**R:** En el procedimiento civil (Pr), realmente no había una regulación como tal de lo que era el proceso cautelar, lejos de eso solamente se decía que las medidas cautelares cumplían una función garantista, pero sin tener que cumplir con presupuesto, una figura ampliamente utilizada era alegar “temor fundado” y automáticamente sin mayores preámbulos se trababa la medida de embargo.

Por ende, partiendo del derecho que tenemos a una seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva con la ley 902 se regula realmente lo que es un proceso cautelar, donde hay partes, sujetos, figuras jurídicas y etapas procesales, convirtiéndose en comparación a su predecesor una ley garantista asegurando su efectividad en el embargo preventivo.

## **2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del embargo preventivo?**

**R:** El embargo preventivo, viene a ser desde un aspecto práctico la medida cautelar por excelencia, el Art. 347 del CPCN establece que el embargo se utiliza para garantizar deudas u otro tipo de obligaciones siempre y cuando sean convertibles en dinero (énfasis en cosas fungibles), por ende este viene a ser una medida por la cual se pretende garantizar las resultas del proceso siempre y cuando el objeto como tal de ese futuro proceso sea su liquidez de manera directa o el cumplimiento genérico.

## **3. Según el art.337 del CPCN son presupuestos cautelares el peligro por la demora y la apariencia de buen derecho, para usted ¿cuál es su importancia y cómo conceptualizar cada uno de estos presupuestos?**

**R:** La apariencia de buen derecho, es la acreditación o noción de que efectivamente hay temor fundado de que una obligación pecuniaria no se cumpla sin entrar a debate con el judicial, su complejidad recae cuando no se tiene un título cierto que demuestre dicha obligación un ejemplo son los préstamos en zonas rurales.

El peligro de la demora, es el hecho mismo que se debe describir desde que se inicia una demanda o antes de que proceso nazca, que pueda impedir con el cumplimiento de la tutela judicial efectiva siendo que no basta con llegar a una sentencia, sino que esta se materialice

Además, por el simple transcurso de un proceso ya existe peligro de la demora y más si el deudor ha realizado acciones que demuestren su intención de evadir la responsabilidad. De entre los dos presupuestos procesales el más complejo de demostrar es la apariencia de buen derecho y más en la circunstancia antes descrita.

## **4. ¿Cuáles son los presupuestos cautelares en los que se produce el embargo preventivo y como deben de ser acreditados y valorados?**

**R:** Los presupuestos del embargo preventivo, son los mismos presupuestos que deben ser tomados en cuenta en todas las medidas cautelares sin exención, en cuanto la apariencia de buen derecho la mejor forma de acreditarla es aportando pruebas, datos, argumentos y justificantes documentales que conduzcan al juicio de provisionalidad tan deseado. La doctrina también señala que, en el caso de no ser aportadas pruebas

documentales del derecho o interés litigioso, este presupuesto puede ser justificado por el mero relato en que se justifique la demanda, claro está, que este relato debe ser racional y coherente.

En el caso de la acreditación del peligro por la demora procesal, en el embargo preventivo, no es suficiente que el solicitante alegue el temor de que el demandado pueda enajenar sus bienes deviniendo insolvente, sino que es preciso aportar prueba que permita demostrar que sujeto pasivo de la medida solicitada desee quedar en situación de insolvencia.

El judicial tiene que procurar que el auto mediante el cual se adopte la decisión que corresponda contenga una motivación suficiente sobre los presupuestos para su aplicación especialmente el *fumus bonis juris* y el *periculum in mora*, aunque en últimas la cautela pedida haya sido denegada. Si falta la motivación o es insuficiente y se produce la denegación de la medida solicitada, dado precisamente su carácter cautelar, la pregunta que surge es si la urgencia que la reviste hace procedente reclamar su decreto a través de la vía de amparo de los derechos fundamentales.

#### **5. Según su opinión ¿la caución es un requisito o un presupuesto cautelar? ¿Por qué?**

**R:** Los presupuestos de las medidas cautelares, están explícitamente regulados en el 337 del CPCN sintetizando la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, no obstante, al momento de que se solicita una medida se tiene que ofrecer una caución, la naturaleza jurídica de la caución es la inmediatez para resarcir los posibles daños que se puedan producir en virtud de la ejecución de la medida.

Por ende, al momento como tal de la solicitud no es un presupuesto porque en ese momento ni siquiera se está rindiendo, lo que se hace es presentar la medida y enfatizó en el artículo 337 CPCN, no obstante esa circunstancia una vez que la medida cautelar es admitida por la autoridad jurisdiccional allí sí que la caución para fines de ejecución se convierte en un presupuesto porque la autoridad judicial no puede proceder implementar la medida mientras no se rinda, el art. 379 del CPCN dice que al momento que se admite la solicitud ordena al solicitante que brinde la caución es decir para fines

de traba, su cambio de figura es eventual en las etapas del proceso. Pero afirmó que no es un presupuesto, es un requisito por su característica en la ejecución.

**6. Según su opinión ¿qué criterios debería de tomar el juez como referencia a la hora de cuantificar la caución en la solicitud de embargo preventivo?**

**R:** La discusión sobre su cuantificación es un tema que siempre será debatible por la doctrina, sin embargo un criterio bastante acercado a mi parecer es el de un docente que enfatizó el artículo 376 del CPCN, que en su segundo párrafo te dice los dos elementos en los que autoridad debe aceptar la medida, estos son la proporcionalidad en relación al monto de la pretensión y la capacidad proporcional de la parte solicitante, regla porcentual sobre el total de la pretensión como tal no existe, queda a criterio de la autoridad jurisdiccional decir cuánto va hacer la caución, dicha discrecionalidad reitero no tiene como tal una regla cuantitativa.

No es lo mismo, que una persona acaudalada o figura pública solicite una medida cautelar a que un trabajador tradicional lo haga. Se pueda afirmar que no existe un sistema de aranceles cautelares.

El tema discrecionalidad es un elemento demasiado subjetivo que puede prestarse a malas interpretaciones, convirtiéndose en un criterio válido o para analizar y estudiar.

**7. ¿Cree usted que el CPCN brinda un buen tratamiento procesal a los presupuestos cautelares? ¿Por qué?**

**R:** De manera general, considero que sí, por ser una ley garantista, partiendo de la premisa de que ahora si existen presupuestos como tal para las solicitudes cautelares y el procedimiento que conlleva.

**8. ¿Al momento de solicitar embargo preventivo que se le dificulta más a los abogados solicitantes?**

**R:** El error más común para muchos abogados se traduce en la formación arraigada del Pr, que viene siendo un resabio es decir el creer que de manera pura y simple aún pueden solicitar un embargo preventivo, la falta de dominio de los presupuestos de las medidas cautelares hace que al momento de solicitar carezcan de mecanismos para

acreditarlos, si no manejan su existencia menos los harán con el hecho de que deben ser probados ante la autoridad judicial para ejecutar la medida cautelar.

Otro elemento de gran dificultad para los abogados al momento de acreditar la solicitud, es el carácter de urgencia en el caso que lo sea, presenta una gran complejidad porque se convierte en un requisito para su ejecución. Por otra parte, es evidente el notorio desinterés por actualizar su formación con la nueva ley vigente en el caso de los abogados es más evidente que en los judiciales, Ignorar lo que explícitamente exige la norma no es justificación para su incumplimiento.

**9. ¿Cuáles serían las consecuencias de admitir una solicitud de embargo preventivo que no presente la acreditación correcta de los presupuestos cautelares o de inadmitirla cuando se acrediten correctamente?**

**R:** Dos cosas principalmente pueden ocurrir, la primera es que al momento de convocar a la audiencia en el caso de medidas no urgentes la parte citada como tiene todo el derecho a la defensa va a invalidar por completo la medida cautelar resultando en una inadmisión atacando el cumplimiento de los presupuestos. Si la medida hubiera sido trabada su efecto sería el levantamiento de la misma, si se trata de medidas cautelares urgentes. No tiene cabida presentar una solicitud cautelar o admitirla sin existir un justificante según ley.

**Conclusiones de la entrevista**

Atraves de la presente entrevista, se logró evidenciar los problemas que se han teorizado en el presente estudio monográfico sobre los presupuestos cautelares señalados en el CPCN, partiendo de la acreditación de los abogados sobre estos y la valoración de las solicitudes cautelares por parte de los judiciales, habiéndose destacado en primer lugar aspectos aclaratorios sobre la naturaleza jurídica del embargo preventivo, sosteniendo la postura de ser una medida garantista de deudas pecuniarias persiguiendo como fin su liquidez.

Los presupuestos cautelares, están claramente señalados en el art. 337 del CPCN siendo estos la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora procesal, en un sentido práctico se afirmó que de dichos presupuestos el más complejo de acreditar es

la apariencia de buen derecho por encima del peligro de la demora, ya que por el simple transcurso del proceso hay peligro de la demora, en cambio la apariencia de buen derecho es justificar el derecho en sí y probarlo de manera material, esta complejidad se evidencia mayormente cuando se intenta un embargo preventivo sin existir un título como tal.

En segundo lugar, se aclaró la gran duda sobre si la caución es un presupuesto cautelar por sus características pese a no estar señalado explícitamente por el CPCN, afirmando que dicho elemento no es un presupuesto y que dicha confusión esta relaciona al hecho de que para la ejecución de la medida cautelar este se convierte en un requisito, porque su propósito es responder por los eventuales daños y perjuicios.

Por último, se realizaron las principales dificultades que tienen los abogados en la práctica al momento de acreditar los presupuestos cautelares, considerando como elemento principal el resabio del Pr, que impide exista un dominio de los presupuestos de las medidas cautelares, por ende, de los mecanismos para acreditarlos, muchos abogados no son conscientes que la demostración de los presupuestos está emparejada con elementos probatorios que dotan de certeza jurídica la solicitud.

Otro hincapié general en la práctica, en cuanto la acreditación de los presupuestos cautelares, es su demostración cuando no existe título cierto, siendo aún más compleja su sostenibilidad y más aún en el proceso cautelar urgentes por los efectos jurídicos que éste conlleva.

Los problemas antes mencionados, son subsanables en nuestro sistema jurídico partiendo de la premisa de que el CPCN ley 902, es una ley garantista, pero mejorar su eficacia requiere seriamente del interés de los abogados por actualizarse al nuevo sistema y también por parte de los judiciales que de cierta manera instruyen en la práctica.

## GUÍA DE ENTREVISTA

**Nombre del entrevistado:** Dr. Roger Salvador Alfaro Cortez

**Fecha de entrevista:** 23-01-2021

**Hora:** 9:30 a.m.

**Vía de la entrevista:** personal

Estimado entrevistado somos estudiantes del último año de la carrera de Derecho de la UNAN-Managua. Estamos realizando un estudio investigativo que tiene como objetivo general *“Analizar los presupuestos cautelares establecidos en el Código Procesal Civil Nicaragüense, para valorar el cumplimiento de éstos en las solicitudes de embargos preventivos interpuestas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019”*, para ello requerimos que nos suministre información, la cual utilizaremos para nuestro estudio. Gracias por su apoyo.

### **Cuestionario**

#### **1. ¿Qué son las medidas cautelares y cuál es su importancia?**

**R:** Las medidas cautelares, son aquellas que pueden ordenar los jueces con el objetivo de evitar todo riesgo que pudiera impedir el desarrollo adecuado del proceso, asimismo se encarga de garantizar las resultas del mismo, garantiza la efectividad de la decisión jurídica mediante conservación, prevención o aseguramiento de los derecho e intereses.

#### **2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del embargo preventivo?**

**R:** Es la medida cautelar por excelencia, es para garantizar deudas u cualquier otra obligación, garantiza las resultas del proceso.

#### **3. ¿Considera usted que el CPCN brinda una buena regulación a la tutela cautelar y en particular al embargo preventivo? ¿por qué?**

**R:** Sí, de hecho, regula correctamente de manera general esta figura jurídica, toda va más allá de que si las solicitan bien, establece como regla general y una excepcional

que es la medida cautelar de urgencia; que a mi criterio debería de ser al revés que se debería de tramitar la normal con audiencia y la urgente sin audiencia a como se hace en los demás sistemas jurídicos iberoamericanos que es más expedito; sin embargo, en el de nosotros regula los tipos de medidas y la forma de ejecutarla, aunque tiene un vacío en cuanto a los títulos desvalorizados.

**4. Según el art.337 del CPCN son presupuestos cautelares el peligro por la demora y la apariencia de buen derecho, para usted ¿cuál es su importancia y cómo conceptualizaría cada uno de estos presupuestos?**

**R:** Estamos rompiendo los esquemas del Pr, sobre los abusos que se cometían, siendo que en este solo era necesario que el solicitante dijera que tenía temor de peligro a la demora con la duración del proceso y se autorizaba la tutela cautelar, con el CPCN se deben de acreditar más razones y brindar más elementos a la hora de solicitar una medida cautelar.

**5. ¿Cuáles son los presupuestos cautelares en los que se produce el embargo preventivo y cómo deben de ser acreditados y valorados dichos presupuestos?**

**R:** Son los mismos presupuestos cautelares, el peligro a la demora y la apariencia de buen derecho, se deben de acreditar y valorar a como ya lo establece la doctrina. El solicitante debe de tener bien clara y precisada una buena teoría del caso, determinar bien la situación jurídica cautelable; esto en cuanto si la pretensión está de acorde a solicitar la medida cautelar de embargo preventivo, dar un juicio de probabilidades que se tiene el derecho a través de pruebas, que existe una obligación y dar razones suficientes que realmente existe un verdadero peligro a la demora, en caso de carecer de prueba solicitar una diligencia preparatoria.

**6. Según su opinión ¿la caución es un requisito o un presupuesto cautelar? ¿Por qué?**

**R:** Es un requisito más que un presupuesto, porque puede ser exonerado, en cambio los presupuestos se deben de acreditar sí o sí, se debe de demostrar una obligación,



en cuanto a brindar caución se debe de analizar caso a caso, si bien se puede inadmitir por no brindar caución, no obstante, se puede admitir no haciéndolo. El solicitante debe brindar un fondo para posibles daños y perjuicios eventuales que puedan surtir a través de una medida cautelar.

Crítica: si el demandado se opone, debe de brindar caución.

**7. ¿Qué criterios toma como referencia a la hora de cuantificar la caución en la solicitud de embargo preventivo?**

R: No existe un criterio uniforme, no hay una tabla que determine el monto específico, es caso a caso que el judicial debe de valorar y determinar cuánto se va a brindar de caución, es una discrecionalidad Judicial.

**8. ¿Al momento de solicitar embargo preventivo que se le dificulta más a los abogados solicitantes?**

R: Redactar el escrito, no saben de derecho sustantivo ni derecho procesal, lo hacen con modelos “machotes” y un caso no es igual al otro, por ende, no acreditan los presupuestos.

**9. De acuerdo con su experiencia ¿cuáles son los principales errores que han cometido los abogados al momento de acreditar los presupuestos cautelares y los jueces al momento de valorarlos ?**

R: El peligro y las razones de la urgencia no la saben acreditar, siguen con los errores del Pr, la apariencia de buen derecho so se les hace más fácil, falta de acreditación del presupuesto peligro a la demora; asimismo la falta de proporción de caución o justificación de la misma, puesto que tienen que pagar el embargo.

Por lo general se exigen pruebas, siendo que un proceso no es religión para confiar en todos, se necesitan si o si aportar medios de prueba para acreditar los presupuestos cautelares, a veces solicitan embargo preventivo y ni siquiera acreditan si el bien es del deudor.

**10 ¿Cuáles serían las consecuencias de la inadmisión de la medida cautelar de embargo preventivo cuando se acrediten correctamente todos los presupuestos y requisitos o de su adopción errónea?**

**R:** En el primer caso, si por la falta del otorgamiento de la medida oportunamente pedida finalmente no se logra ejecutar la sentencia favorable al peticionario de la misma, se presenta un daño antijurídico que el demandante no tendría que padecer ocasionado por la actividad del juez.

En el segundo evento, si tradicionalmente se ha establecido en algunos casos como requisito para el decreto de la medida el otorgamiento de una fianza que cubra la indemnización por los perjuicios que se le lleguen a ocasionar al demandado, frente a una ampliación de la potestad cautelar judicial, es claro que su ejercicio debe ir acompañado de una obligación de contracautela suficiente y seria que cubra los daños eventuales que se puedan causar con la práctica de la medida.

**Conclusiones de la entrevista**

De la información suministrada por el Juez Décimo de Distrito Civil de Managua Dr. Roger Salvador Alfaro Cortez, pudimos dar por sentado la existencia de la problemática planteada en nuestra investigación monográfica.

Se concluyó, que el problema se da principalmente en la práctica, los abogados solicitantes aún están errando y arrastrando la manera de acreditación que existía en nuestra legislación antigua (Pr), pues en ese código bastaba con decir que existía un temor de demora para que una medida cautelar fuese admitida.

Existe falta de estudio y conocimientos en materia de derecho civil sustantivo y procesal por parte de la mayoría de los abogados solicitantes, debido a esto los abogados solicitantes no comprenden en qué consiste los presupuestos cautelares y la correcta forma en que deben de ser acreditados en las solicitudes de embargo preventivo; por eso es muy común que en la práctica muchas de las solicitudes presentadas ante un órgano jurisdiccional sean inadmitidas.

Cabe señalar, que los abogados litigantes son negligentes al momento de solicitar una medida cautelar, pues estos no realizan una efectiva teoría del caso, y encima utilizan modelos de escritos “machotes” para la realización de sus escritos; lo que los lleva a un grave error, puesto que un caso no es igual a otro. Por otra parte, cuando se produce una mala valoración de los presupuestos cautelares por parte del judicial y se admite la solicitud de embargo preventivo por error existe la posibilidad de que finalmente no se logra ejecutar la sentencia favorable al peticionario de la misma.

## GUIA DE ENTREVISTA

**Nombre del entrevistado:** Dra. Adriana María Cristina Huete

**Fecha de entrevista:** 27-01-2021

**Hora:** -----

**Vía de la entrevista:** Correo electrónico

Estimada entrevistada somos estudiantes del último año de la carrera de Derecho de la UNAN-Managua. Estamos realizando un estudio investigativo que tiene como objetivo general *“Análisis de los presupuestos cautelares establecidos en el Código Procesal Civil Nicaragüense, y el cumplimiento de éstos en las solicitudes de embargos preventivos interpuestas ante El Juzgado Primero de Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en los periodos 2018-2019”*, para ello requerimos que nos suministre información, la cual utilizaremos para nuestro estudio. Gracias por su apoyo.

### Cuestionario

1. **¿Considera usted que el CPCN brinda una buena regulación a la tutela cautelar y en particular al embargo preventivo? ¿Por qué?**

**R:** Sí, lo considero porque establece los supuestos en los que cabe la medida cautelar de embargo preventivo, asimismo debe de cumplir con los presupuestos y requisitos establecidos en el CPCN, en cambio al Pr, bastaba con decir que había temor fundado sin necesidad de presentar prueba alguna.

2. **¿Cuál es la naturaleza jurídica del embargo preventivo?**

**R:** Asegurarnos las resultas del juicio, previniendo anticipadamente embarga bienes para poderlos materializar una vez concluidos el proceso de ejecución

**3. Según el art.337 del CPCN son presupuestos cautelares el peligro por la demora y la apariencia de buen derecho, para usted ¿cuál es su importancia y cómo conceptualizaría cada uno de estos presupuestos?**

**R:** Peligro por la demora: posibilidad que concurre el riesgo en que durante el tiempo del proceso se vea frustrado la efectividad de la sentencia sin la medida, un riesgo concreto que debe de ser alegado y acreditado por la parte solicitante.

Apariencia de bien derecho: son indicios racionales conforme a la prueba presentada por el solicitante

La importancia está basada, en que el Juzgador tiene que analizar los riesgos que implica el no darle lugar a la medida cautelar, así como los perjuicios que conlleva su adopción, es por ello que el judicial debe de exigir además para su adopción prueba documental para determinar a través de sus indicios si son suficientes para la adopción de la medida

**¿Cuáles son los presupuestos cautelares en los que se produce el embargo preventivo y cómo deben de ser acreditados y valorados dichos presupuestos?**

**R:** La apariencia de buen derecho y el peligro por la demora son los presupuestos cautelares, tanto para su acreditación y su valoración se debe de tomar en cuenta los siguientes:

1. Presunción que los hechos planteados sean verdad
2. Existencia de la necesidad de la tutela jurídica
3. Que exista relación jurídica entre el solicitante y el demandado
4. Que la pretensión a la cual se pretende ejecutar sea tutelado por el derecho
5. Apariencia de bien derecho
6. Existencia de un peligro a la demora
7. Conocimiento del ocultamiento o traspaso de los bienes del deudor
8. Propuesta de caución económica basada en la capacidad económica del solicitante.

**4. Según su opinión ¿la caución es un requisito o un presupuesto cautelar?  
¿Por qué?**

**R:** No es un presupuesto para decretar la medida cautelar, es un requisito; porque en ocasiones el judicial deberá valorar el ofrecimiento de esta y calificarla conforme a la capacidad del solicitante, así como el perjuicio que tendrá el deudor

**5. ¿Qué criterios toma como referencia a la hora de cuantificar la caución en la solicitud de embargo preventivo?**

**R:** Para cuantificar la caución se debe tomar en cuenta los siguientes elementos: los hechos planteados, prueba aportada conforme a los hechos, capacidad económica del solicitante y bienes donde recaerá la medida cautelar.

**6. Cree usted ¿qué el CPCN brinda un buen tratamiento procesal a los presupuestos cautelares? ¿Por qué?**

**R:** Sí, porque el judicial basado en los presupuestos es que le da pautas para poder decretar y no las deja al arbitrio del juez no de las partes.

**7. ¿Cuáles son los principales errores que han cometido los abogados al momento de acreditar los presupuestos cautelares y los jueces al momento de valorarlos ?**

**R:** Plantear el porqué de la medida cautelar, justificar en sus solicitudes el peligro a la demora y la apariencia de buen derecho, no lo hacen conforme al código. Al proponer la caución no justifican porque ofrecen determinado porcentaje o cantidad. Señalamiento de en cuál bien recaerá la medida cautelar, no plantean correctamente la medida cautelar, no establecen la duración de la medida cautelar, no están claros sobre la caución si la ofrecen no justifican porque la ofrecen por porcentaje o porque debe de justificar la exención de ella, no ofrecen prueba indiciaria.

**8. Según su experiencia ¿cuáles han sido la principal causa de inadmisión de las solicitudes de embargo preventivo?**

R: No cumplen con los presupuestos, no establecen el alcance de la medida cautelar, no ofrecen caución y si lo hacen la hacen como si fuera el Pr, ofrecen garantía inmobiliaria, no señalar los bienes a embargar.

**9. ¿Cuáles serían las consecuencias de admitir una solicitud de embargo preventivo que no presenten la acreditación correcta de los presupuestos cautelares o de inadmitir cuando se acrediten correctamente?**

R: Nulidad del acto procesal, incurrir en daños y perjuicios, llamamiento de atención de parte del TAM al judicial para que sea más cuidadoso en la observación de los presupuestos

**Conclusiones de la entrevista**

En un primer momento, partimos de nuestra entrevista con la importancia de las medidas cautelares, así como los de los presupuestos cautelares, cabe destacar que la judicial tiene un conocimiento basto de la doctrina acerca del tema, pues a nuestro ver tiene el mismo criterio que hemos venido planteando en el presente trabajo investigativo.

En cuanto a los criterios que se deben de aplicar en la práctica al momento de acreditar y valorar los presupuestos cautelares, la entrevistada manifestó que el solicitante tiene que justificar de manera indispensable la protección de su derecho, esto a través de la acreditación de los presupuestos cautelares.

Según su opinión, la importancia está basada en que el juzgador tiene que analizar los riesgos que implica el no darle lugar a la medida cautelar, así como los perjuicios que conlleva su adopción, es por ello que el judicial debe de exigir además para su adopción prueba documental para determinar a través de sus indicios si son suficientes para la adopción de la medida

En el mismo sentido, nos revela que la principal causa de inadmisión de medidas cautelares es la falta de acreditación de presupuestos cautelares, ella menciona que la mayoría de las medidas son inadmitidas por este error.

## **ANEXO 2 EXPEDIENTES ANALIZADOS**

Para una mayor ilustración, a partir de la siguiente página se presentarán las solicitudes cautelares y los autos de admisión o inadmisión que se sometieron a un exhaustivo análisis.





SERIE "H"

No. 1143875

**SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO Asunto:**

Actora: [REDACTED]

Demandada: [REDACTED]

**JUZGADO EJECUCIONES Y EMBARGOS CIRCUNSCRIPCION DE MANAGUA, Señor Juez,**

Soy, [REDACTED] Mayor de edad, Soltera, Abogada y Notario Público, de este domicilio, con cédula de identidad número [REDACTED] con carné de la CSJ No. [REDACTED] quien actúa en propio nombre y calidad. Ante usted con el debido respeto expongo lo siguiente:

**RELACIÓN DE HECHOS**

**PRIMERO:** En el mes Abril del año Dos mil Dieciocho la señora [REDACTED] fue acusada de un delito de Hurto, expediente identificado con el número de asunto: 014119-ORM4-2018-PN, la acusada recurre a mis servicios para que la represente como defensa técnica dentro del proceso, sin más trámites se procedió a llegar a un acuerdo sobre la tasa de mis honorarios por prestaciones de servicios profesionales en donde ella sin ningún problema aceptó, y lo que consta en correo electrónico con el que demostraré mis extremos al momento de llegar a la demanda ordinaria.-

Tal aceptación de los honorarios fue expresa por la demandada mediante correo indicando TAXATIVAMENTE su aprobación y posteriores depósitos de una parte de los honorarios.-

**SEGUNDO:** En Julio de este año Dos Mil Diecinueve la señora [REDACTED] consultarme previamente revocó el Poder General Judicial en donde era su representante y nombra a nuevos Apoderados.

**TERCERO:** Dentro de lo acordado procedí a cobrar mis honorarios por prestaciones, remitiendo correo electrónico con los cobros, descontando los honorarios que correspondían a la asistencia a las audiencias, en el mes de septiembre le hice el requerimiento de pago en donde su respuesta fue negativa debido a que asegura que no tiene para pagar.

**SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR**

Por tanto: En base a lo ante expuesto, le solicito con todo respeto a usted autoridad judicial, el EMBARGO PREVENTIVO, sobre el bien mueble del Vehículo Camioneta Toyota RAV4 Color negro Placa- M225399 y una ACCIÓN que ostenta en el club TERRAZA, la que se encuentra a nombre de ella misma.

**JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR**

Debido a que en diferentes ocasiones he intentado contactarme con la señora [REDACTED] en donde el resultado ha sido negativo al igual que su respuesta en las pocas ocasiones que logro contactarme con ella, alegando que es insolvente financieramente para poder responder con la deuda generada por un acuerdo que tuvimos

*Así como en los  
eventos y certificados  
de ahorro en Banco*

1 por el monto de mis honorarios, existen correos privados de ambas partes en donde se establece claramente la  
2 existencia de la deuda, de acuerdo con el Arto. 347 CPCN de la procedencia del Embargo Preventivo en su numeral  
3 4) que expresa literalmente "Cuando aun estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite que la persona  
4 deudora trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique  
5 que por cualquier causa, ha disminuido apreciablemente la solvencia de la persona deudora después de contraída la  
6 obligación" para velar por el cumplimiento de la resolución judicial denominada sentencia al finalizar el proceso y no  
7 exista ningún tipo de frustración para el cumplimiento de la misma, del mismo modo, para la conservación,  
8 perduración del bien y como garantía de pago de la deuda, expongo ante usted autoridad judicial se me conceda la  
9 medida cautelar.

10 **MEDIOS DE PRUEBAS**

11 **Prueba documental:** Depósitos parciales de parte de la señora [REDACTED] mi cuenta, a partir de haber  
12 aceptado el trato de los honorarios.

13 **Prueba Técnica:** Correos electrónico, en donde demostraré la existencia de la deuda que tiene la señora [REDACTED]  
14 [REDACTED] con mi persona.

15 **CUACIÓN**

16 1. Ofrezco como fianza para el embargo preventivo la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES (U\$  
17 675.00) equivalente al 2% de la deuda total que es aproximadamente TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS  
18 CINCUENTA DÓLARES (U\$ 33,750.00), más los intereses legales hasta la fecha de efectivo pago.

19 **SOLICITUD**

20 1. Se admita la presente solicitud y se decrete EMBARGO PREVENTIVO, contra los bienes de la señora [REDACTED]  
21 [REDACTED].

22 **LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIÓN**

23 Km 8 carretera a Masaya, Primera entrada a las Colinas, de la gasolinera Puma 300 Mts Este, 150 Mts Norte,  
24 Residencial Paseo de las Colinas, Casa N° 0708

25 *Dirección para Demandado = Centro comercial, de donde fue demandado*  
26 Managua, 28 de octubre de 2019.- *20. al lapso 75 días*

27 Comisiono para presentar este escrito a [REDACTED]  
28 [REDACTED]  
29 [REDACTED]  
30 [REDACTED]

*29/10/19*  
*10/12*

Número de Asunto: 007711-ORM4-2019-CO

Número de Asunto Principal: 007709-ORM4-2019-CO

Juzgado Primero Distrito Civil Oral Circunscripción Managua. Cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Las nueve y treinta y uno minutos de la mañana

**ANTECEDENTES DE HECHO:**

1.- Conforme escrito presentado a las diez y doce minutos de la mañana del veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, fue solicitada la medida cautelar por el Licenciada [REDACTED], mayor de edad, soltera Abogada y notario público de este domicilio con cedula de identidad numero [REDACTED] con carnet de la Corte Suprema de Justicia numero quien actúa en su propio nombre, en contra de la ciudadana [REDACTED].

2.- La solicitante manifestó en el mes de abril del año dcs mil dieciocho la señora [REDACTED] fue acusada de un delito de hurto, expediente identificado con el numero de asunto 014119-ORM4-2019-PN la acusada recurre a sus servicios para que la represente como defensa técnica dentro del Proceso sin más trámite se procedió a llegar a un acuerdo sobre la tasa de sus tasa de honorarios por presentaciones de ser servicios profesionales en donde ella sin ningún problema acepto, y lo que consta en correo electrónico con el que demostrare mis extremos al momento de llegar a la demanda ordinaria. Tal aceptación de los honorarios fue expresa por la demanda mediante correo Indicando TAXATIVAMENTE su aprobación y posteriores depósitos de una parte de los honorarios. En julio de este año d dos mil diecinueve la señora [REDACTED] Urroz sin consultar previamente revoco el poder General Judicial en donde era su representante y nombra a nuevo apoderado dentro de lo acordado procedí a cobrar mis honorarios por presentaciones remitiendo correo electrónico con los cobros, descontando los honorarios que correspondían a la asistencia a la audiencia, en el mes de septiembre le hice el requerimiento de pago en donde su respuesta fue negativa debido a que asegura que no tiene para pagar. Por lo que comparece solicitando medida cautelar de Embargo Preventivo, con carácter urgente sin audiencia por cuanto no le ve voluntad de pago la parte deudora.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

1.- El art. 347 CPCN. Cabe solicitar el embargo preventivo en los siguientes supuestos: 1) Cuando la persona deudora no tenga domicilio en la República; 2) Cuando la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado; 3) Cuando la existencia del crédito conste en contrato bilateral, siempre que la persona acreedora haya cumplido con su parte o que su obligación fuere a plazo; 4) Cuando aun estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite que la persona deudora trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique que por cualquier causa, ha disminuido apreciablemente la solvencia de la persona deudora después de contraída

la obligación; y 5) Cuando se demande por daños y perjuicios derivados de eventos dañosos, siempre que se acredite el daño y la parte demandada no contare con seguro de responsabilidad; o cuando contando con dicho seguro, éste sea insuficiente, o la aseguradora se encontrara en proceso de liquidación al momento del inicio del proceso, o en forma sobrevenida.

2.- El Arto 372 CPCN, establece los requisitos de solicitud de medidas cautelares.

3.- El arto 374 CPCN, La autoridad judicial examinará de oficio su competencia para conocer de la solicitud de medidas cautelares, rechazará de plano su intervención si considera que carece de ella, y remitirá a la persona solicitante a la autoridad judicial competente. Sin embargo, la medida ordenada por una autoridad judicial incompetente será válida si se cumplen los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia, debiendo remitir las actuaciones de la autoridad judicial competente en cuanto sea requerido, o se ponga de manifiesto la incompetencia.

4.- El art. 375 CPCN señala que la persona solicitante deberá ofrecer caución suficiente para garantizar el pago de costas daños y perjuicios ocasionados a la parte demanda por su adopción y cumplimiento. Así mismo el art. 376 CPCN, la autoridad judicial convocará a las partes a una audiencia con carácter preferente, que se celebrará dentro del quinto día hábil desde la notificación

#### FALLO:

1.- Se inadmite a trámite la solicitud de medida cautelar realizada por la Licenciada [REDACTED], quien actúa en su propio nombre, en contra de la ciudadana [REDACTED]. Por cuanto la misma no cumple con los requisitos del arto 347 CPCN.

2.- Dejase a salvo el derecho de la parte solicitante para que lo haga valer en debida forma. Archívense las presentes diligencias y devuélvase los anexos y copias de ley.

3.- Contra esta providencia no cabe recurso alguno conforme el art. 379 párrafo cuarto CPCN. Notifíquese.

Jueza Adriana María Cristina Huete.

ALBOVEJA

ASUNTO NUEVO

OBJETO: SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGO PREVENTIVO CON CARÁCTER DE URGENCIA).

JUZGADO \_\_\_\_\_ DE DISTRITO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCION MANAGUA.-

El suscrito, \_\_\_\_\_, mayor de edad, soltero, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, de este domicilio y residencia, habiente de cédula de identidad \_\_\_\_\_, No quion cero cero uno siete \_\_\_\_\_, con número de registro profesional número \_\_\_\_\_), de este domicilio, Reparto San \_\_\_\_\_, embajada Española, treinta metros al Norte, trecientos metros al Oeste, casa número L-34, ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

**1. POSTULACION PROCESAL ACTIVA ARTO. 85CPCN**

De conformidad con documento de poder contenido en la escritura número veinte ocho, autorizada en esta ciudad de Managua a las cinco de la tarde del día veintiséis de Julio del año dos mil diecinueve, ante el Notario Público y Abogado Carlos Alberto Berrios Tellez, de este domicilio, cuyo testimonio en fotocopias razonadas notarialmente acompaño con este escrito, como documento 1; demuestro que soy Apoderado General Judicial del señor: \_\_\_\_\_, portador de cédula de identidad número \_\_\_\_\_, quien es mayor de edad, casado, Administrador de Empresa, de este domicilio; específicamente: frente a las oficinas centrales INE, edificio SYSCOM, Y es en tal carácter de apoderado general judicial pido que me dé la intervención de ley que en derecho corresponde.

**2. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO.**

En mi calidad en que comparezco solicito a su autoridad, decretar embargo preventivo con carácter de urgencia, en contra del señor: \_\_\_\_\_, mayor de edad, casado, contador, cedula de identidad \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, con domicilio en esta ciudad de Managua, ubicado específicamente, de INATEC Centro de Idiomas, siete sur, una cuadra al sur, por ser éste deudor principal de mi representado, todo ello apoyados en los motivos de hechos y fundamentos de derecho que expongo, en el siguiente orden:



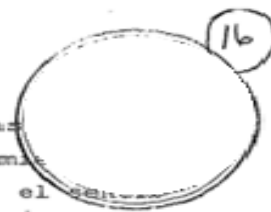


15

### 3. HECHOS

3.1. PRIMERO: Mi mandante es acreedor del señor  
en virtud de: Coo

Escritura Pública número tres (03) denominada Compraventa de Bien Inmueble a Plazo, autorizada ante los oficios Notariales del Licenciado Jazmín Mairena Cantillano, a las tres de la tarde del veinte de Noviembre de dos mil diecisiete; donde comparecen el Vendedor dueño en dominio y posesión Bien Inmueble ubicada en las inmediaciones del antiguo Country Club Nejapa inscrita bajo número seis siete seis uno seis (67,616), tomo tres siete tres siete (3737), folio dos tres cero (230), asiento segundo (02) de esta ciudad de Managua, por el precio de cuatro millones treinta y ocho mil dieciséis con noventa y nueve centavos de Córdobas (C\$4,038,016.99), equivalentes en dólares a tasa de cambio oficial del Banco Central del día veinte de Noviembre de dos mil diecisiete a cinco treinta y un mil ochocientos sesenta y tres con noventa y cinco centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (\$ 131,863.95) y el comprador , quien acepta el precio de dicho inmueble en la condiciones y cláusulas estipulas, entregando como anticipo la cantidad de cuatrocientos cincuenta y nueve mil tres cientos treinta y nueve Córdobas (C\$ 459,339.00), equivalente a quince mil dólares de los Estados Unidos de América (\$ 15,000.00), quedando un saldo deudor de tres millones quinientos setenta y ocho mil seis cientos setenta siete con noventa y nueve centavos de Córdobas (C\$ 3,578,677.99), equivalentes a ciento dieciséis mil ocho cientos sesenta y tres dólares con noventa y cinco centavos de los Estados Unidos de América (U\$116,863.95); acordando cancelar el precio total en treinta y cinco (35) mensuales, de ciento dos mil doscientos cuarenta y siete con noventa y cuatro centavos de Córdobas (C\$ 102,247.94), equivalentes a tres mil trescientos treinta y ocho punto noventa y siete dólares de los Estados Unidos de América (U\$ 3,338.97), los cuales serían entregados los días treinta de cada mes, iniciando el día treinta de Diciembre de dos mil diecisiete, finalizando el día treinta de diciembre de



dos mil veinte. Señor Juez, muy a pesar de las llamadas y requerimientos de cobro y vencimiento de plazo, que en ese sentido se le ha hecho, el señor [redacted], no responde a tales, Por el contrario, el citado señor evade a mi representado, no atiende a sus llamadas y al presentarse en su domicilio nunca se encuentra el cual cita de INATEC Centro de Idiomas, siete sur, una cuadra al sur, este se oculta o niega su presencia en tal lugar.

3.2. **SEGUNDO:** Mi representado no ha interpuesto la correspondiente demanda, ya que a esta fecha, en algunas llamadas contestadas por el señor [redacted] se estaba procurando llegar a un acuerdo extrajudicial, a lo cual, el señor [redacted], sea desentendido, teniendo a la fecha ocho meses sin realizar absolutamente un pago de los programados y mi representado a tenido la paciencia y confianza en el cumplimiento de las obligaciones del señor Mendoza Taleno, sin dar signos de querer efectuar dichos pagos con sus respectivas cargas moratorias, actualmente el inmueble objeto del crédito se encuentra en dominio y posesión del señor [redacted] inmueble ubicada en las inmediaciones del antiguo Country Club Nejapa inscrita bajo número seis siete seis uno seis (67,616), tomo tres siete tres siete (3737), folio dos tres cero (230), asiento segundo (02) de esta ciudad de Managua y sobre este, se solicitará la presente medida Cautelar de embargo preventivo.

3.3. **TERCERO:** El objeto de la medida cautelar (**embargo preventivo con carácter de urgencia**) es evitar La venta del bien inmueble propiedad del deudor señor: [redacted], ya que efectivamente existe esa intención de vender.

3.4. **CUARTO:** La medida cautelar de embargo preventivo de bienes interesada (Arto. 343 Inc. 1), no puede ser susceptible de ser sustituida por otra medida Cautelar menos gravosa, por cuanto en el patrimonio de los demandados, no existe otro tipo de bien que los una o que permita la satisfacción del pago de la deuda de mi



mandante a como es el bien inmueble ubicada en las inmediaciones del antiguo Country Club Nejapa, bajo número seis siete seis uno seis (67,616), tres siete tres siete (3737), folio dos tres caro (230), asiento segundo (02) de esta ciudad de Managua.

- 3.5. **QUINTO:** En relación al peligro de demora procesal, como ha quedado antes expuesto, radica en el hecho que el deudor ponga en peligro de lesione o frustre las prestaciones de pago de lo adeudado por el señor [redacted] al pretender, enajenar, vender o traspasar, el único activo patrimonial que los une en esta deuda, por lo que queda justificado que la medida cautelar debe ser tramitada y adoptada con carácter de **urgencia**, pues que sin la inmediata adopción de la medida, la sentencia estimatoria de la pretensión sería de imposible o difícil ejecución (Arto. 337 CPCN), de otra manera se comprometería su éxito, en realizar audiencia comprometiendo el éxito de la medida cautelar, teniendo en consideración que el deudor a evadido los requerimientos, y llamados extrajudiciales de cobro que se les dirigió; razón por la cual es más que evidente su intención de no cumplir con su obligación crediticia con mi representado el señor [redacted].
- 3.6. **SEXTO:** La solicitud de medida Cautelar de embargo preventivo con carácter de **urgencia**, radica en el documento Escritura Pública número tres (03) denominada Compraventa de Bien Inmueble a Plazo, autorizada ante los oficios Notariales del Licenciado Jazmín Mairéna Cantillano, a las tres de la tarde del veinte de Noviembre de dos mil diecisiete.
- 3.7. **SÉPTIMO:** Que, a los efectos de asegurar los posibles perjuicios, que para el demandado pudiere Derivarse del embargo preventivo, con carácter de urgencia del bien mueble descrito, así como de la anotación preventiva de embargo, esta parte hace uso de caución ofreciendo en dinero efectivo la suma de cincuenta mil córdobas (C\$ 50,000.00) según arto. 375 y 376 del CPCN
4. **FUNDAMENTOS DE DERECHOS:**





18

- 4.1. **Competencia.** - Este juzgado es el competente para conocer de esta solicitud, pues reúne los requisitos de competencia objetiva, territorial y funcional, conforme al arreglo a lo dispuesto en el ordinal 2 del Art. 293, 32. y 373 del CPCN y los dispuesto en la circular del cinco de abril del año dos mil diecisiete; acuerdo número: treinta (30)
- 4.2. **Capacidad.** - Mi representado y los demandados tienen la capacidad necesaria para ser parte, Pues reúnen los requisitos conforme lo establecido por los artículos 64 y 66 del CPCN.
- 4.3. **Legitimación activa y pasiva.** - Conforme Arto.70 CPCN; mi representado y el demandado se encuentra legitimados como titular del derecho de la relación jurídica.
- 4.4. **Representación.** - Por mi parte he justificado debidamente la representación procesal Necesaria para comparecer en estas diligencias conforme a lo preceptuado por los artículos 85 Y 90 CPCN.
- 4.5. **Medida cautelar interesada.** - Arto. 343, Inc. 1, CPCN, autoriza la adopción del embargo preventivo como medida cautelar específica, Art. 347 Inc. 3. CPCN, Arto. 348, que versa sobre embargo de bienes Inmuebles, y Finalmente el Arto. 380 CPCN, dispone que siempre que se solicite medidas cautelares urgentes debe acreditarse las razones por las cuales no se debe señalar audiencias, sin que se comprometa el éxito de la medida.
- 4.6. **Procedimiento.** - Para proceder a los trámites de las medidas cautelares urgentes; es necesario que el solicitante cumpla con los requisitos generales establecidos en el Artos. 372, 337, 347, 380; todos del CPCN; cumpliendo también con requisitos que todo escrito debe contener enumerados en los Artos. 420 y 421 del citado código. En virtud de todo lo expuesto y de conformidad con la normativa citada
5. **SOLICITUD.**- Vengo ante su autoridad a solicitar: que decrete medida cautelar de embargo preventivo con carácter de urgencia y que el mismo recaiga en la propiedad del señor: **(EMBARGO DE BIENES INMUEBLES** arto. 348 CPCN Ley 902), BIEN INMUEBLES inscrita bajo número seis siete seis uno seis (67,616), tomo tres



siete tres siete (3737), folio dos tres de asiento segundo (02) de esta ciudad de Managua, en garantía al pago de mi mandante de la sumas siguientes:

- 5.1. La suma de: ocho cientos seis mil seis cientos noventa y cinco córdobas con 61/100 (C\$806,695.15) en concepto de: Pago 8 cuotas vencidas desde el día 31 de enero de dos mil diecinueve a la fecha.
- 5.2. La suma de: cuarenta mil córdobas (C\$40,000.00) en concepto de COSTAS LEGALES suscitadas por la negatividad de los deudores de efectuar el pago de lo adeudado al Señor

Para un total de: ochocientos cuarenta y seis mil seis cientos noventa y cinco CORDOBAS CON 61/100. (C\$846,695.15).

#### 6. PETICIONES.-

- 6.1. Pido Señor Juez que, en las presentes diligencias, se me tenga como Apoderado General Judicial del señor:
- 6.2. Que su autoridad admita la presente solicitud, cuya pretensión es la adopción de medida cautelar de Embargo Preventivo con carácter de urgencia, en el bien mueble señalado y que pertenece al señor
- 6.3. Pido a su autoridad una vez acordada la medida de embargo preventivo en contra del bien en cuestión y haber rendido mi representado la caución correspondiente, nombrar depositario del bien mueble embargado al señor: ; o a la persona que se encuentre en posesión del bien mueble, sin derecho a retribución; y en consecuencia de lo anterior, remita oficio al Registro Público de la Propiedad inmueble, mercantil y garantías mobiliarias, para que anote en el registro de propiedad anotación preventiva de embargo ; todo conforme a lo preceptuado por el Arto 342 Inc. 3 CPCN.

#### 7. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.-

Para demostrar la procedibilidad de la medida me valdré de las siguientes pruebas:

- 7.1. Copia de Escritura Pública número tres (03) denominada Compraventa de Bien Inmueble a Plazo, autorizada ante los oficios Notariales del Licenciado



Cantillano, a las tres de la tarde del  
Noviembre de dos mil diecisiete

- 7.2. Avisos de cobro y vencimiento de plazo.
- 7.3. Fotografías evidenciando la pretensión de venta del inmueble objeto del vínculo crediticio.

**8. ANEXOS DE LA SOLICITUD.-**

- 8.1. escritura número veinte ocho Poder General Judicial, autorizada en esta ciudad de Managua a las cinco de la tarde del día veintiséis de Julio del año dos mil diecinueve, ante el Notario Público y Abogado

**9. NOTIFICACIONES**

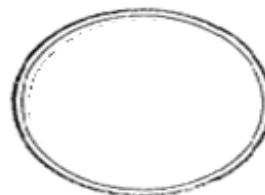
Para efectos de notificaciones señalo:

- 9.1. Por esta representación procesal: Mi oficina Centro Cívico Camilo Ortega Modulo A.
- 9.2. Por parte de mi representado señalo para notificaciones: Frente INE central, edificio SYSCOM.
- 9.3. Por parte de los deudores y futuro demandado; Frente INATEC centro de idiomas, una cuadra 1 sur.

Así concluyo, obligándome a interponer la presente demanda en el plazo establecido de treinta Días que preceptúa el Art. 338 CPCN.

10. **Designo para su presentación.-** sustento Artc. 138 CPCN, designo al Licenciado Carlos Alberto Berrios Tellez, Cedula 281-211286-0009D, CSJ, 22482, mayor de edad, soltero Abogado y Notario público de este domicilio.
11. **Lugar y fecha.-** Managua, veintinueve de Agosto del año dos mil diecinueve

Apoderado General Judicial



Número de Asunto: 006013-ORM4-2019-CO.  
Número de Asunto Principal: 006010-ORM4-2019-CO.  
Número de Asunto Antiguo:

22

Juzgado Primero Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, cuatro de Septiembre del dos mil diecinueve. Las diez y treinta y tres minutos de la mañana

1.- Vista la solicitud de medidas cautelares, presentada por el licenciado

, mayor de edad, soltero, abogado y de este domicilio, identificado con cédula de identidad ciudadana numero y Carnet de la Corte Suprema de Justicia Numero 4952, en su calidad de Apoderado General Judicial del señor y en ese carácter bríndesele la debida intervención de ley, en la solicitud de medida cautelar en contra de

, mayor de edad, casado, contador y de este domicilio, identificado con cédula de identidad ciudadana numero, de embargo preventivo del siguiente bien: propiedad ubicada en las inmediaciones del antiguo Country Club Nejapa de esta ciudad de Managua, con un área de quinientos cincuenta y un metros cuadrados con cuarenta y cuatro centímetros de metros cuadrados ( 551.44 Mts2) comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: NORTE: Callejón de por medio propiedad de Don Emilio Bandes y mide doce metros con veinte centímetros de este a oeste; ESTE: Resto del predio matriz cuarenta y cinco metros con veinte centímetros de norte a sur; SUR y OESTE: Resto del predio matriz, formando el lote desmembrado un rectángulo perfecto y teniendo doce metros con veinte centímetros de frente por cuarenta y cinco metros veinte centímetros de fondo y acredita el dominio con el testimonio de la escritura pública numero tres ( 03) " Compraventa de Bien Inmueble a Plazo", autorizada en la ciudad de Managua, a las tres de la tarde, del día veinte de Noviembre del año dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de, inscrita bajo el numero: sesenta y siete mil seiscientos dieciséis (67,616) ; Tomo: cuatro mil trece ( 4013); Folio: doscientos dieciocho pleca doscientos diecinueve ( 218/219); Asiento: cuarto ( 4º) de la Columna de Inscripción, Sección de Derechos Reales del Libro de Propiedades del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua.

2.- El abogado

, Apoderado General Judicial del señor, en su escrito de solicitud de embargo preventivo, expresa que el señor debe de plazo vencido y exigido, ocho ( 8 ) mensualidades de tres mil trescientos treintiocho dólares con noventa y siete centavos de dólares ( C\$ 3.338.97) lo que daría como resultado de la operación de multiplicar, la cantidad de las mensualidades por los ocho meses, la cantidad de VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE DOLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES ( US\$ 26,711.76) equivalentes a OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CORDOBAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE CORDOBAS ( C\$ 891.996.48) al tipo de cambio oficial a la fecha de presentación de la solicitud, del dólar con respecto al córdoba de C\$33.3934, cantidad diferente a la señalada en su escrito de solicitud de medidas cautelares, así mismo señala la cantidad de CUARENTA MIL CORDOBAS ( C\$ 40,000.00) en concepto de costas

legales, las cuales deben de ser tasadas por secretaria, la cual en ningún caso esta excederá el veinticinco por ciento del valor de lo litigado (25%) de conformidad con el arto 221 y 226 CPCN, en todo caso las costas del veinticinco por ciento de US\$ 26,711.76, sería la cantidad de US\$ 6,677.94.

3.- El arto 375 CPCN, dispone como regla general, que la persona solicitante de la medida cautelar deberá ofrecer caución suficiente, para garantizar el pago de las costas causadas en el incidente, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandada, por su adopción y cumplimiento en concordancia con el arto 376 CPC, que señala que la caución podrá ofrecerse en dinero en efectivo, cheque certificado, cheque de gerencia o de caja, garantía bancaria o de instituciones financieras supervisadas.

El abogado

Apoderado General Judicial del señor

....., en su escrito de solicitud de embargo preventivo, ofrece en dinero en efectivo la suma de CINCUENTA MIL CORDOBAS (C\$ 50,000.00) que corresponde a un seis ( 6 % ) por ciento de la cantidad a embargar, la cual no está en proporción en relación con el monto de la pretensión deducida y siendo que se debe caucionar para garantizar el pago de las costas causadas en el incidente, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandada, por principio de analogía se debe de aplicar el arto 221 CPCN.

4.- No se admite a trámite la medida cautelar de urgencia del licenciado

....., Apoderado General Judicial del señor

....., en contra de

5.- Se hace saber que conforme el artículo 549 CPCN, contra esta resolución cabrá el recurso de apelación que deberá interponerse ante esta autoridad judicial dentro del plazo de diez días, a partir del siguiente día de su notificación.

6.- Notifíquese.

Adriana María Cristina Huete López.

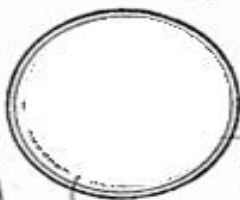
Jueza Primero Distrito Civil Oral.

Circunscripción Managua.

Yasna Yamileth López Brenes.

Secretaria.

ADMAHULC



SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO \_\_\_\_\_ DISTRITO CIVIL

ORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN MANAGUA.-

ASUNTO No. \_\_\_\_\_

MOTIVO: SOLICITUD DE EMBARGO PREVENTIVO.

ACTOR:

DEMANDADO:

### I. APERSONAMIENTO

Soy, \_\_\_\_\_ mayor de edad, casada, Abogada y Notaria Publica, con domicilio en Managua, me identifico con cedula de identidad número dos, ocho, uno guion dos, nueve, cero, cinco, siete, ocho guion cero, cero, cero, tres Letra "M" (No. 281-290578-0003 M), y portadora del carnet según Registro de la Corte Suprema de Justicia número veintitrés mil ciento cincuenta (No. 23150 CSJ), ante usted con el debido respeto comparezco, expongo y pido:

### II. LEGITIMACIÓN PROCESAL

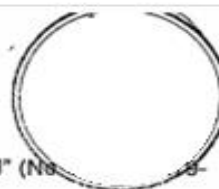
Conforme Escritura Número Treinta y tres (33): **PODER DE REPRESENTACIÓN**, otorgada en la ciudad de Managua a las siete y cincuenta de la mañana del día veintitrés de mayo del año dos diecisiete, ante la Notaria Pública: \_\_\_\_\_ demuestro ser la **apoderada Especial de Representación** del señor \_\_\_\_\_ quien es mayor de edad, de oficio Transportista, estado civil Casado, con domicilio de Managua, identificado con cédula de identidad número cero, cero, uno guion dos, seis, cero, tres, siete, cero guion cero, cero, cuatro, seis Letra "N" (No. 001-260370-0046 N).

### III. RELACIÓN DE LOS HECHOS

Cabe señalar que el señor \_\_\_\_\_ es Concesionario de la \_\_\_\_\_ ubicada en la siguiente dirección Km 4 Carretera Sur Contiguo a Casa Macgregor, conforme a Testimonio de Escritura Pública Número Cincuenta y Siete (57), Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble, Suministro de Combustible y Comodato de Equipos, dado en la ciudad de Managua a las tres de tarde del día ocho de Octubre del año dos mil quince, ante los oficios del Notario Público \_\_\_\_\_, Señor Juez en fecha del 21 de agosto del año dos mil diecisiete se recepcionó en la **GASOLINERA UNO BATAHOLA** una carta de solicitud de Crédito de Combustible del señor \_\_\_\_\_, quien es mayor de edad, casado, Transportista, quien se identifica con cedula de identidad número cero, cero, \_\_\_\_\_



61



uno guion cero, uno, cero, dos, siete, nueve guion cero, cero, cinco, uno Letra "J" (No. 0051 J), con domicilio y residencia en esta ciudad de Managua, que cita en el Bo. **VILLA MIGUEL GUTIÉRREZ, SEMAFOROS ½ C. E. CASA No. 561**, la carta era de solicitud de Crédito de Combustible el señor \_\_\_\_\_ la firma en calidad de Gerente

General de la Empresa \_\_\_\_\_ cabe señalar que la \_\_\_\_\_

**PERSONA NATURAL**, la que desde ya pongo a su disposición como medio probatorio el documento de **CONSULTA DE OBLIGACIONES** emitido por la **DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE LINDA VISTA QUIEN SE ENCUENTRA BAJO EL RÉGIMEN DE CUOTA FIJA PERSONA NATURAL** quien se encuentra a la fecha **ACTIVO** en su negocio como **TRANSPORTISTA**, y por lo tanto desde la fecha del 21/08/2017, se le otorgó el crédito de combustible en aras de obtener clientes, pero resulta su señoría que el señor

**BENAVIDEZ GARCÍA**, solo las primeras tres semana honro su compromiso de pagar en tiempo el combustible otorgado en crédito quedando en incumplimiento a partir del 14 de Septiembre del año 2017, hasta la fecha del 14 de octubre del año 2017 quien tenía una deuda de **OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 51/100 DE CORDOBAS (C\$ 804,955.51)**, y por insistencias de cobros realizados por vía telefónico, cobros administrativo y por último cobros notariales es que se logró obtener un abono de **CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CÓRDOBAS NETOS (C\$183,120.00 Córdobas)** o su equivalente a seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (**US\$ 6,000.00**), con fecha del 26 de octubre del año 2017, quedando un saldo de **SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 CÓRDOBAS (C\$ 621, 835.51)** quedando pendientes facturas con fechas desde el 21 de septiembre hasta el 14 de octubre del 2017, el cual procedo a desglosar de las siguiente manera: **FACTURAS DE CRÉDITOS DE COMBUSTIBLES PENDIENTES DE PAGO:** Factura de crédito con número 26605 del 21/09/2017 con monto de **C\$ 16,150.00**, Factura de crédito con número 26606 del 21/09/2017 con monto de **C\$ 5,750.00**, Factura de crédito con número 26607 del 21/09/2017 con monto de **C\$ 7,500.00**, Factura de crédito con número 26608 del 21/09/2017 con monto de **C\$ 8,700.00**, Factura de crédito con número 26609 del 22/09/2017 con monto de **C\$ 11,375.00**, Factura de crédito con número 26610 del 22/09/2017 con monto de **C\$ 12,394.13**, Factura de crédito con número 26611 del 23/09/2017 con monto de **C\$ 8,400.00**, Factura de crédito con número 26612 del 23/09/2017 con monto de **C\$ 8,400.00**, Factura de crédito con número 26613 del 24/09/2017 con monto de **C\$ 6,877.00**, Factura de crédito con número 26614 del





24/09/2017 con monto de C\$ 15,650.00, Factura de crédito con número 26615 del 24/09/2017 con monto de C\$ 5,979.64, Factura de crédito con número 26616 del 25/09/2017 con monto de C\$ 6,452.71, Factura de crédito con número 26617 del 25/09/2017 con monto de C\$ 7,500.00, Factura de crédito con número 26618 del 25/09/2017 con monto de C\$ 8,700.00, Factura de crédito con número 26619 del 26/09/2017 con monto de C\$ 13,400.00, Factura de crédito con número 26620 del 26/09/2017 con monto de C\$ 10,104.96, Factura de crédito con número 26621 del 27/09/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26622 del 27/09/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26623 del 28/09/2017 con monto de C\$ 8,100.00, Factura de crédito con número 26624 del 28/09/2017 con monto de C\$ 9,207.56, Factura de crédito con número 26625 del 28/09/2017 con monto de C\$ 1,500.00, Factura de crédito con número 26626 del 28/09/2017 con monto de C\$ 6,731.31, Factura de crédito con número 26627 del 28/09/2017 con monto de C\$ 11,200.00, Factura de crédito con número 26628 del 29/09/2017 con monto de C\$ 5,400.00, Factura de crédito con número 26629 del 29/09/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26630 del 29/09/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26631 del 29/09/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26632 del 30/09/2017 con monto de C\$ 5,233.58, Factura de crédito con número 26633 del 01/10/2017 con monto de C\$ 13,450.00, Factura de crédito con número 26634 del 01/10/2017 con monto de C\$ 13,450.00, Factura de crédito con número 26635 del 01/10/2017 con monto de C\$ 1,992.34, Factura de crédito con número 26636 del 01/10/2017 con monto de C\$ 7,500.00, Factura de crédito con número 26637 del 01/10/2017 con monto de C\$ 8,800.00, Factura de crédito con número 26638 del 02/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26639 del 02/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26640 del 03/10/2017 con monto de C\$ 5,750.00, Factura de crédito con número 26641 del 03/10/2017 con monto de C\$ 6,900.00, Factura de crédito con número 26642 del 03/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26643 del 03/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26644 del 04/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26645 del 04/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 26646 del 04/10/2017 con monto de C\$ 1,480.00, Factura de crédito con número 26647 del 04/10/2017 con monto de C\$ 8,100.00, Factura de crédito con número 26648 del 04/10/2017 con monto de C\$ 8,100.00, Factura de crédito con número 26649 del 04/10/2017 con monto de C\$ 5,532.55, Factura de crédito con número 26650 del 05/10/2017 con monto de C\$ 10,000.00, Factura de crédito con número 27051 del 05/10/2017 con





2



monto de C\$ 6,200.00, Factura de crédito con número 27052 del 05/10/2017 con monto de C\$ 1,614.11, Factura de crédito con número 27053 del 05/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 27054 del 05/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 27055 del 06/10/2017 con monto de C\$ 10,750.00, Factura de crédito con número 27056 del 06/10/2017 con monto de C\$ 7,500.00, Factura de crédito con número 27057 del 06/10/2017 con monto de C\$ 8,800.00, Factura de crédito con número 27058 del 08/10/2017 con monto de C\$ 2,317.10, Factura de crédito con número 27059 del 08/10/2017 con monto de C\$ 5,000.00, Factura de crédito con número 27060 del 08/10/2017 con monto de C\$ 5,750.00, Factura de crédito con número 27061 del 09/10/2017 con monto de C\$ 5,800.00, Factura de crédito con número 27062 del 09/10/2017 con monto de C\$ 5,000.00, Factura de crédito con número 27064 del 09/10/2017 con monto de C\$ 5,000.00, Factura de crédito con número 27065 del 09/10/2017 con monto de C\$ 7,000.00, Factura de crédito con número 27066 del 10/10/2017 con monto de C\$ 4,875.67, Factura de crédito con número 27067 del 10/10/2017 con monto de C\$ 5,000.00, Factura de crédito con número 27068 del 10/10/2017 con monto de C\$ 6,000.00, Factura de crédito con número 27069 del 10/10/2017 con monto de C\$ 12,038.64, Factura de crédito con número 27070 del 10/10/2017 con monto de C\$ 6,880.00, Factura de crédito con número 27071 del 11/10/2017 con monto de C\$ 10,000.00, Factura de crédito con número 27072 del 11/10/2017 con monto de C\$ 6,500.00, Factura de crédito con número 27073 del 11/10/2017 con monto de C\$ 5,750.00, Factura de crédito con número 27074 del 11/10/2017 con monto de C\$ 11,933.21, Factura de crédito con número 27075 del 11/10/2017 con monto de C\$ 8,800.00, Factura de crédito con número 27076 del 11/10/2017 con monto de C\$ 5,500.00, Factura de crédito con número 27077 del 12/10/2017 con monto de C\$ 8,050.00, Factura de crédito con número 27078 del 12/10/2017 con monto de C\$ 9,203.41, Factura de crédito con número 27079 del 13/10/2017 con monto de C\$ 9,521.91, Factura de crédito con número 27080 del 13/10/2017 con monto de C\$ 8,500.00, Factura de crédito con número 27081 del 14/10/2017 con monto de C\$ 5,500.00, Factura de crédito con número 27082 del 14/10/2017 con monto de C\$ 3,100.00, Factura de crédito con número 27083 del 14/10/2017 con monto de C\$ 3,000.00; al pie del estado de cuenta se establece el abono de C\$ 10,599.32 a la factura 26605 quedando un saldo de la factura de C\$ 5,590.68, por lo tanto queda UN MONTO TOTAL DE DEUDA DE SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 CÓRDOBAS (C\$ 621, 835.51), setenta y ocho facturas de crédito de combustibles debidamente membretadas escritas con puño, letra y debidamente firmada por el señor L. ....



64



y desde ya adjunto como medio de pruebas estado de cuenta \_\_\_\_\_  
especifican el monto total adeudado, así mismo también adjunto como medios de prueba Recibo  
Oficial de Caja SERIE B No. 1448 debidamente membretada firmada y sellada en donde se  
muestra el abono recepcionado en fecha del 26 de octubre del año 2017, por un monto de CIENTO  
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CÓRDOBAS NETOS (C\$183,120.00 Córdobas) o su  
equivalente a Seis mil dólares (US\$ 6,000.00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica),  
así mismo adjunto los primeros abonos recibidos del señor \_\_\_\_\_  
, Recibo Oficial de Caja SERIE B No. 1337 debidamente membretada firmada y sellada en  
donde se muestra el abono recepcionado en fecha del 11 de septiembre del año 2017, por un  
monto de VEINTIDÓS MIL CINCUENTA CÓRDOBAS NETOS (C\$22,050.00 Córdobas) y el Recibo  
Oficial de Caja SERIE B No. 1384 debidamente membretada firmada y sellada en donde se  
muestra el abono recepcionado en fecha del 28 de septiembre del año 2017, por un monto de  
CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CÓRDOBAS NETOS (C\$ 163,820.00  
Córdobas), siendo su último abono recibido el de fecha 26 de octubre del año 2017, y desde  
entonces el señor \_\_\_\_\_ se ha negado en cancelar y honrar su  
compromiso con mi representado a pesar de todos los cobros realizado e inclusive en cumplimiento  
de Ley se le realizó la invitación ante la DIRAC de la que se levantó ACTA DE INASISTENCIA A  
MEDIACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS, a las doce  
treinta y tres minutos de las tarde con fecha del seis de noviembre del año 2017, bajo código de  
solicitud No. 004774, y desde ya pongo a su autoridad como medio probatorio.-

#### IV. SOLICITUD DE EMBARGO PREVENTIVO

1. Solicito Embargo Preventivo como medida cautelar porque existe suficiente temor de que el  
señor \_\_\_\_\_, quien es mayor de edad, casado, Transportista y  
quien se identifica con cedula de identidad número \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, y de este domicilio, en  
calidad de DEUDOR, NO TIENE la más mínima intención de honrar su deuda y prueba de ello es el  
hecho de que llevamos ya SEIS MESES Y VEINTIDÓS DÍAS a la fecha de mi solicitud, de NO  
PAGAR, NI ABONAR UN SOLO CORDOBA a su deuda, y preocupa más aun a mi representado el  
hecho que existen otras deudas y eso ES POSIBLE REVISAR EN LINEA LOS PROCESOS  
PENDIENTES A NOMBRE DEL SEÑOR

mi representado exige la medida cautelar ya que este señor está acostumbrado a jugar y



45



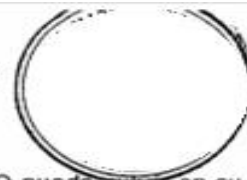
burlar a la justicia de manera descarada y sin pudor simplemente porque no le da de honrar la deuda adquirida a través de CRÉDITO DE COMBUSTIBLE A MI REPRESENTA CUYO MONTO ES LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 CÓRDOBAS (C\$ 621, 835.51), así mismo solicito a su autoridad la protección de los derechos de mi representado por estar en peligro eminente la pérdida de parte de su capital de inversión que atenta eminentemente la calidad de sus ingresos como parte primordial de su negocio y que efectivamente puede causar daños colaterales a sus colaboradores porque es capital considerable el que el señor \_\_\_\_\_

se **NIEGA A PAGAR** desestabilizando completamente el rubro de su negocio por ende este monto de **SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 CÓRDOBAS (C\$ 621, 835.51)** del principal, más los intereses respectivos, más las costas.- Suma de dinero que hasta la fecha no han cancelado a pesar de agotar los requerimientos de pago que se le ha realizado, y cabe señalar que conforme al artículo 407 CPCN la cual he cumplido, por la que tengo y presento **ACTA DE INCOMPARECENCIA ANTE LA DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTO (DIRAC)**. Su autoridad es por ello que mi representado teme fundadamente que dicho señor \_\_\_\_\_

enajenen sus bienes con el propósito de dejar al descubierto la suma emprestada, y es por tal razón que comparezco ante su Autoridad a solicitar que, previa **CAUCION ECONOMICA** de Ley, decrete **EMBARGO PREVENTIVO** en contra de bienes propios del **DEUDOR**, hasta por la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 CÓRDOBAS (C\$ 621, 835.51)**, **MÁS UNA TERCERA PARTE DE DICHA CANTIDAD PARA RESPONDER POR LAS COSTAS** equivalente a **DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 de Córdoba (C\$ 207,278.50 DE CORODABAS)**, más intereses legales equivalentes **CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 37/100 DE CÓRDOBAS (C\$ 59,074.37)**, más intereses moratorios del 6 % equivalente a **TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 19/100 DE CÓRDOBAS (C\$ 37,310.19)**, **QUEDANDO UN GRAN TOTAL DE NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CÓRDOBAS CON 57/100 (C\$ 925,498.57)**. Por ende su señoría le solicito se embarguen los vehículos al cual adjunto y que desglosare más adelante en aras de que me sirvan para cancelar el monto adeudado o bien que me sirvan para abonar en caso de que no pueda cancelar en su totalidad la deuda o que los siete Certificados Registrales de Vehículos que se encuentra a



66



nombre de

, NO pueda cubrir en su

totalidad dicha deuda, y es por eso que también solito se levante el sigilo bancario con el principal objetivo que si hay o existe alguna cuenta de ahorro a nombre de

....., me sirva para completar la cancelación de la deuda. PIDO a su autoridad que se levante el sigilo bancario a todos los bancos BAC, BDF, LA FISE BANCENTRO, BANPRO, PROCREDITO, con el único propósito de buscar cuentas bancarias y exista suficiente capital económico para poder cubrir la cancelación total de la deuda puesto que los bienes muebles o vehículos que pongo a su disposición no son suficientes, para cancelar el monto adeudado el cual desgloso de SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 CÓRDOBAS (C\$ 621, 835.51), MÁS UNA TERCERA PARTE DE DICHA CANTIDAD PARA RESPONDER POR LAS COSTAS equivalente a DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 de Córdoba (C\$ 207,278.50 DE CORODABAS), más intereses legales equivalentes CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 37/100 DE CÓRDOBAS (C\$ 59,074.37), más intereses moratorios del 6 % equivalente a TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 19/100 DE CÓRDOBAS (C\$ 37,310.19), QUEDANDO UN GRAN TOTAL DE NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CÓRDOBAS CON 57/100 (C\$ 925,498.57).- solicito la admisibilidad de solicitud de la medida cautelar por NO existir otra forma que no sea atreves de la Vía Judicial como único medio para que el señor ..... , pueda honrar su deuda y en caso que existe incumplimiento se proceda conforme lo ordenado por su autoridad.

#### V. OFRECIMIENTO DE CAUCIÓN ECONÓMICA

**CAUCIÓN ECONÓMICA DE LEY:** como Caución Económico de este EMBARGO PREVENTIVO propongo la cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CÓRDOBAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (C\$12,427.75), la cantidad se encuentra debidamente deposita en el BANCO BANPRO a la cuenta de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia bajo la cuenta Número 10010306171103, con Número de Transacción 91101141, dicha cantidad fue depositada a las tres y catorce minutos de la tarde en fecha del 18 de Diciembre del año Dos mil diecisiete, así mismo su señoría OFREZCO COMPLEMENTO A LA CAUCIÓN ECONÓMICA QUE SE ENCUENTRA DEPOSITADA EN LA CUENTA del BANCO BANPRO, y desde ya OFREZCO DE COMPLEMENTO conforme el articulo 221 parte in fine del CPCN el monto de CIENTO DOCE MIL CIENTO



67



SESENTA Y UN CÓRDOBAS CON 22/100 DE CÓRDOBAS EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL ADEUDADO.-

#### VI. BONIFICACIÓN

Este EMBARGO PREVENTIVO será bonificado con demanda que interpondré en este mismo JUZGADO DE DISTRITO ORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE MANAGUA.-

#### VII. PETICIÓN

1. PIDO A SU AUTORIDAD ADMITA LA PRESENTE SOLICITUD DE EMBARGO PREVENTIVO como medida cautelar por temor fundado previamente explicado ante la falta de pago y de interés del deudor de querer honrar su compromiso de cancelar dicha deuda.
2. INTERVENCIÓN DE LEY: Solicito ser tenido como tal apoderado y se me brinde la INTERVENCIÓN DE LEY COMO EN DERECHO CORRESPONDIENTE y de que el Poder de Representación que acompaño en original y copia certificada sea razonado en los autos respectivos.-
3. De a lugar a la presente solicitud de Embargo Preventivo hasta por la cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 CÓRDOBAS (C\$ 621, 835.51), MÁS UNA TERCERA PARTE DE DICHA CANTIDAD PARA RESPONDER POR LAS COSTAS equivalente a DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 de Córdoba (C\$ 207,278.50 DE CORDOBAS), más intereses legales equivalentes CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 37/100 DE CÓRDOBAS (C\$ 59,074.37), más intereses moratorios del 6 % equivalente a TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 19/100 DE CÓRDOBAS (C\$ 37,310.19), QUEDANDO UN GRAN TOTAL DE NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CÓRDOBAS CON 57/100 (C\$ 925,498.57).
4. Que se embarguen todos los bienes muebles como son los vehículos que se encuentran a nombre del señor \_\_\_\_\_ aunque estamos seguros que los vehículos que procedo a describir NO SON SUFICIENTES PARA CANCELAR LA DEUDA, se desglosa de la siguiente forma y que demuestran que el señor \_\_\_\_\_ es dueño de los siguientes vehículos que a continuación detallo: a) certificado registral de vehículo de la Policía Nacional con número 0009-2017-27659, que se identifica según Certifica que un Vehículo: MICROBUS, Placa: M 213231, Marca: TOYOTA, Modelo: HIACE, Tipo: PASAJEROS, Uso: PARTICULAR, Chasis:



LB



JTFSK22P00022064, Año FAB: 2014, Pasajeros: 16, Gravamen: NINGUNO, Color: PLATA, MOTOR: 5L6240175, Combustible: DIESEL, Cilindro: 4, Servicio: Privado, se encuentra inscrito desde: 18/05/2017; b) certificado registral de vehículo de la Policía Nacional con número 0009-2017-27660, que se identifica según Certifica que un Vehículo: MICROBUS, Placa: M 221284, Marca: HYUNDAI, Modelo: PASAJEROS, Tipo: PASAJEROS, Uso: PARTICULAR, Chasis: KMJWA37HAFU672115, Año FAB: 2015, Pasajeros: 12, Gravamen: INVERAUTO S.A, Color P: BLANCO, MOTOR: D4BHE023411, Combustible: DIESEL, Cilindro: 4, Servicio: Privado, se encuentra inscrito desde: 23/09/2014; c) certificado registral de vehículo de la Policía Nacional con número 0009-2017-27661, que se identifica según Certifica que un Vehículo: AUTOMOVIL, Placa: M 280980, Marca: HONDA, Modelo: CITY4DR LX-A 5MT, Tipo: SEDAN, Uso: PARTICULAR, Chasis: MRHGM2520DP060064, Año FAB: 2013, Pasajeros: 5, Gravamen: BANCO LA FISE BANCENTRO, Color P: BLANCO, MOTOR: L15A77803839, Combustible: GASOLINA, Cilindro: 4, Servicio: Privado, se encuentra inscrito desde: 15/05/2017; d) certificado registral de vehículo de la Policía Nacional con número 0009-2017-27662, que se identifica según Certifica que un Vehículo: AUTOBUS, Placa: M 286710, Marca: BLUE BIRD, Modelo: ALL AMERICAN, Tipo: PASAJEROS, Uso: PARTICULAR, Chasis: 206068, Año FAB: 2007, Pasajeros: 26, Gravamen: NINGUNO, Color P: MULTICOLOR, MOTOR: 46156636, Vin: 1BABNCPA57F206068, Combustible: DIESEL, Cilindro: 6, Servicio: Privado, se encuentra inscrito desde: 21/08/2017; e) certificado registral de vehículo de la Policía Nacional con número 0009-2017-27663, que se identifica según Certifica que un Vehículo: Automóvil, Placa: M 238674, Marca: TOYOTA, Modelo: YARIS, Tipo: SEDAN, Uso: PARTICULAR, Chasis: MR2BW9F3701096600, Año FAB: 2015, Pasajeros: 5, Gravamen: BAC, Color P: Gris Azul, MOTOR: 2NZ7508206, Combustible: Gasolina, Cilindro: 4, Servicio: Privado, se encuentra inscrito desde: 23/07/2015; f) certificado registral de vehículo de la Policía Nacional con número 0009-2017-27664, que se identifica según Certifica que un Vehículo: MICROBUS, Placa: M 236066, Marca: FOTON, Modelo: VIEW, Tipo: PASAJEROS, Uso: PARTICULAR, Chasis: LVCB2NBA9FS230671, Año FAB: 2015, Pasajeros: 16, Gravamen: BAC, Color P: PLATEADO, MOTOR: ISF8129P89662144, Combustible: DIESEL, Cilindro: 4, Servicio: Privado, se encuentra inscrito desde: 24/06/2015; g) certificado registral de vehículo de la Policía Nacional con número 0009-2017-27665, que se identifica según Certifica que un Vehículo: AUTOMOVIL, Placa: M 189225, Marca: TOYOTA, Modelo: COROLLA, Tipo: SEDAN, Uso: PARTICULAR, Chasis: JTDBVA2E80J009291, Año FAB: 2012, Pasajeros:





69



5, Gravamen: BAC, Color P: BLANCO, MOTOR: 1ZR1041107, Combustible: GASOLINA, Cilindro: 4, Servicio: Privado, se encuentra inscrito desde: 26/11/2014.

5. Así mismo PIDO a su autoridad que se levante el sigilo bancario a todos los bancos BAC, BDF, LA FISE BANCENTRO, BANPRO, PROCREDITO, con el principal objetivo de buscar cuentas bancarias o de ahorro a nombre del señor \_\_\_\_\_

en aras de complementar las cancelación de la deuda puesto que los bienes muebles o vehículos a su nombre no serán suficiente para cancelar la totalidad de la deuda que he puesto a su disposición NO SON SUFICIENTES para cancelar el monto de SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 CÓRDObAS (C\$ 621, 835.51), MÁS UNA TERCERA PARTE DE DICHA CANTIDAD PARA RESPONDER POR LAS COSTAS equivalente a DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 de Córdobas (C\$ 207,278.50 DE CORODABAS), más intereses legales equivalentes CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 37/100 DE CÓRDObAS (C\$ 59,074.37), más intereses moratorios del 6 % equivalente a TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 19/100 DE CÓRDObAS (C\$ 37,310.19), QUEDANDO UN GRAN TOTAL DE NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CÓRDObAS CON 57/100 (C\$ 925,498.57).

#### VIII. MEDIOS PROBATORIOS

Señor(a) Juez, de conformidad al arto.267, 268, 269, 274, 276, 277 CPCN establece que las pruebas serán propuestas y acompañadas junto con el escrito de demanda, le solicito a su autoridad que admita las siguientes pruebas testificales y documentales a favor de mi representado, las cuales adjunto en original y copias de ley al presente escrito, para que una vez cotejadas me sean devueltas las originales:

#### PRUEBAS TESTIFICALES:

1. \_\_\_\_\_ mayor de edad, soltero, de oficio Administrador de la Gasolinera UNO BATAHOLA, quien se identifica con cedula de identidad número cero, cero, uno \_\_\_\_\_ C), con dirección domiciliar Bo. Nueva Libia, Rotonda La Virgen 1 C. O 2 C.S. Con esta testimonial demostrare suficiente convicción en audiencia relacionada con mi demanda, dejando a salvo el de aclaraciones y complementaciones al momento del interrogatorio.
2. \_\_\_\_\_ mayor de edad, casado, de oficio asistente de Administrador de la Gasolinera UNO BATAHOLA, quien se identifica con cedula de identidad



10



número cero, cero, uno guion dos, nueve, cero, cinco, siete, seis guion cero, cero, cuatro  
"C" (No. 001-290576-0048 C), con dirección domiciliar Bo. Villa Progreso, costado sur Colegio el  
Progreso ½ C.O Casa No. C- 419. Con esta testimonial demostrare suficiente convicción en  
audiencia relacionada con mi demanda, dejando a salvo el de aclaraciones y complementaciones al  
momento del interrogatorio.

3. mayor de edad, soltero, de oficio Bombero de la Gasolinera  
UNO BATAHOLA, dos,  
siete, uno, con  
dirección domiciliar Bo. San Judas, del Centro de Salud ½ C.O, ½ C.S. Con esta testimonial  
demostrare suficiente convicción en audiencia relacionada con mi demanda, dejando a salvo el de  
aclaraciones y complementaciones al momento del interrogatorio.

Adjunto desde ya las tres fotocopias de las tres cédulas respectivamente.

#### VIII. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Adjunto al Presente Embargo Preventivo:

1. Poder de Representación: Escritura Número Treinta y tres (33) : **PODER DE REPRESENTACIÓN**,  
otorgada en la ciudad de Managua a las siete y cincuenta de la mañana del día veintitrés de mayo  
del año dos diecisiete, ante la Notaria Pública: \_\_\_\_\_, demuestro ser  
la **apoderada Especial de Representación** del señor (\_\_\_\_\_).
2. Acta de Incomparecencia ante la **DIRAC** con Código de solicitud 004774, documento emitido a  
las doce y treinta minutos de la tarde del seis de noviembre del año dos mil diecisiete.
3. 78 Facturas de créditos debidamente membretadas en fiel cumplimiento a la ley.
4. Estado de Cuenta explicado conforme fecha y número de factura de crédito pendiente de cancelar  
a nombre del señor \_\_\_\_\_.
5. 7 Certificados Registral de Vehículo otorgado por la Policía Nacional.
6. Carta de Solicitud de Crédito en hoja membretada de la empresa \_\_\_\_\_ y quien firma  
al pie del documento es el señor \_\_\_\_\_, en calidad de Gerente  
General.
7. Testimonio de Escritura Publica Numero Cincuenta y Siete (57) Contrato de Arrendamiento de  
Bien Inmueble, Suministro de Combustible y Comodato de Equipos, otorgado en la Ciudad de  
Managua, a las tres de la tarde del día ocho de Octubre del año dos mil quince, ante los oficios del  
Notario Público: \_\_\_\_\_, demuestro la Concesión que mi





31

representado el señor \_\_\_\_\_, recibió en calidad de concesionario de la **Sociedad UNO NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA.-**

8. Consulta de Obligaciones a nombre del señor I. \_\_\_\_\_ como **PERSONA NATURAL** Emitido por la DGI.

9. Minuta de Depósito del Banco BANPRO con Número de Transacción 91101141, a las tres con catorce minutos de la tarde con fecha del 18 de diciembre del año dos mil diecisiete.

10. Adjunto los tres cobros notariales, en la que consta el hecho de agotar los cobros administrativos.

11. Adjunto Original más copias de Ley del recibo oficial de caja serie B con No. 1448, con ello demuestro el abono recibido por un monto de **C\$ 183, 120.00** con fecha del 26 de octubre del año 2017. **Recibo Oficial de Caja SERIE B No. 1337** debidamente membretada firmada y sellada en donde se muestra el abono recepcionado en fecha del **11 de septiembre del año 2017**, por un monto de **C\$22,050.00 Córdobas** y el **Recibo Oficial de Caja SERIE B No. 1384** debidamente membretada firmada y sellada en donde se muestra el abono recepcionado en fecha del **28 de septiembre del año 2017**, por un monto de **C\$ 163,820.00 Córdobas**.

12. Copias simple de cédulas de identidad del demandante \_\_\_\_\_.

13. copias simple de cédulas de identidad del demandado \_\_\_\_\_.

#### IX. LUGAR PARA NOTIFICAR A LAS PARTES

**ACTOR:** Lugar para recibir notificaciones en la siguiente dirección: **RESIDENCIAL LAS DELICIAS CASA X2-736, Managua.**

**DEMANDADO:** Villa Miguel Gutiérrez, Semáforo 1/4 cuadra al Este, Casa No. 561

Dado en la Ciudad de Managua a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil Dieciocho.-

\_\_\_\_\_

Apoderada C.S.

21/5/18.

21/5/18.

Número de Asunto: 002507-ORM4-2018-CO  
 Número de Asunto Principal: 002505-ORM4-2018-CO  
 Número de Asunto Antiguo:

Juzgado Primero Distrito Civil Oral Circunscripción Managua, veinticinco de Mayo del dos mil dieciocho. Las nueve y diecisiete minutos de la mañana

**ANTECEDENTES DE HECHO:**

1.-El día lunes, veintiuno de Mayo del dos mil dieciocho, con hora de la una de la tarde, fue solicitada la medida cautelar de embargo preventivo de bienes por la licenciada \_\_\_\_\_, mayor de edad, casada, abogada y de este domicilio, identificada con cedula de identidad ciudadana numero \_\_\_\_\_, Apoderada General Judicial del señor \_\_\_\_\_, a quien se le concede intervención de ley.

2.- El señor \_\_\_\_\_, en calidad de Gerente General de la Estación de Servicio Uno Batahola, ubicada en el Kilometro cuatro Carretera Sur, manifestó que solicita la medida cautelar de embargo preventivo de bienes, del señor \_\_\_\_\_, hasta por la cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CORDOBAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE CORDOBAS (C\$ 925,498.57) que es en deber a plazo vencido en concepto de venta al crédito de gasolina.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

1.- El art. 372 CPCN, establece los requisitos de solicitud de medidas cautelares.  
 2.- El art. 375 CPCN señala que la persona solicitante deberá ofrecer caución suficiente para garantizar el pago de costas daños y perjuicios ocasionados a la parte demanda por su adopción y cumplimiento. Así mismo el art. 387 CPCN señala la exención de la prestación de caución en los casos señalados en dicha norma.  
 3.- En el presente caso se observa: 1) la medida cautelar fue solicita en contra del ciudadano \_\_\_\_\_, pero según documentación presentada el señor \_\_\_\_\_, solicito un límite crédito hasta por la cantidad de Ochenta Mil córdobas ( C\$ 80,000) para la compra-venta de gasolina al actor, como Gerente General de la persona jurídica KADOSH TOURS ( Servicio Exclusivo de Transporte) y así se estableció la relación entre el actor y KADOSH TOURS (Servicio Exclusivo de Transporte), según documentos privados ( Facturas de la Estación de Servicio UNO BATAHOLA); 2) El actor \_\_\_\_\_, solicita la medida cautelar hasta por la cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CORDOBAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE CORDOBAS (C\$ 925,498.57) , en el que se incluye, obligación principal, una tercera partes en concepto de costas judiciales, intereses corriente y

un seis por ciento de intereses moratorios, sin embargo en los documentos privados ( Facturas ) no se establece el porcentaje de intereses corrientes y moratorios, y las costas judiciales, deben de ser tasadas por secretaria judicial, al tenor de los artos 219 al 230 CPCN, la cual no puede exceder del veinticinco por ciento del valor de lo litigado ( arto 221 CPCN) y no la tercera parte solicitada por el actor; 3) El actor .....λ, debe de ofrecer caución suficiente, para garantizar el pago de las costas causadas en el incidente, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandada, arto 375 CPCN, la cual no ha ofrecido, por que se limito a ofrecer un veinte por ciento sobre el principal de la obligación reclamada, y debe ser las costas sobre el valor de lo litigado, que seria sobre la cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CORDOBAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE CORDOBAS (C\$ 925,498.57) , mas resarcimiento de los daños y perjuicios, que deben ser caucionados bajo el principio de proporcionalidad en base al arto 25 numeral 1 CPCN.


FALLO:

- 1.- Se inadmite a trámite la solicitud de medida cautelar realizada por la licenciada .....λ, mayor de edad, casada, abogada y de este domicilio, identificada con cedula de identidad ciudadana numero 28 .....λ, Apoderada General Judicial del señor .....λ, a quien se le concede intervención de ley, por cuanto la misma no cumple con los requisitos y no cumple con los presupuestos.
- 2.- Dejase a salvo el derecho de la parte solicitante la licenciada .....λ, Apoderada General Judicial del señor .....λ, para que lo haga valer en debida forma.
- 3.- Contra esta providencia no cabe recurso alguno conforme el art. 379 párrafo cuarto CPCN.
- 4.- Notifíquese.

  
Adriana Maria Cristina Huete López.

Jueza Primero Distrito Civil Oral.

Circunscripción Managua.

  
Yasna Yamileth López Brenes.

Secretaria.

ADMAHULO